

PROVINCIA DE SALTA
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES



**“ESTUDIO, RECOPIACION Y COMPENDIO
DE LA NORMATIVA MINERA NACIONAL Y
PROVINCIAL Y SU RELACION CON EL
DERECHO TRIBUTARIO”**

TOMO II

MAYO DE 2.006

Dra. FERNANDA V. HOLMQUIST.

INDICE GENERAL

TOMO II

TITULO II EL DERECHO DE MINERIA EN LA LEGISLACION PROVINCIAL

CAPITULO I:

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL DERECHO MINERO EN EL AMBITO PROVINCIAL

DECRETO LEY N° 660/57, Autoridad de aplicación, Funciones	1
Texto del Decreto 660/57.-	3
DECRETO 10727/57 y 14249/58	
reglamentarios del Dec. Ley 660/57	7
DECRETO 10727/57 - Texto del decreto 10727/57	7
DECRETO 14249/58	8
Texto del decreto 14249/58	10
Trámite Minero Exploración	12
Del Trabajo Formal	16
Solicitudes de Concesión de Minas	
por Manifestación de Descubrimiento	17
Solicitudes de Concesión de Minas nuevas o Estancadas	18
Del Remate de Minas Caducas	20
De la Mensura y Demarcación de las Pertenencias	22
De Las Servidumbres	24
De Lo Contencioso Minero – Demanda y Contestación	24
De la Prueba y Resolución	25
De los Recursos de Reposición y Apelación	26
Del Procedimiento en Segunda Instancia.-	26
De Lo Contencioso Administrativo	27
Disposiciones Varias	27
Libros	28
DECRETO 5976/59	29
Texto del Decreto 5976/59	30

CAPITULO II:

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS MINERO Y LEYES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES GENERALES	32
ACTOS PROCESALES: NOTIFICACIONES, RESOLUCIONES Y RECURSOS	33
PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS	36
Permiso de exploración o cateo	37
CATEGORIAS DE MINAS, MINAS VACANTES	39
Minas de Primera Categoría	39
Minas de Segunda Categoría	40
Sustancias de Tercera Categoría	41
Minas Vacantes	42
SERVIDUMBRES	43

TEXTO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS MINEROS	43
Título I - Capítulo I Disposiciones Generales	43
Capítulo II - Actos Procesales	44
Capítulo III - Notificaciones	47
Capítulo IV - Plazos	48
Capítulo V - Resoluciones	49
Capítulo VI- Permisos y Concesiones Mineras	49
Capítulo VII - Normas de Protección Ambiental	50
Título II - Capítulo I - Permiso de Exploración o Cateo	50
Capítulo II - Investigación desde Aeronaves	54
Capítulo III- Socavon de Exploración	54
Título III - Capítulo I - Minas de Primera Categoría	55
Capítulo II - Minas de Segunda Categoría	57
Capítulo III - Sustancias de Tercera Categoría	59
Título IV- Capítulo I -	61
Capítulo II Minas Caducas por falta de pago decanon	62
Capítulo III - Minas Vacantes	62
Capítulo IV- Socavon	64
Capítulo V - Minas Nucleares	64
Título V	
Capítulo I -Mensura y demarcación de pertenencias	64
Capítulo II - Diligencia de Mensura	65
Título VI-	
Capítulo I - ServidumbreS	66
Título VII	
Capítulo I - Expropiación	67
Título VIII	
Capítulo I - Registro de Documentos y Transferencia de Derechos Mineros	68
Título IX	
Capítulo I-Infracciones Trámite y Ejecución	69
Título X	
Capítulo I- Derecho de Vista de las Concesiones Mineras Colindantes	70
Título XI	
Capítulo I- Contencioso Minero	70
Título XII	
Capítulo I- Recursos	71
LEY 6026 DE PROMOCION MINERA	72
Texto de la Ley 6026/82.-	73
LEY 6294 DE REGALIAS MINERAS	78
Texto de la Ley N° 6294	79
LEY 6712 DE ADHESION A LAS LEYES 24.196 Y 24224	
Texto de la Ley 6712/93	82
LEY 7221	83
Texto de la Ley N° 7.221	84

CAPITULO III:

LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE ARIDOS EN LA PROVINCIA DE SALTA	86
DECRETO 2495/97	87
Texto del Decreto N° 2495/97	88
ANEXO AL DECRETO 2495	95
DECRETO 1150	97
Texto del Decreto N° 1150/98	99
DECRETO 334	104
Texto del Decreto N° 334/02	105
RESOLUCIONES 11/02, 076/02 Y 074/04 - DE LA SECRETARIA DE MINERIA Y RECURSOS ENERGETICOS.	108
Resolución 11/02	108
Texto de la Resolución 11/02	108
Resolución 075/02	110
Resolución 076/02	111
Texto de la Resolución 076/02	111

TITULO III - REGIMEN TRIBUTARIO

APLICABLE AL DERECHO MINERO

CAPITULO I:

LINEAMIENTOS GENERALES:

INTRODUCCION	113
EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD FISCAL: LEY N° 24196	114
Estabilidad Fiscal	115
CUADRO TRIBUTARIO GENERAL	118
Ley 20.628 – Impuesto a las ganancias	122
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	123
Impuesto al Valor Agregado	123
Ley 24.402 Financiamiento para el pago del I.V.A	124
Decreto Nacional 779/95	125
REGIMEN ADUANERO	126
Nomenclatura Común del MERCOSUR	131

CAPITULO II:

DEVOLUCION DEL IVA A LAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS	134
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES	134
DESCRIPCION GENERAL DEL REGIMEN.	
PRINCIPALES CARACTERISTICAS	134
BENEFICIOS OTORGADOS	137
ACTIVIDADES, BIENES Y SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL BENEFICIO	138
BENEFICIARIOS	140
PRESENTACION PREVIA AL INICIO	140
DE ACTIVIDADES EXPLORATORIAS	140
REQUISITOS Y CONDICIONES A CUMPLIR	140

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION.	141
INFORMACION A SUMINISTRAR	
CIRCUITO ADMINISTRATIVO PARA CONCRETAR	144
LA DEVOLUCION. PLAZOS	
SITUACION EXCEPCIONAL. REGIMEN DE DEVOLUCION	147
SUJETO A PREVIA FISCALIZACION	149
Anexos que deben presentarse	
CANTIDAD DE PRESENTACIONES EN CADA AÑO -	149
MOMENTO DE PRESENTACION	
DEVOLUCION DEL IVA PARA INVERSIONES EN	150
EXPLORACION EFECTUADAS HASTA EL 27/02/04.	150
Decreto 1089/2003	178
Ley 24.402	181
Resolución Conjunta N° 1641 y 11/2004	198
Resolución N° 83/04 (1/10/2004)	201
Resolución General 1761	

TITULO II

EL DERECHO DE MINERIA

EN LA LEGISLACION

PROVINCIAL

CAPITULO I:

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL DERECHO MINERO EN EL AMBITO PROVINCIAL

DECRETO LEY N° 660/57, AUTORIDAD DE APLICACIÓN, FUNCIONES.-

El Decreto 660/57, fue promulgado en Salta el 8 de Octubre de 1957. En la exposición de motivos se consagra cuales fueron los fundamentos que llevaron a su dictado a saber: 1) Que el patrimonio minero de la provincia ha adquirido singular importancia en los últimos tiempos y con perspectivas de crecimiento en el futuro; 2) Que es función del Poder Ejecutivo la administración del patrimonio provincial; 3) Que la actividad minera participa del triple carácter de ser Interés público, fiscal y particular; 4) Que para salvaguardar dichos intereses la Autoridad Minera debe ser organizada de manera tal que contemple adecuadamente a aquellos; 5) Que la salvaguarda del interés público y fiscal en la actividad minera hace necesaria una supervisión constante de carácter técnico económico y de seguridad laboral, en cada una de las etapas del proceso.-

Dichos argumentos, y en virtud de que más de un año antes, es decir el 21 de marzo de 1957, ya se había creado el Juzgado de Minas y la Dirección Provincial de Fomento Minero, mediante Decretos Leyes 430 y 432, fueron determinantes para el dictado del Dec. 660/57 el cual viene a establecer la Autoridad de Aplicación del Derecho Minero en la Provincia de Salta, estableciendo su composición y funciones.-

El decreto comienza reglando que la autoridad de aplicación del derecho minero estará a cargo de una Dirección de Minas y un Juzgado de Minas. La primera es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, constituida por un Director, con título de Ingeniero en Minas o Civil, con más de tres años de práctica en actividades mineras, del que dependerán los Inspectores de Minas y demás personal técnico que establezca la reglamentación. Sus resoluciones pueden ser recurridas por ante el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, y a su vez, las resoluciones de ésta por la vía contencioso-administrativo.-

Entre las funciones más importantes podemos destacar:

Dictar los reglamentos de policía minera;

Ejercer funciones de contralor y vigilancia sobre las concesiones mineras;

Controlar que los trabajos de explotación, se ejecuten dentro de las normas establecidas, tendientes a explotaciones racionales y conservativas de las reservas Mineras;

Confeccionar y publicar el padrón minero y establecer las tributaciones

Vigilar el cumplimiento de los contratos o convenios que en materia minera, haya suscrito la Provincia;

Informar al juez de Minas en toda solicitud de concesión minera, sobre si existen o no impedimentos a su admisión; y requerirle la caducidad de las concesiones que hubieren incurrido en ella;

Y en definitiva, todos aquellos actos y trabajos que fueran necesarios para el mejor desarrollo técnico económico de la Minería de la Provincia.

A su vez, el Juzgado de Minas es un órgano dependiente del Poder Judicial, constituido por un juez letrado, un Escribano Secretario y el personal adscripto que establezca la reglamentación, cuyas resoluciones y sentencias son apelables por ante el Corte de Justicia de la Provincia. Entre sus funciones más importantes podemos destacar:

Recibir las solicitudes de permisos de exploración y de trabajo formal y dictar las resoluciones que correspondan, otorgando o denegando un permiso.

Decretar la suspensión de los trabajos de exploración previo informe de la Dirección de Minas;

Fijar indemnizaciones a los propietarios por los daños causados por exploradores;

Recibir las manifestaciones de descubrimiento proseguir su tramitación legal

Tiene a su cargo los registros de propiedad minera

Debe declarar la caducidad y vacancia de las concesiones mineras, a requerimiento de la Dirección de Minas y ordenar los remates de ella;

Recibir las peticiones de mensuras de pertenencias mineras y proseguirlas hasta su inscripción en el Registro correspondiente.

Y en general, entender en todas las cuestiones de derechos emergentes del Código de Minería, leyes y decretos de la materia.-

Texto del Decreto 660/57.-

SALTA, 8 de octubre de 1957.

VISTO los Decretos-Leyes Nros. 430 y 432 del 21 de marzo de 1957, por los que se creó el Juzgado de Minas y la Dirección Provincial de Fomento Minero; y

CONSIDERANDO:

Que el patrimonio minero de la Provincia de Salta ha adquirido singular importancia en los últimos tiempos y con perspectivas de un mayor desarrollo en un futuro inmediato;

Que es función del Poder Ejecutivo la administración y preservación del patrimonio provincial y en particular el del sector minero por su carácter especial;

Que el laboreo minero participa del triple carácter ser de interés público, fiscal y particular;

Que para salvaguardar los respectivos intereses, garantizados por el Código de Minería en cada uno de sus ámbitos, la Autoridad Minera, a través de la cual el Poder Ejecutivo ejerce sus funciones, debe ser organizada en forma que contemple adecuadamente aquellos intereses;

Que la salvaguarda del interés público y fiscal en el laboreo minero hace necesaria una supervisión constante y activa de carácter técnico económico y de seguridad laboral, en cada una de las fases de su proceso;

Que el actual ordenamiento de la autoridad minera, no contempla adecuadamente estos preceptos, lo que hace necesario su modificación y adecuación mediante un reagrupamiento de sus funciones y servicios.

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta

En ejercicio del Poder de la Policía

DECRETA:

Artículo 1°. – La autoridad minera de la Provincia de Salta será ejercida por intermedio de una Dirección de Minas y un Juzgado de Minas.

Art. 2° - La dirección de Minas será una repartición técnica Administrativa, dependiente del Poder Ejecutivo, que ejercerá toda la autoridad minera que a éste le corresponda con las excepciones que esta ley establece.

Art. 3°. – Son funciones específicas de la Dirección de Minas:

a) Dictar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los reglamentos de policía minera e aplicación en todo el territorio dela Provincia;

b) Someter a la aprobación del Poder Ejecutivo, en el último trimestre de cada año un plan orgánico de actividades mineras a cumplir en el año siguiente;

c) Ejercer activa vigilancia sobre las concesiones de cateo a fin de que los trabajos de exploración, que el código establece como requisito esencial, sean instalados en la forma de plazos requeridos, así como su subsiguientes continuidad;

d) Controlar los trabajos de explotación, para que se ejecuten dentro de las normas establecidas, tendientes a explotaciones racionales y conservativas de las reservas Mineras;

e) Imponer en las labores las condiciones mínimas de seguridad e higiene, ventilación y desagües, circulación, etc.;

f) Fijar en su caso, el ritmo de las explotaciones de acuerdo a la productividad de los Yacimientos y a las necesidades del mercado;

g) Fijar el monto de las inversiones de capital dentro de los límites fijados por la Ley;

h) Confeccionar y publicar el padrón minero y establecer las tributaciones que en forma de cánones y regalías corresponden a la Provincia vigilando y controlando su percepción;

i) Vigilar el cumplimiento de los contratos o convenios que en materia minera, haya suscrito la Provincia;

j) Elevar y mantener al día un registro gráfico de las concesiones mineras y el archivo de muestras;

k) Informar al juez de Minas en toda solicitud de concesión minera, sobre si existen o no impedimentos a su admisión;

- l) Requerir al Juez de Minas la caducidad de las concesiones que hubieren incurrido en ella;
- m) Ejecutar o controlar las mensuras mineras de acuerdo a la reglamentación correspondiente;
- n) Llevar y mantener al día una carpeta para cada concesión minera, que refleje en todo momento el proceso y estado de cada una de ellas;
- o) Todos los trabajos geológicos, topográficos, estadísticos, etc., necesarios para el mejor desarrollo minero confeccionando los mapas y estadísticas correspondientes;
- p) Asesorar a los concesionarios que lo soliciten en la conducción de los trabajos mineros y organizar el laboratorio de análisis y ensayos mineros;
- q) Todos los demás actos que fueran necesarios para el mejor desarrollo técnico económico de la Minería de la Provincia.

Art. 4°. – De las resoluciones de la Dirección de Minas podrá recurrirse ante el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas y de las resoluciones de ésta por la vía contencioso-administrativo en los plazos y formas que se establezca en la reglamentación de este Decreto-Ley.

Art. 5°. – El Juzgado de Minas que formará parte del Poder Judicial, tendrá las siguientes funciones además de las que jurisdiccionalmente le correspondan para entender en todas las cuestiones que se promuevan con motivo de la actividad minera.

- a) Recibir las solicitudes de permisos de exploración y de trabajo formal y previo en informe de la Dirección de Minas sobre el estado de la zona solicitada, el trámite que establece el código y dictar las resoluciones que correspondan, otorgando o denegando un permiso, remitirá una copia de la resolución a la Dirección de Minas para la vigilancia de su cumplimiento;
- b) Decretar la suspensión de los trabajos de exploración previo informe de la Dirección de Minas;
- c) Fijar las indemnizaciones que correspondan a los propietarios por los daños causados por exploradores;

d) Recibir las manifestaciones de descubrimiento y previo informe de la Dirección de Minas sobre el estado de la zona y la clasificación de descubrimiento, proseguir su tramitación legal hasta la fecha del registro la que será comunicada a la Dirección de Minas a los efectos de la ejecución legal;

e) Tendrá a su cargo los registros de propiedad minera que la reglamentación de este decreto-ley establece;

f) Declarar la caducidad y vacancia de las concesiones mineras, a requerimiento de la Dirección de Minas y ordenar los remates de ella;

g) Entender, siguiendo el mismo procedimiento en todas las solicitudes de concesión de estacas minas, ampliación de pertenencias, mejoras, demasías, socavones, etc.;

h) Recibir las peticiones de mensuras de pertenencias mineras imprimiéndoles el trámite establecido por el Código y las Leyes reglamentarias hasta su inscripción en el Registro correspondiente, esta inscripción se comunicará a la Dirección de Minas a los efectos consiguientes;

i) Resolver sobre los derechos de adquisición de los terrenos por parte de los mineros y sobre el establecimiento de las servidumbres que se soliciten;

j) Entender en todas las cuestiones de derechos emergentes del Código de Minería, leyes y decretos de la materia;

Art. 6°. – Las resoluciones y sentencias del Juzgado de Minas serán apelables ante la Corte de Justicia de la Provincia.

Art. 7°. - El Juzgado de Minas estará constituido por un juez letrado, un Escribano Secretario y el personal adscripto que establezca la reglamentación de este decreto-ley.

Art. 8°. – El Juez de Minas y el Escribano Secretario, serán nombrados y tendrán las mismas calidades y prerrogativas que los demás jueces y secretarios de los demás juzgados de Primera Instancia.

Art. 9° - La Dirección de Minas estará constituida por un Director, con título de Ingeniero en Minas o Civil, con más de tres años de práctica en actividades mineras, del que dependerán los Inspectores de Minas y demás personal técnico que establezca la reglamentación de este Decreto-Ley.

Art. 10°. – Deróganse los Decretos-Leyes N° 438 y 430, con excepción del artículo 145 de este último y toda otra disposición que se ponga al presente Decreto-Ley.

Art. 11°. – El personal del departamento técnico del Juzgado de Minas y el de la Dirección Provincial de Fomento Minero pasarán a depender de la Dirección de Minas, a la cual no transferirá igualmente la documentación de expedientes, planos, muebles, útiles, vehículos, etc., que estén a su cargo.

Art. 12°. – La Dirección y el Juzgado de Minas proyectarán y elevarán a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación del presente decreto-ley, dentro del término de 60 días desde su promulgación.

Art. 13°. – Elévese a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 14°. – El presente decreto-ley será refrenado por los señores Ministros en Acuerdo General.

Art. 15°. – Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO 10727/57 Y 14249/58, REGLAMENTARIOS DEL DEC. LEY 660/57.-

DECRETO 10727/57.-

A través del presente Decreto se procede a reglamentar todo lo atinente a la autoridad de aplicación del derecho Minero. Es en virtud de la separación de funciones establecidas por el Dec. Ley 660, que se hizo necesaria el dictado del decreto en análisis, a través del cual se deja sin efecto la Dirección de Fomento Minero y el Departamento Técnico del Juzgado de Minas, unificándose todo el personal y la autoridad de aplicación en la Dirección de Minas. Al año siguiente de su dictado, el mismo es derogado por el Decreto 14249, el cual establece cuales son los órganos de la Dirección de Minas establecida por el Dec. Ley 660.-

Texto del decreto 10727/57

SALTA, 11 de Octubre de 1957.

VISTO el Decreto - Ley N° 660 del 8 de Octubre de 1957 sobre la organización de la Autoridad Minera; y,

CONSIDERANDO:

Que la separación de funciones establecidas en el citado decreto ley hace necesario un reagrupamiento del personal que prestaba servicio en la Dirección de fomento Minero y en el departamento Técnico del juzgado de Minas; Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art.1º - El personal de la Dirección de Fomento Minero y del Departamento Técnico del Juzgado de Minas, pasara a depender desde la fecha del presente Decreto de la Dirección de Minas.

Art. 2º - La Dirección de Minas recibirá bajo inventario la documentación, expedientes, planos, archivos, muebles, útiles, vehículos, y demás elementos que se encuentran a cargo de las reparticiones nombradas en el Artículo anterior.

Art. 3º - El trámite minero seguirá el curso actual hasta que se aprobada la reglamentación a que se refiere el Artículo 12 del Decreto - Ley 660 con la sola variante de sustituir la intervención del Departamento Técnico del Juzgado de minas por la de la Dirección de Minas

Art. 4 º - Ratifícase los nombramientos efectuados para el juzgado de minas en virtud del **Decreto - Ley N°430**.

Art. 5º - El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de Economía, Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Art.6º - Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

DECRETO 14249/58.-

La reglamentación del Decreto Ley 660/57 se hace por intermedio del DECRETO 14249 de fecha 29 de abril de 1958, el cual reglamenta no solo el funcionamiento de la Autoridad Minera creada por el Dec. Ley 660/57, sino también el trámite minero a realizarse ante la misma. Así también en su art. 120 deroga el Decreto 10727.-

El Decreto en análisis, tiene por objeto reorganizar el personal que prestaba funciones en la Dirección de Fomento Minero y en el Departamento Técnico del

Juzgado de Minas, el cual mediante el presente decreto pasa a depender de la Dirección de Minas instituida por el Decreto Ley 660/57.-

En los arts. 2 al 12, establece los Órganos a cargo de la Autoridad Minera a saber:

1) La dirección de Minas, la cual se halla constituida por un Director, cinco Inspectores de Mina, un Secretario y demás personal que fije el presupuesto anual.

En cuanto a las funciones, le corresponde ejercer la Autoridad Minera técnico – administrativa y de Policía Minera.

Las resoluciones dictadas por la Dirección de Minas, las mismas son apelables por ante el Ministerio de Economía dentro de los cinco días de notificada la resolución.-

2) El Juzgado de Minas se encuentra constituido por un Juez Letrado, Un Escribano Secretario, un Adscripto y demás personal administrativo que fije el presupuesto anual.-

En cuanto a las funciones del Juez de Minas, le corresponde las siguientes:

a.- Entender todas las cuestiones legales que se promovieren en las minas o concesiones mineras.

b.- Entender y resolver todo lo relativo al otorgamiento de concesiones mineras que se encuentren en el territorio de la Provincia, como así también en el otorgamiento de los derechos accesorios de las concesiones mineras, tales como servidumbres, expropiaciones, etc.-

c.- Resolver sobre la vigencia, caducidad o prórroga de los plazos en los trabajos de exploración, remate de minas caducas, etc.-

Las resoluciones del Juez de Minas, son apelables por ante la Corte de Justicia de la Provincia.-

El Escribano de Minas ejerce las funciones de actuario y tiene las siguientes funciones:

1.- Consignar fecha y hora exacta de cada presentación.-

2.- Llevar la tramitación de los Expedientes Mineros desde su comienzo hasta su terminación.-

3.- Lleva los siguientes libros: de cargo; de Registro de Minas; Protocolo de la Propiedad Minera; Libro de Entradas y Salidas; Libro de expedientes archivados; Libro de Asistencia Registro de Exploraciones.-

A partir del art. 14 en adelante, el Decreto reglamenta todo lo concerniente al Trámite Minero; Exploración, Trabajo Formal, Solicitud de Concesión por manifestación de descubrimiento, Solicitud de Concesión de Minas Nuevas o Estancadas, Solicitud de Minas Vacantes, Remate de Minas Caducas, Mensura y Demarcación de Pertenencias, Servidumbres, de la Prueba, Recursos y De lo Contencioso Administrativo. Dicho articulado a quedado derogado con la sanción del Código de Procedimiento Minero de la Provincia de Salta, en cuanto el mismo, en su art. 131 establece que a partir de su publicación queda derogada toda disposición que se le oponga.-

Texto del decreto 14249/58.-

SALTA, Abril 29 de 1958,- Siendo necesario reglamentar el Decreto-Ley N° 660 del 9 de octubre de 1957,

El interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:

Art.1º - Apruébase la reglamentación del **Decreto - Ley N° 660** elevado por la Dirección y el juzgado de Minas en mérito de lo dispuesto por el Artículo 12 del citado decreto - ley.

Art. 2 º - El texto de la reglamentación que se aprueba es la que sigue:

Art. 1º - El presente decreto, reglamenta el funcionamiento de la Autoridad Minera creada por **Decreto - Ley N° 660** del 8 de Octubre de 1957 y el trámite minero ante la misma, estableciendo la coordinación entre el juzgado de Minas y la dirección de Minas

De la Autoridad Minera

Art. 2º - La Dirección de Minas estará constituida por un Director, por cinco Inspectores de Minas, por un Secretario y demás personal administrativo que fije el presupuesto anual.

"Los inspectores de Minas atenderán los siguientes departamentos: de Policía Minera, de Geodesia y Topografía, Geología de Mineralogía y Estadística Minera, y de Química y Archivo de muestra legales.

"Los inspectores de Minas deberán poseer título universitario habilitante para ejercer las funciones técnicas propias del departamento a que pertenezcan.

Art. 3º - Las funciones de cada departamento se fijarán en la reglamentación interna de la Dirección, que ésta proyectará y elevará a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 4º - Corresponde a la Dirección de Minas ejercer la Autoridad Minera técnico-administrativa y de policía minera según las prescripciones del Código de Minería, de la Ley 660 y de este Decreto Reglamentario.

Art. 5º - De las resoluciones de la Dirección de Minas podrá recurrirse ante el Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas dentro del plazo de cinco días de notificada la resolución.

Art. 6º - El juzgado de Minas estará constituido por un Juez Letrado, un Escribano Secretario, un adscripto y el personal administrativo que fije el presupuesto anual.

Art. 7º - Corresponde al Juez de Minas:

a. "Entender y resolver todas las cuestiones que se promovieran entre partes sobre propiedad, participación, deudas, accidentes y demás cuestiones legales que se promoviesen en las minas y concesiones mineras o con motivo de ellas, siguiendo las reglas del juicio ordinario".

b. Entender y resolver siguiendo las disposiciones del Código de Minería **Decreto - Ley 660** y del presente Decreto Reglamentario, en todo lo relativo al otorgamiento de concesiones de exploración o explotación y aprovechamiento de los yacimientos de minerales que se encuentran en el territorio de la Provincia.

c. Siguiendo el mismo procedimiento entender en la constitución u otorgamiento de los derechos accesorios a las concesiones mineras, tales como servidumbres, expropiaciones, adquisiciones de terrenos, indemnizaciones, etc.

d. Igualmente resolverá sobre la vigencia, caducidad o prorroga de plazos en los trabajos de exploración remate de minas caducas, etc.

e. Proponer a la Corte de Justicia el nombramiento y remoción del Secretario y demás personal del juzgado, suspender a los empleados en caso necesario debiendo someter esta medida a consideración de la Corte, cuando la suspensión fuese mayor de diez días.

Art.8º - las resoluciones y sentencias del juez de minas serán apelables ante la corte de Justicia en los casos y forma que esta reglamentación establece.

Art. 9º- En los casos de reemplazo del juez de Minas lo será por el juez de turno en lo Civil y Comercial.

Art. 10º - El escribano de Minas ejercerá las funciones de actuario y tendrá las obligaciones y facultades asignadas por el código de Minería y esta reglamentación

Art.11º - Le corresponde especialmente:

a. Consignar fecha y hora exacta de presentación de cada escrito que fuera presentado al juzgado firmando el cargo correspondiente y asignando el número de orden que corresponda en los establecidos por esta reglamentación.

b. Tendrá a su cargo desde su comienzo hasta su terminación la tramitación de los expedientes mineros cuidando que la compaginación y foliado, concuerden en el orden en que hayan presentado los documentos o escritos agregados.

c. Llevará bajo su responsabilidad los siguientes libros: libro de cargo; Registro de minas; Protocolo de la Propiedad Minera: Libro de Entradas y Salidas; Libro de Expedientes archivados; Libro de Asistencia Registro de Exploraciones.

Art. 12º - Todos los libros deberán ser foliados, sellados y rubricados por el Presidente de la Corte de Justicia. Los asientos serán manuscritos uno a continuación de otra sin dejar espacio intermedio y bajo el número sucesivo (escrito en letra) que a cada uno cronológicamente le corresponde en el registro respectivo. al margen de cada inscripción se anotara el nombre de los titulares de expedientes y objeto naturaleza de pedimento o concesión. Cuando deba inscribirse un asiento que ya lo ha sido en otro registro, se hará nota de referencia entre ambos. Al registrarse una diligencia se hará constar al pie de esta, el expediente, folio y número de orden que haya sido registrado.

Trámite Minero Exploración

Art 14° - Las Solicitudes de exploración o cateo, serán presentadas en el juzgado de Minas en el sellado de ley y dentro de las horas de oficina.

Art. 15° - En la Solicitud se expresará el objeto de la exploración, nombre estado civil, edad, nacionalidad, protección domicilio real y documento de identidad del solicitante, nombre y domicilio del dueño del suelo. Indicara con precisión de la ubicación de la zona solicitada de manera que pueda ser individualizada en forma indubitable como base necesaria para adquirir el derecho de prioridad de su solicitud un plano o un croquis del terreno referenciados a punto notables de la zona como confluencia de ríos y arroyos, cumbres o picos de montañas, viviendas mojones de minas o de fincas, etc. indicando la distancia y rumbos astronómicos con la mayor exactitud posible. Indicará si el terreno esta labrado, cultivado o cercado. Declara los elementos de trabajo con que cuenta el solicitante detallando sus características, fijará domicilio legal dentro de los límites del juzgado, la solicitud y el croquis se presentaran en triplicado.

Art.16° - La forma de la superficie de los permisos de cateo será lo mas regular posible, de tal modo que en todos los puntos situados dentro del perímetro, pueda constituirse una pertenencia minera , la relación entre la dimensión mayor de la superficie deberá limitarse por líneas rectas, salvo que recorra limites naturales los cuales se determinaran por poligonales adecuadas.

Art. 17° - Entre dos permisos de cateo solicitados por una misma persona debe quedar libre el espacio correspondiente a otro, no pudiendo estar los límites de esos permisos en ningún caso a menor distancia de 2.000 metros.

Art.18° - Ninguna persona podrá ser concesionaria o estar interesada simultáneamente en más de dos permisos en total, en todo el territorio de las mismas. Los permisos de exploración de los hidrocarburos se rigen por lo dispuesto en el capitulo II del titulo XVII del código de Minería

Art.19° - No se conceden permisos de exploración a las personas que ya los hubiera tenido en el mismo paraje a menos que la tierra sea de propiedad fiscal y en los sesenta días subsiguientes al yacimiento del primer permiso, nadie lo hubiera solicitado. Si se solicita una zona de exploración sobre la cual existe vigente un permiso de cateo,

no se reconoce al solicitante derecho de prioridad para cuando dicha zona se encuentre libre.

Art.20° - Recibirá la solicitud por el actuario o quien lo sustituye firmar el cargo correspondiente con indicación precisa de la hora de presentación asignada al numero de orden que le corresponda a la solicitud en el libro de cargos y señalara los días para notificaciones. El triplicado será devuelto al interesado para constancia. El interesado o el portador de la solicitud tendrá derecho a comprobar que la inscripción inmediatamente anterior a la suya lleva el numero que precede al que se le asigna a esta ultima.

Art. 21° - La solicitud será anotada en el libro de cargos y emitida de inmediato a la dirección para su informe y registro gráfico.

Art.22° - La dirección constatará si la solicitud llena los requisitos necesarios y en caso contrario dará al interesado un plazo máximo de diez días para subsanar las deficiencias. Si vencido el plazo el interesado no lo hubiere hecho, la solicitud se tendrá por no presentada y será devuelta al interesado por el juzgado de minas.

Art.23° - La prioridad queda determinada por el número de orden que tenga en el "Libro de Cargos" la solicitud presentada en condiciones legales, siendo condición indispensable que la zona solicitada pueda ser individualizada en forma inevitable. Si en la solicitud se hubiera omitido alguno de los requisitos exigidos y vencido el plazo señalado en el Art.22, la prioridad corresponderá en los casos concurrencia de diversos solicitantes a la solicitud que la siguiera en orden de turno, si ella a su vez, reúne las condiciones exigidas.

Art.24° - No existiendo el inconveniente señalado en el Artículo anterior, la solicitud será registrado en el Artículo anterior la solicitud será anotada en el registro gráfico y será remitida al juzgado con el informe correspondiente dentro del plazo de cinco días hábiles, salvo causa de fuerza mayor, quedando el triplicado en poder de la dirección.

Art.25° - No mediando observación de la Dirección, la solicitud será anotada en el registro de Exploraciones que llevará el Secretario del Juzgado, siguiéndose el trámite señalado en el Artículo 25 del Código de Minería.

Art.26° - Si la solicitud fuese observada o si se superpusiera a otras anteriores o mediante cualquier circunstancia que pudiera oponerse al trámite legal del pedimento, la que se hará constar en el expediente, el juez de Minas citará al interesado para que, dentro del termino de diez días, haga las manifestaciones que convengan a su derecho. Transcurrido dicho plazo, la solicitud quedará caduca de pleno derecho.

Art. 27° - por razones de interés general, la Autoridad Minera podrá exigir la ubicación de los permisos solicitados previamente a la concesión, siguiendo el mismo procedimiento que para la ubicación de las pertenencias Mineras.

Art. 28° - El Juez de Minas considerará abandonada una petición de cateo y la declarará caduca, sin mas diligencia que la constancia en el expediente, de que el solicitante haya abonado los trámites correspondientes durante 30 días imputables a el. Pero si el Juez de Minas considera que el abonado del trámite tiende a dilatarlo, podrá emplazar al solicitante a realizar las gestiones que corresponda al caso dentro del plazo de 10 días, bajo apercibimiento expreso de tener por abandonada la solicitud y declarada caduca, sin mas trámites que la constancias del expedientes.

Art. 29° - El interesado presentara dentro del termino de 30 días contados desde la notificación de la orden de publicación de edictos, los ejemplares del Boletín Oficial en que conste la primera y última En su defecto, la solicitud será declarada caduca, salvo que la demora fuera producida por retardo del Boletín Oficial.

Art. 30° - Dentro de los 30 días de notificado el otorgamiento del permiso de cateo, el interesado deberá comunicar a la Dirección de Minas, el haber instalado los trabajos de exploración, expresando situación de su emplazamiento y descripción de los mismo, denunciando en su caso la persona que dirige los trabajos. La Dirección de Minas la suma que la Dirección determine en concepto de gastos de inspección de los trabajos.

Art. 31° - El Juez de Minas no decretará la prórroga del plazo para instalación de los trabajos de exploración ni la suspensión de los mismos, sin el previo informe favorable de la Dirección de Minas. En todos los casos la solicitud deberá ser presentada dentro de los 30 días subsiguientes a la concesión del permiso como condición indispensable.

Art. 32° - los permisos de cateo que darán caducas de pleno derecho y sin necesidad alguna o declaración de la Aut. Minera, por el solo vencim. de los términos acordados para su duración o instalación de los trabajos de exploración en el Art. 28 del Código de Minería o por falta de pago del canon establecido por la ley 10273 dentro e los 30 días subsiguientes al registro. Para los cateos de hidrocarburos, las caducidades se operan de acuerdo a lo establecido en el **Capítulo II del Título XVII del Código de Minería**.

Art. 33° - Toda zona de cateo cuya solicitud o permiso, por cualquier causa fuera archivada o declarada caduca después del registro, no podrá ser solicitada por un nuevo interesado antes de los treinta días siguientes al de la publicación de su caducidad.

Art. 34° - Las disposiciones del presente decreto regirán también para las solicitudes en trámite, en cuanto sean aplicables según el estado de cada expediente.

DEL TRABAJO FORMAL

Art. 35° - Cuando el titular de un permiso de cateo vigente quiera constituir un trabajo formal según lo estipulado en el Artículo 29 del Código de Minería, formulara petición escrita ante el Juzgado que se agregara al correspondiente expediente de cateo, la solicitud deberá ser hecha en triplicado en el sellado de actuación y deberá contener:

- a. La ubicación clara y precisa de las pertenencias que solicita dentro de la zona de cateo y dentro de un máximo de tres pertenencias contiguas o separadas. El área de estas pertenencias es la que determina el Código de Minería para las pertenencias de minas.
- b. Un plano o croquis demostrativo de la situación de las pertenencias dentro del cateo y en el que debería consignarse los puntos de referencia, medidas, rumbos, y demás datos necesarios para su ubicación precisa.
- c. Los hechos que justifiquen al pedido y nombre y residencia del suelo.
- d. Los elementos y personal que se empleará en las labores y la sustancia que se quiere explorar.

Art. 36° - Presentada la solicitud e informando la Dirección que los hechos invocados son suficiente a su juicio para hacer lugar al pedido de registro, este se efectuará en el "Registro de Exploraciones" y se mandara a publicar y notificar en la misma forma con el mismo alcance y rigiendo los mismos términos que para la solicitud de cateo.

Art. 37° - Antes de conceder el permiso la Autoridad Minera podrá ordenar si lo considerase necesario, el reconocimiento o comprobación de los hechos declarados por el solicitante para optar el permiso. Esta comprobación se realizara por la Dirección por cuenta del solicitante.

Art. 38° - La Autoridad Minera denegara el permiso si este no persigue otro objeto que prorrogar el vencimiento del cateo originario o si no se han realizado durante la vigencia de este, trabajos que justifiquen el establecimiento del trabajo formal.

Art. 39° - La concesión caduca por las mismas razones que caduca un permiso de cateo; por la manifestación de descubrimiento producido, por el vencimiento del término de 15 meses que acuerda el Código a estas concesiones.

Solicitudes de Concesión de Minas por Manifestación de Descubrimiento.-

Art. 40° - Las solicitudes de concesión de minas por descubrimientos, se presentaran por triplicado en el sellado de ley, ante el Juzgado de Minas, en escrito que contenga los requisitos exigidos en el art. 15 de este decreto y artículo 113 del Código de Minas. - Se acompañara muestras del Mineral descubierto

Art. 41° - Recibirá la solicitud, al actuario le dará el trámite señalado en los artículos 20 y 21 de este decreto.

Art. 42° - Si la solicitud no la presenta vicio alguno, la Dirección registrara gráficamente la solicitud y la devolverá informando al Juzgado de Minas, dentro de los quince días hábiles, salvo casos de fuerza mayor. Si la Dirección notara que se ha solicitadora omitido algún requisito lega, señalará al interesado que no podrá pasar de diez días para subsanar las deficiencias. - transcurrido ese plazo sin que el interesado hubiese subsanado la deficiencia, el expediente será devuelto al Juzgado. En el informe de la Dirección constara el estado de la zona, la clasificación que le corresponde a la

solicitud de acuerdo al artículo 110 del Código de Minas y demás circunstancias de la solicitud.

Art. 43° - Informada la solicitud por la Dirección, el Juez de Minas mandara registrar y publicar la solicitud en el Boletín Oficial en la forma que establece el Código y entregara el duplicado al interesado para constancia.

Art. 44° - El interesado presentará los ejemplares de las publicaciones en la forma y términos señalados en el art. 29 de este decreto para su agregación expediente.

Art. 45° - Dentro de los cien días contados desde el día siguiente al del registro; el descubridor comunicara a la Dirección de Minas el haber efectuado la labor legal establecida en el Art. 133 del Código de Minería. La Dirección previa las comprobaciones correspondientes, podrá conceder las prórrogas establecidas en los artículos 134 y 135 del Código de Minas.

Art. 46° - Si dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de los plazos anteriormente indicados, el descubridor no hubiera solicitado la mensura de la mina descubierta el Juez de Minas declarará caducos los derechos del descubridor no hubiere solicitado la mensura de la mina descubierta el juez de Minas declarará caducos los derechos del descubridor y la mina minas pedidas por el serán registradas en calidad de vacantes y en condiciones de ser adquiridas como tal.

Art. 47° - La declaración de caducidad de los derechos del descubridor, no obsta a que se ubiquen y mensuren las demás minas pedidas en la corrida, que estén en estado de mensurarse.

Solicitudes de Concesión de Minas nuevas o Estancadas.-

Art. 48° - Las solicitudes de minas nuevas o estacas mina se presentarán en el Juzgado en la misma forma que las solicitudes de cateo dando además las señales necesarias para hacer conocer el criadero a que se refiere, el nombre de su dueño y el punto donde debe situarse la pertenencia nueva o estaca.

Art. 49° - La solicitud seguirá el mismo trámite que el de permiso de cateo con la excepción de la publicación que se hará por medio de un cartel fijado en las puertas del Juzgado.

Art. 50° - El solicitante tiene un plazo de cien días contados desde aquel en que se hayan designado los límites de la mina descubridora o desde el día de la solicitud si ésta estuviese demarcada, para reconocer o explorar la pertenencia que lo solicita.

Art. 51° - Llenados los requisitos del Artículo 142 del Código de Minas y dentro de los cien días señalados para la exploración del concesionario presentará la manifestación del criadero y acompañara las muestras del mineral descubierto, bajo pena de caducidad que se operara de pleno derecho sin necesidad de declaración expresa.

Art. 52° - A partir de ese momento se dará a la solicitud el trámite correspondiente a las manifestaciones de descubrimientos y el señalado en los artículos 144 y 145 del Código de Minería. Vencidos los plazos señalados en dichos artículos sin haberse dado cumplimiento a las obligaciones en ellas establecidas quedaran caducos los derechos del peticionante y las pertenencias se consideran vacantes y sujetas a lo dispuesto en el art. 274 del código de Minería.

Solicitud de minas vacantes

Art. 53° - Las minas o pertenencias quedaran vacantes o en disponibilidad de conformidad a lo dispuesto en el párrafo final del Art. 7 de la Ley N° 10273 sobre reformas al Código de Minería y por manifestación de abandono por parte del dueño - Art. 8 de la citada Ley de reforma

Art. 54° - Cuando un concesionario haga manifestación de abandono de una mina o pertenencia de conformidad al art. 149 de Código de Minería y 8 de la Ley 10.273, se publicará dicha manifestación por el termino de quince días para que tenga lugar lo dispuesto en el párrafo segundo del citado Artículo 8°.

Art. 55° - La solicitud de concesión de mina vacante o en disponibilidad será presentada por triplicado al juez de Minas y deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Art. 15 del presente Decreto Ley, el nombre actual de la mina o pertenencia vacante o en disponibilidad que se desee obtener, ubicación o croquis.

Art. 56° - Estando en forma la solicitud y certificado el estado de vacancia de la mina por el escribano quien deberá informar asimismo sobre la existencia de otro pedido el juez de minas previo informe de la Dirección el estado de los trabajos de la mina y el replanteo del terreno, resolverá concediendo o denegando la solicitud.

Art. 57° - Si la resolución fuere favorable ordenará el registro pertinente y fijará la fecha en que se otorgará la posesión de la mina. En el mismo acto el juez de minas ordenará en su caso el replanteo de la pertenencia y fijará el monto del capital que deberá invertirse y el plazo que empezará a contarse desde la fecha del registro.

Del Remate de Minas Caducas.-

Art. 58° - La escribanía de minas confeccionará en los meses de marzo y septiembre de cada año, una nomina de las minas y concesiones mineras que de acuerdo a los art. 5 y 6 de la Ley 10.273 hayan caído en caducidad por falta de pago del Canon correspondiente a dos semestres vencidos y falta del pago del mismo, dentro de los dos meses siguientes al último vencimiento.

Art. 59° - El Juez de Minas dispondrá inmediatamente la publicación de la nómina de concesiones caducas y ordenará el remate de las mismas, señalando el lugar, día y hora en que se efectuará y el martillero que lo realizará.

Art. 60° - Tanto la nómina de minas caducas como la orden del remate se publicarán durante diez días en el Boletín Oficial y diarios de la Provincia, se publicará además, por carteles que se colocarán en sitios públicos.

Art. 61° - La caducidad y orden de remate se notificará por cédula al concesionario ejecutado y a los acreedores hipotecarios o privilegiados que tuvieren que créditos registrados ante el Juzgado de Minas y domicilio legal constituido dentro del radio de la capital.

En caso de no tener domicilio legal constituido, se considerará suficiente la publicación de edictos que dispone el artículo anterior.

Art. 62° - Toda reclamación tendiente a suspender los efectos de la caducidad y orden del remate de las concesiones, debe ser acompañada del certificado en que consta el pago del canon efectuado en la forma determinada por la Ley 10.273.

Art. 63° - El propietario o la persona interesada en la conversación de una concesión que haya caído en la caducidad por falta de pago del canon, podrá obtener la suspensión del procedimiento abonando el canon adecuado con la multa igual a su valor, más los gastos que se hayan producido con motivo de la iniciación de procedimiento, los que determinará el Juez de Minas a la solicitud de la parte interesada.

El pago en estas condiciones podrá hacerse hasta el día de la subasta.

Art. 64° - El remate de las concesiones caducas se efectuará por el martillero que designe el Juez de Minas y con intervención del escribano. La base de la licitación será el importe del canon prevista para cubrir los gastos de aquélla, a los efectos del reembolso establecido en el art. 7 de la Ley N° 10.273.

Art. 65° - Podrán hacer ofertas en el remate todas las personas que tengan capacidad para adquirir minas, por sí o por medio de sus representantes debidamente acreditados.

Art. 66° - Sin perjuicio de las actas particulares de las concesiones vendidas, se formulará un acta de conjunto en que conste la apertura y cierre de la licitación, la nómina de las minas vendidas con el precio obtenido en cada una y el nombre del adquirente, la relación de las minas por las cuales no se hayan presentado postores y los de aquéllas cuya licitación hubiere sido suspendida por efecto del pago previsto en el art. 63° de este Decreto Ley. Dicha acta firmada por el Escribano, el Martillero y dos testigos, será publicada en el Boletín Oficial a los efectos indicados en el Art. 7° de la Ley N° 10.273.

Art. 67° - El acta de remate de cada mina será agregada al expediente de la concesión, previa transcripción de la misma en el Registro de Minas. Al adquirente se le otorgará un testimonio del título de la mina y en caso de que ésta no hubiere llegado a ser mensurada o la mensura no se hubiere aprobado, dicho testimonio se reducirá a una copia del registro de la mina.

Art. 68° - El derecho de los acreedores hipotecarios y privilegiados reconocidos por el art. 7° de la Ley N° 10.273 sobre el saldo líquido del remate de la mina, deducido lo adeudado por canon y gastos de las licitaciones, deberá ejercitarse por los

interesados ante el Juez de Minas dentro de los treinta días siguientes a la publicación del acto general del remate.

Art. 69° - Transcurrido los noventa días de la publicación del Acta general de la licitación, el Juez citará a cada una de los concesionarios ejecutados, a fin de que tomen conocimiento de la licitación del sobrante del precio obtenido por la misma, deducido el importe del canon adeudado, los gastos del remate y el 10% del total del precio que queda a beneficio del Fisco (Art. 7° de la Ley 10.273). Previa conformidad del interesado, se le entregará dicho sobrante, extendiéndose el recibo con intervención del Escribano de Minas.

Art. 70° - Las minas sacadas a remate y por las cuales no se hayan presentado postores, serán inscriptas en calidad de vacantes, siempre que, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del acta de remate, los respectivos acreedores no hayan solicitado su adjudicación.

De la Mensura y Demarcación de las Pertenencias.-

Art. 71° - La solicitud de mensura y pertenencias mineras en general, se presentara al juzgado de Minas correspondiente expediente, llenando los requisitos establecidos en el Artículo 232 del Código de Minería

Art. 72° - la petición será pasada a la Dirección para su conocimiento é informe, debiendo expedirse en el plazo de cinco días hábiles, salvo causas justificada.

Art. 73° - Informada la solicitud y no habiendo inconveniente alguno el juez ordenara la publicación de la petición y su proveído en la forma prescrita en el art. 119 del Código de Minería y se notificara a los dueños de las mismas colindantes (art. 234 del Código de Minería).

Art. 74° - No habiéndose presentado oposición en término a la petición de mensura o resuelta la que se hubiere presentado, el Juez ordenará practicar la mensura.

Art. 75° - La mensura y amotinamiento de pertenencias minera en general se efectuara, a cargo del interesado, por el Departamento de Geología y Topografía de la Dirección o por el profesional que proponga el interesado. El perito deberá

posesionarse del cargo dentro de los diez días de notificado en su defecto será reemplazado.

Art. 76° - El juez entregara al perito el oficio para el Juez de Paz que efectuara las notificaciones y labrara las actas de iniciación y clausura de las operaciones.

Art. 77° - La Dirección de Minas dará al perito las instrucciones a que debe atenerse y fijara el plazo para efectuar la mensura. La Dirección puede si lo cree conveniente hacer efectuar previamente a la mensura el reconocimiento de la labor legal.

Art. 78° - El perito nombrado efectuara la operación sujetándose a los dispuestos por el titulo VII del Código de Minería, las instrucciones generales en vigencia y las que le impartan la Dirección de Minas.

Art. 79° - Terminada la operación el perito presentara al juzgado la documentación de la operación terminada que debe contener:

- a. Las instrucciones que le fueron impartidas
- b. Las citaciones a los dueños de las minas colindantes y en su caso a los dueños del suelo, hechas por el dueño del suelo, hechas por el juez de Paz comisionada al efecto.
- c. Los documentos recibidos durante la operación.
- d. Las actas de iniciación y clausura
- e. Detalles del cálculo de latitud de algún punto del perímetro y el azimut de al que relacionara todas las demás.
- f. Detalle del relacionamiento del punto de partida y de la labor legal con el perímetro.
- g. Un plano en tela y copia heliografica de la convención mensurada en el que deban figurar todos los rumbos y distancias de los lados del perímetro, las distancias entre mojones, los accidentes del terreno, etc.
- h. Un informe detallado de la operación efectuada con descripción de todas las líneas cálculos de superficies fecha de ejecución asistente a la operación, objeciones o aprobaciones producidas justificación de las resoluciones tomadas, etc.
- i. Características de la labor legal: rumbo buzamiento y potencia del criadero.

Art. 80° - La diligencia será pasada a la Dirección de Minas para su estudio y aprobación técnica.

Art. 81° - Aprobada la operación el juez de Minas ordenara inscribirla en el registro y que de ella se de copia al interesado, como título definitivo de propiedad.

De Las Servidumbres.-

Art. 82° - El solicitante de una servidumbre deberá manifestar el objeto de la misma, sus datos personales, indicando la mina, minas o cateos para los cuales se pide la servidumbre. Como así también indicara con precisión la situación y señales que sean necesarias para identificar el terreno afectado y se acompañara un croquis o plano de la zona y una copia de la misma; informándose además el nombre y domicilio de los propietarios del terreno y concesionarios mineros afectados por la servidumbre.

Art. 83° - La solicitud de servidumbre, se pasará a la Dirección de Minas para que informe que concesiones mineras pudieran quedar afectadas o dar otra información de interés.

Art. 84° - Una vez producido el informe a la Dirección de Minas se procederá a conceder la servidumbre de conformidad a los artículos 48 y siguientes del Código de Minería publicándose el auto de concesión en el Boletín Oficial de la Provincia.

Art. 85° - Transcurrido el plazo de quince días desde la publicación de la concesiones de servidumbre se procederá a ministrar la posesión de la misma por intermedio del juez de Paz T o S de la localidad más próxima, quien notificara de ese acto el propietario del terreno y a los titulares de concesiones mineras afectados por la servidumbre.

De Lo Contencioso Minero – Demanda y Contestación.-

Art. 86° - Toda presentación que promueva un incidente con motivo de un pedido o concesión minera deberá expresar además de los requisitos exigidos por el art. 15.

- a. El expediente al cual se refiere;

b. Causas y fundamentos de la presentación, acompañando los documentos que funden su derecho, indicando el lugar donde se encuentren en caso de no obrar en su poder;

c. Determinar y ofrecer la prueba que hace a su derecho;

d. La petición en términos claros y precisos.

Art. 87° - En los casos en que no exista disposición expresa del Código de Minería, toda oposición deberá formularse dentro del término de quince días de la notificación o ultima publicación de edictos; debiéndose acompañar copia simple de la presentación.

Art. 88° - De la presentación se conferirá traslado acompañándose copia simple de la misma por el termino de nueve días, disposición contraria del Código de Minería.

Art. 89° - En la contestación del traslado se deberá ofrecer la prueba que haga el derecho de la parte tratándose de documentos, deberán acompañarse los mismos o indicarse el lugar donde se encuentren. Del escrito de contestación la prueba pertinente se correrá traslado al incidentista para que ofrezca la contra prueba por el termino de cinco días.

Art. 90° - En cualquier estado del juicio, el Juez de Minas podrá disponer las medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos convertidos mantener la igualdad de los litigantes, o prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe así como aquellas tendientes a la más rápida y económica tramitación del proceso. El Juez de Minas deberá procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, que los litigantes pongan término a sus diferencias por medio de avenimiento amigables, y a ese efecto tendrá la facultad de convocarlos a su presencia en cualquier estado del juicio, siempre que crea posible conseguir aquel objeto.

De la Prueba y Resolución.-

Art. 91° - En caso de existir hechos controvertidos, la causa deberá abrirse a prueba por termino que no exceda de quince días al solo objeto de que se rinda la ofrecida en el escrito de oposición, contestación y contra prueba.

Art. 92° - La recepción de la prueba se regirá por las por las disposiciones del Código de Comercial e la Provincia.

Art. 93° - Vencido el término de prueba de oficio el escribano certificará el hecho poniendo constancia de ello y de la prueba producida por las partes. Fecha se pondrán los autos a la oficina por el término de diez días comunes e improrrogables para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba. Vencido este término también de oficio se llamaran autos para resolver.

Art 94° - Agregados los alegatos el expediente pasará al juez quien deberá dictar resolución dentro de los treinta días de representado el ultimo alegato.

De los Recursos de Reposición y Apelación.-

Art. 95° - El recurso de reposición tiene lugar contra resoluciones de mero trámite, debiendo interponerse dentro del tercer día de la notificación de la resolución y resolverse con un solo traslado a la contra parte si la hubiere, quien deberá evacuarla dentro del término de tres días. Contra la resolución que recaiga no podrá interponerse recurso alguno

Art. 96° - La resolución deberá ser motivo bajo pena de nulidad.

Art. 97° - El recurso de apelación procederá contra las resoluciones que causen gravamen irreparable. Deberá interponerse dentro del término de cinco días de la respectiva notificación.

Art. 98° - Interpuso el recurso, el expediente se elevara en su caso, dentro del quinto día de haber sido notificada la concesión del mismo.

Art. 99° - En el caso de denegarse el recurso, el interesado podrá recurrir de hecho ante la Corte de Justicia, dentro de los cinco días contados desde la notificación.

Art. 100° - Interpuesto el recurso de hecho, la Corte de Justicia recabará informe del juez de Minas y evacuado éste se expedirá sobre su procedencia en el término de cinco días.

Del Procedimiento en Segunda Instancia.-

Art. 101° - Llegado el expediente a la Corte de Justicia, en virtud de alguna apelación otorgada por el juez, se mandara expresar agravios dentro de diez días y, si no lo hiciera el interesado, con el solo vencimiento del término, se declarara desierto el recurso y se devolverá el expediente, salvo que antes del vencimiento del termino, que no podrá exceder del prefijado, sin que pueda otorgarse otra nueva prorroga. De la expresión de agravios se correrá traslado por igual término, notificándose personalmente o por cédula.

Art. 102° - Con el escrito de expresión de agravios y su contestación el expediente quedará en estado de ser resuelto

Art. 103° - La resolución deberá dictarse dentro de los setenta días de quedar el expediente en estado de ser resuelto.

De lo Contencioso Administrativo.-

Art. 104° - Contra las resoluciones del Poder Ejecutivo, podrá entablarse el recurso de lo contencioso administrativo que se substanciará en todo de acuerdo al procedimiento civil de la Provincia.

Art. 105° - El recurso contencioso administrativo autorizado precedentemente no tendrá efecto suspensivo salvo que la Corte de Justicia dentro de los diez días de interpuesto el recurso, y a mérito de las circunstancias del caso, considere que el cumplimiento inmediato de la resolución recurrida entrañan gravamen irreparable. Con el escrito en que se deduzca el recurso ante la Corte de Justicia autorizado por el Artículo precedente, se presentará toda la prueba en que funda, y de la que no pueda acompañarse se la ofrecerá haciendo mención de la Oficina o lugar donde se encuentre. Recibido el escrito por el Secretario de la Corte dentro de las cuarenta y ocho horas se mandará correr traslado al Poder Ejecutivo a fin de que éste, dentro del plazo de ocho días eleve las actuaciones ejecutivas acompañadas de un informe detallado sobre antecedentes y motivos de la resolución recurrida.

Disposiciones Varias.-

Art. 106° - En los casos en que se soliciten inspecciones técnicas o peritaje el interesado deberá depositar previamente el importe estimado por la Dirección de Minas. El Juez de Minas fijará un plazo máximo de quince días para efectuado aquel.

Art. 107° - Las notificaciones de las Providencias deberán hacerse en la Secretaría del Juzgado en los días señalados para notificaciones. A este efecto el Juez designara dos días de la semana no consecutivos en los que todo interesado estará obligado a concurrir a la oficina. Con tal fin el Secretario colocara en lugar visible el lugar el libro de asistencia a que se refiere el art. 112 y en el que las partes podrán asentar su firma, con indicación de fecha y hora para acreditar en cualquier tiempo su comparencia a al oficina.

Art. 108° - Toda providencia se considerará notificada desde el primero desde el siguiente si fuese feriado posterior a aquel en que fuere dictada, debiendo el Secretario dejar constancia en el expediente, corriendo este según su estado. La omisión de la nota no perjudica la notificación automática.

Art. 109° - Los plazos son siempre de días corridos salvo cuando se especifica lo contrario.

Art. 110° - La demora en el trámite imputable a un funcionario o empleado, se considerará falta grave y originará sanciones disciplinarias, de apercibimiento, multa y suspensión, pudiendo en caso de reincidencia motivar la exoneración del responsable.

Libros

Art. 111° - En el "Libro de Cargos" se anotaran todas las solicitudes mineras que se presenten al Juzgado, o los escritos cuya prioridad se deba acreditar. En este libro se consignara el número de expediente, fecha y hora de presentación, nombre del interesado, firma del presentante o apodéralo y referencia del objeto del escrito.

Art. 112° - En el "Libro de Asistencia" deberán firmar los interesados o sus apoderados en los días señalados para notificaciones a fin de acreditar sus asistencias

Art. 113° - En el "Libro Registro de Exploraciones" se inscribirán las solicitudes de concesiones de exploración o cateo, de reconocimiento de estaca mina, de salitre, borato, salinas, turberas, restauración e cerros o minerales abandonados. Al margen de

cada concesión se anotará la fecha de vencimiento, así como toda transferencia, modificación o gravamen de los derechos mineros, realizados durante el periodo de exploración

Art. 114° - En el Libro de Registro de Minas se inscribirán los registros a que se refiere el párrafo II del título VI del Código de Minas y los pedimentos de pertenencias fijas sea cual fuere la razón o título legal en que ellos se fundan.

Art. 115° - En el Libro Del Protocolo de la Propiedad Minera se transcribirán las mensuras aprobadas, las transferencias, gravámenes o cualquier otro documento que constituya, extinga o en cualquier forma modifique o grave la propiedad minera. Se protocolizará en él, las escrituras mineras que por cualquier causa fueran autorizadas por otros escribanos.

Art. 116° - En el libro de Entradas se anotaran en orden cronológico y con especificación de hora, todos los expedientes mineros que se inicien y las entradas y salidas de los mismos de la oficina, debiendo llevarse dichos expedientes numerados por letra y año.

Art. 117° - En el libro de Expedientes archivados se anotaran todos los expedientes cuya tramitación se hubiera terminado.

Art. 118° - Todos los libros deberán ser foliados sellados y rubricados por el Presidente de la Corte de Justicia. Los asientos serán manuscritos uno a continuación de otro sin dejar espacios intermedios y bajo el número de orden sucesivo (escrito en letra) que a cada uno cronológicamente le corresponda en el registro respectivo.

Art. 119° - Los expedientes en trámite no podrán ser sacados de las oficinas del Juzgado o de Dirección de Minas.

Art. 120° - Derogarse el Decreto N° 10. 727 del 11 de Octubre de 1957.

**DECRETO 5976/59: APRUEBA LA RESOLUCION INTERNA N° 52 DICTADA
POR LA DIRECCION PROV. DE MINERÍA, LA CUAL ESTABLECE LAS FUNCIONES
DE LA POLICIA MINERA.-**

El mencionado decreto sancionado el 15/04/59 en su art. 1° aprueba en todas sus partes la Resolución Interna N° 52, dictada por la Dirección Provincial de Minería, y

su vez lo reglamenta al establecer quien ejercerá las funciones de Policía Minera y cuales serán sus funciones.-

Conforme lo expuesto, el Decreto establece en su art. 1° que la Policía Minera será desempeñada por la Dirección de Minería, a través del personal que ésta designe. Dicho personal tendrá libre acceso a las explotaciones mineras a los fines de contralor, debiéndose poner a su disposición la totalidad de la documentación que le sea requerida.-

En cuanto a las funciones de la Policía Minera establece:

Inspeccionar y controlar los trabajos mineros.-.

Velar y controlar el cumplimiento de los reglamentos de policía y seguridad minera.-

Vigilar la explotación y conservación de los manantiales de aguas minerales y medicinales.-

Informar sobre cualquier cuestión que sea sometida a su conocimiento por la Dirección General.-

Por último se establece que se adopta en la Provincia el Reglamento de Policía Minera dictado en el orden nacional, Disposición N° 40.-

Texto del Decreto 5976/59

Art. 1°: Las funciones de la Policía Minera serán ejercidas por ésta Dirección, por intermedio de sus inspectores y demás personal técnico que al efecto se comisione.

Art. 2°: Corresponde como funciones de la Policía Minera, sin perjuicio de las contenidas en el Decreto-Ley 660, las siguientes:

a) Inspeccionar y vigilar los trabajos subterráneos y superficiales que tengan por objeto el cateo, la explotación y el aprovechamiento de las sustancias minerales.

b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos de policía y seguridad actualmente existentes o que se dicten en el futuro, para el trabajo de minas y canteras.

c) Inspeccionar y vigilar la explotación y conservación de los manantiales de aguas minerales y medicinales que se benefician por cuenta del Estado o particulares.

d) Colaborar con el Juzgado de Minas en los casos que sea necesario, realizar inspecciones con el fin de dilucidar derechos controvertidos.

e) Informar sobre todos los asuntos que la Dirección General someta a su estudio y consideración.

Art. 3º: Los inspectores y funcionarios dependientes de ésta Dirección en función de Policía Minera, tendrán libre acceso a todos los trabajos subterráneos y superficiales, instalaciones, establecimientos de beneficio, fábricas que tengan por objeto la explotación, exploración y beneficio de sustancias minerales.

Los concesionarios, gerentes, administradores, empresarios, mayordomos, capataces, empleados y obreros de las minas están obligados a suministrar a dichos funcionarios todos los planes, datos e informes que pidan para velar por el cumplimiento de su misión y deberán presentar, cuando las circunstancias lo exijan, toda clase de documentos relativos a la producción y al costo de la mano de obra.

Si dichos funcionarios encontraran obstáculos o resistencia en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir de las autoridades respectivas, el auxilio de la fuerza pública.

Art. 4º: Adoptase el Reglamento de Policía Minera dictado en el orden nacional por la Dirección General de Minería por Disposición N° 40, del 22 de Noviembre de 1948, el que se aplicará en todo el territorio de la Provincia.

Art. 5º: La presente Resolución entrará en vigencia una vez obtenida la aprobación del Poder Ejecutivo de la Provincia y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

Art. 6º: Elévese al Poder Ejecutivo al efecto previsto por el art. 3º inc. a) del Decreto-Ley 660 del 8 de Octubre de 1957.

Art. 7º: Comuníquese, regístrese y archívese.-

CAPITULO II:

EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS MINERO Y LEYES COMPLEMENTARIAS

Al igual que en el procedimiento Civil y Penal, cada unas de las provincias legislan y establecen sus propias normas procesales para el ejercicio de los derechos regulados en el Código de Minería de la Nación. De todas maneras la diversidad existente en materia de procedimientos mineros, relacionada con nuestro sistema federal, está en proceso de ser substancialmente atenuada por iniciativas regionales y nacionales que tienden a su homogenización.-

DISPOSICIONES GENERALES.-

En el capítulo 1° el Código de Procedimientos Minero de la Provincia legisla cuestiones generales relacionadas al procedimiento seguido en los trámites mineros.-

Así en su art. 1° establece que el procedimiento minero se regirá por el Código de fondo y por el Código de Procedimientos, asimismo establece que supletoriamente se aplicará para las cuestiones no reguladas el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.-

Luego establece la competencia originaria de la autoridad Minera provincial, estableciendo que la misma es improrrogable y excluyente. La recusación de la autoridad minera solo puede efectuarse con expresión de causa, a diferencia de los procesos civiles en los que el Juez puede ser reemplazado sin justa causa.-

Establece además un instituto similar a la caducidad pero que funciona de manera diferente al plano Civil y Comercial, al prever que cuando el proceso se hallare paralizado 60 días por causas imputables al interesado, se le emplazará para que en el término de cinco (5) días lo continúe, bajo apercibimiento de declarar el abandono del mismo con pérdida de los derechos y archivo de las actuaciones.

Por último en su art. 6° se establece la publicidad de los expedientes mineros.-

ACTOS PROCESALES: NOTIFICACIONES, RESOLUCIONES Y RECURSOS.-

ACTOS PROCESALES: En el Capítulo II el Código legisla todo lo concerniente a los actos procesales.-

En el art. 7° se regula lo concerniente a la capacidad reproduciendo principios generales. En éste sentido establece que cualquier persona con capacidad legal puede actuar como peticionante en el trámite minero o como parte en caso de contienda, por sí o por medio de representantes legales persona con capacidad legal puede actuar como peticionante en el trámite minero o como parte en caso de contienda, por sí o por medio de representantes legales. Cuando se actúa con abogado deberá acompañarse testimonio del poder en original o copia solicitando su certificación autorizada cuando el apoderado pidiere la devolución del original. Podrá también conferirse autorización para actuar mediante la presentación de un escrito en el mismo expediente, con la firma certificada por el Escribano de Minas o Escribano Público de Registro, Juez de Paz o autoridad policial. Esto último representa una innovación en relación a la acreditación de personería no contemplada en los Códigos de Procedimientos Civiles.-

En cuanto a los requisitos que deben reunir los escritos, los mismos están relacionados con la identificación del peticionante. Así deberá indicarse el nombre y apellido o razón social en su caso, documento de identidad, estado civil, edad, nacionalidad y profesión del peticionante, denunciar domicilio real y constituir domicilio legal en el radio del Juzgado. Si no se constituye éste último al igual que en sede civil, quedará automáticamente constituido en los estrados de la Autoridad Minera.-

En toda petición de derechos mineros, Escribanía de Minas pondrá constancia del pedimento, del día y hora en que fuere presentado, debiendo así mismo el escribano certificar a continuación si hay otros pedimentos, y en su caso le comunicará al interesado quién firmará la diligencia Los demás escritos de actuación serán cargados por medios mecánicos o electrónicos que contendrán fecha y hora de ingreso, debiendo ser firmada la recepción por el funcionario autorizado. En cuanto a la foliatura, la misma deberá efectuarse en forma correlativa, en la parte superior derecha, y no podrá tacharse, enmendarse, ni modificarse sin decisión de la Autoridad Minera que exprese los motivos o justificativos del desglose o cambio de foliatura.-

Estrictamente relacionada con la presentación de peticiones de derechos mineros, el Código regula en el art. 11 que la prioridad del descubrimiento o de cualquier otro derecho minero estableciendo, se determinará por quien primero presentare la respectiva solicitud en condiciones legales, salvo lo dispuesto en los artículos 60 a 62 del Código de Minería, haciendo referencia al dolo o fraude en la presentación. Cuando se presentaren dos o más solicitudes simultáneas se preferirá al solicitante que haya cumplido el mayor número de requisitos legales exigidos para la presentación de la solicitud. Si estos requisitos hubiesen sido cumplidos en paridad de condiciones la Autoridad Minera citará a los presentantes a una audiencia de conciliación. En caso de incomparencia de alguna de las partes, se tendrá por desistido el pedimento para el ausente. No mediando conciliación, la Autoridad Minera adjudicará la prioridad en el mismo acto mediante sorteo entre los presentes, realizado ante el Escribano de Minas.-

Cuando en la petición inicial se hubieren omitido alguno de los requisitos subsanables se notificará al interesado para que en un plazo de cinco (5) días, supla las omisiones o rectifique los errores, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.-

En el caso que se solicitare un pedimento minero sobre un área ya solicitada que se encuentre en trámite, el mismo será rechazado “in limine”.-

Por último el Código legisla el tema de los nombres de las minas una vez que se le ha asignado denominación estableciendo que el mismo no podrá cambiarse ni modificarse, aunque se declare caduca, vacante o se transfiera por cualquier título. En caso de homonimia o incorrecta manifestación del nombre se exigirá al denunciante su cambio, antes del registro de la concesión, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio la autoridad minera.

NOTIFICACIONES: En cuanto a las notificaciones legisladas en el Capítulo III, el Código sigue los lineamientos del procedimiento Civil y Comercial al establecer como principio general, que todas las providencias, cuando no se disponga en este o por la Autoridad otra forma de notificación, se notificarán por ministerio de la ley, automáticamente, en todas las instancias los días martes y viernes o el siguiente hábil,

si alguno de ellos fuere feriado o inhábil, siempre que el mismo Código o la Autoridad no disponga otra forma de notificación.-

En el art. 20 establece las resoluciones que deben ser notificados mediante cédula y en el domicilio constituido: El proveído de presentación. Los traslados, vistas, intimaciones o apercibimientos. Las audiencias. La apertura de la causa a prueba. La providencia que deniega o declara la causa de puro derecho y la que pone los autos para alegar. Las resoluciones definitivas y las interlocutorias con fuerza de tal. Las que deben notificarse por ley o por reglamentos en el constituido, o cuando así lo ordenare la Autoridad. Las que conceden o deniegan recursos.

Otra forma de notificación prevista en el Código en forma idéntica a la prevista en forma civil es la notificación personal, la cual se efectiviza con el retiro del expte., lo cual implica la notificación de las providencias o resoluciones allí dictadas. Asimismo también se prevé la notificación por edictos cuando se trate de personas desconocidas o que se ignore su domicilio. En cuanto al plazo de publicación de edictos si no tiene plazo expresamente fijado de hará por una sola vez

El Código autoriza la notificación por telegrama colacionado o carta documento de medidas de seguridad e higiene que revistan carácter de urgentes.-

PLAZOS: El Código reproduce las reglas generales del Código de Procedimientos Civil y Comercial al establecer en su Capítulo IV que todos los términos son perentorios e improrrogables. Se computan en días hábiles, salvo los fijados por el Código de Minería, y empiezan a correr desde el día siguiente al de la notificación. El plazo para contestar vistas y traslados es de cinco días y en el caso de plazos prorrogables, la prórroga deberá ser solicitada antes del vencimiento de los mismos.-

RESOLUCIONES: En cuanto a las resoluciones legisladas en el Capítulo V, no contiene mayores variantes en relación al Código Procesal Civil y Comercial, establece que las interlocutorias y definitivas deberán ser fundadas y contener los mismos requisitos que las civiles a saber: a) lugar y fecha; b) carátula y número de expediente; c) nombre de las partes; d) sucinta relación de los hechos; e) mención de la prueba

ofrecida y rendida, e informes y dictámenes obrantes en la causa; f) motivación o considerandos; y g) parte dispositiva, expresada en términos claros y precisos.

Luego establece los plazos que tiene la autoridad minera para dictar las resoluciones: Las de mero trámite dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del cargo de lo solicitado. b) Las que deban resolver incidencias, dentro de los quince (15) días siguientes de quedar firme el decreto de autos a estudio. c) Las que deban resolver sobre el fondo de las cuestiones objeto del proceso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de quedar firme el decreto de autos.

RECURSOS: Los recursos que los interesados pueden plantar contra las Resoluciones de la autoridad minera se hallan legislados en los arts. 128 a 131 del Código de Procedimiento Minero. El Código establece dos tipos de recursos: de reposición o revocatoria y de apelación.-

El recurso de reposición, procede contra las providencias simples o de mero trámite y deberá interponerse dentro de los 5 días de notificada la resolución que se impugna, debiendo fundarse en el mismo escrito de interposición. Si hubiera contraparte, se conferirá traslado a la contraria por cinco 5 días, caso contrario se resolverá sin sustanciación alguna.

Tratándose de resoluciones definitivas procederá el recurso de apelación que se interpondrá por ante la misma autoridad dentro de los 5 días de notificada la resolución y se concederá libremente.- Una vez concedido tramitará por ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia Ordinaria, con competencia en materia minera, donde se fundará el recurso, previa notificación a la Fiscalía de Estado.

PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS

En el Capítulo VI el Código regla lo relativo al procedimiento a seguir en las solicitudes de permisos de exploración, manifestación de descubrimientos, servidumbres, estableciendo un procedimiento interno:

De la petición original, una vez certificado el cargo por Escribanía, se corre vista al Registro Catastral, el que deberá expedir informe sobre la ubicación del pedimento y

las circunstancias que juzgue pertinente consignar. b) Luego vuelve a Escribanía la que completará y certificará la titularidad y estado de los derechos mineros que se le superponen. c) Una vez producidos los informes citados, las actuaciones pasan a despacho de la Autoridad Minera a los efectos de proveer las medidas que correspondan.

Luego establece que en las inspecciones mineras para la verificación de obligaciones legales, los gastos serán a cargo del interesado, quien deberá depositar a la orden de la Autoridad Minera la suma y en el plazo que esta determine, bajo apercibimiento de: a) En verificaciones previas al otorgamiento de la concesión, se declarará el abandono del trámite y el archivo de las actuaciones. b) En verificaciones posteriores a la concesión, se aplicará una multa de hasta diez (10) veces el monto del canon correspondiente a una unidad de medida de exploración, debiendo ingresarse la misma en el plazo de veinte (20) días.

Permiso de exploración o cateo.-

La solicitud de permiso de exploración o cateo debe ser presentada por triplicado en un formulario preestablecido. Conjuntamente con la solicitud debe acompañarse la constancia del pago provisorio del canon de exploración correspondiente a las unidades de medidas solicitadas.

La solicitud deberá contener el nombre y domicilio del superficiario, en caso de no conocer el nombre y domicilio del propietario del terreno, la Autoridad Minera, le entregará los oficios a los efectos de su individualización por ante las oficinas correspondientes, los cuales deberán ser diligenciados en un plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de tener por desistido el pedido.

En cuanto al área solicitada deberá ser lo más regular posible, de modo tal que pueda constituirse una pertenencia minera, salvo la existencia de otros derechos mineros colindantes, accidentes naturales, límites políticos o zonas prohibidas a los trabajos mineros. Los lados de los permisos que se soliciten deberán tener la orientación Norte – Sur y Este – Oeste.

Corrida vista al Registro Catastral, éste le asigna matrícula catastral e informará sobre: ubicación del pedido, superficie, si es zona libre o si existe superposición, y demás elementos o circunstancias que considere útiles.

Si el pedimento se hizo sobre una zona ocupada en su totalidad, se desestimará la solicitud disponiéndose la devolución del canon abonado y el archivo del expediente. Si se superpusiera parcialmente a otras, la Autoridad Minera dará vista al interesado del informe de Registro Catastral por cinco (5) días bajo apercibimiento de tenerlo por aceptado, ordenándose la prosecución del trámite por la parte libre que quedare.

Cumplidas dichas pautas y requisitos formales, se ordena la anotación del pedimento en el Registro de Exploraciones, su publicación dos (2) veces alternadas durante diez (10) días en el Boletín Oficial a costa del interesado, y se notifica al superficiario. Con la notificación de la anotación del pedimento en el Registro de Exploraciones se entregarán al interesado los edictos correspondientes para su publicación. Dentro del plazo de veinte (20) días contados a partir de la última publicación de los edictos en el Boletín Oficial, toda persona que se considere con derecho a formular oposición deberá hacerlo por escrito con los requisitos exigidos en el artículo 8. No habiendo oposición o sustanciada la misma, el expediente quedará en estado de resolver.

Una vez otorgado el permiso de cateo, se tomará nota en el Registro Catastral y en el Registro de Exploraciones dejándose constancia de la concesión, la fecha en que vence el permiso y la de la liberación de las áreas correspondientes. No concedido el permiso se archivará el expediente, dejándose constancia en el Registro de Exploraciones y se comunicará al Catastro.-

El peticionante tiene treinta (30) días a partir de la notificación del otorgamiento del permiso, para instalar los trabajos de exploración a que se refiere el artículo 25 del Código de Minería. Asimismo deberá expresar la situación del emplazamiento en el terreno y descripción de los trabajos, a los fines de la verificación por la Autoridad Minera.

En cuanto a la caducidad de los permisos de cateo el Código prevé una causal objetiva, en la cual ésta se produce de pleno derecho, por el sólo transcurso del término acordado para su duración. Y la otra causal esta dada por la comisión de las

infracciones establecidas en el artículo 41 del Código de Minería, es decir cuando el permisionario no instala los trabajos de exploración en legal plazo, o cuando los suspende después de comenzados, o cuando no cumple con el programa mínimo de trabajos. En éstos últimos tres casos, la caducidad se decretará previa constatación de las mismas por parte de la Autoridad Minera.

CATEGORIAS DE MINAS, MINAS VACANTES

Minas de Primera Categoría.-

Desde el art. 54 al 63 el Código regula el procedimiento aplicable para la obtención de la concesión de una mina de Primera Categoría.-

El descubridor al igual que en la generalidad de los tramites de inicio ante la autoridad minera, deberá presentar para obtener la concesión de una mina de primera categoría, solicitud por triplicado en un formulario provisto por la Autoridad Minera, el cual debe contener, además de los requisitos generales del artículo 8, los establecidos en el artículo 46 del Código de Minería, a saber: muestra del mineral, nombre que ha de llevar la mina, punto de descubrimiento, el nombre y mineral de las minas colindantes y a quién pertenece el terreno. Se procederá al rechazo in limine del pedido que no indique el punto de descubrimiento o el área de reconocimiento.

Presentada, se corre vista al Registro Catastral, quién determinará la ubicación del descubrimiento y área del reconocimiento, y si la misma recae en terreno franco en su totalidad o no.

Una vez efectuado el informe por el Registro Catastral, la solicitud pasará a despacho de la Autoridad Minera, a los efectos de proveer las medidas que correspondan. Cumplido, se ordenará el registro de la manifestación y la publicación de los edictos indicados en el artículo 53 del Código de Minería (3 veces en el espacio de 15 días). Si no se acredita la publicación, se declarará la caducidad del pedido y se ordenará el archivo de las actuaciones.

El descubridor deberá dentro de los cien (100) días de notificado el registro, el ejecutar la labor legal, comunicando a la Autoridad Minera, los trabajos y estudios

realizados que pongan de manifiesto la existencia del mineral descubierto acompañando un croquis con la ubicación precisa de labor legal.

Luego, el descubridor deberá dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo para la realización de la labor, deberá solicitar mensura y demarcación de pertenencias. La petición y su proveído también se publicarán en la forma dispuesta por el artículo 53 del Código de Minería.-

Dentro de los quince (15) días de la última publicación los terceros que se consideren con derechos podrán deducir oposición a la petición de mensura, la cual deberá contener: Expresión clara del pedimento al cual se opone, con indicación de su matrícula catastral; Fundamento de su oposición acompañando los instrumentos de prueba que tuviere en su poder; 3) Ofrecimiento de la prueba que haga a su derecho. La misma se tramitará y resolverá conforme lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minería (Se resolverá con audiencia de los interesados, y dentro de los 20 días al de su presentación) y 124 de este Código.

Una vez resuelta la oposición y practicada la mensura y demarcación la Autoridad Minera, previa intervención del Registro Catastral, se pronunciará sobre la misma. Aprobada la mensura ordenará la inscripción en el Registro. En éste caso otorga copia al concesionario el cual constituye título definitivo de propiedad minera.

Minas de Segunda Categoría.-

El procedimiento para obtener la concesión de Minas de 2° Categoría se halla regulado en los arts. 64 a 69 del Código.-

Para ésta categoría de minas, se debe cumplir con los mismos requisitos exigidos para las minas de 1° categoría establecidos en el artículo 54 del Código de Procedimientos. Las sustancias comprendidas en los incisos c), d), y e) del artículo 4 del Código de Minería se solicitarán y concederán en la misma forma que las sustancias de la primera categoría. Existen dos excepciones: Cuando se trata de sustancias comprendidas en los inc. A (arenas metalíferas y piedras preciosas ubicadas en los lechos de los ríos) y B (desmontes, relaves, escoriales) del Código de Minería. En éstos casos, para obtener una concesión de explotación exclusiva de las sustancias

señaladas en los incisos a) y b) del artículo 4, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en los artículos 187, 190, 192, 194 y 195 del Código de Minería.

Presentada la solicitud de concesión exclusiva de sustancias comprendidas en el inciso a) del artículo 4 del Código de Minería, se corre vista al Registro Catastral para que ubique el pedimento. Cumplido, se notificará a los dueños del terreno y a los que ocupen el espacio denunciado, se registrará el pedimento y se publicarán los edictos dispuestos en el artículo 53 del Código de Minería. Vencido el plazo de las oposiciones, la Autoridad Minera, previo informe de perito oficial sobre las condiciones necesarias del establecimiento, dictará la correspondiente resolución otorgando las pertenencias solicitadas y fijando un plazo de trescientos (300) días previsto en el artículo 189 del Código de Minería para que las obras y equipos necesarios estén en condiciones de funcionar, bajo apercibimiento de disponerse la pérdida de los derechos y cancelación del registro. En lo demás, se aplicarán los trámites y requisitos correspondientes a las sustancias de la primera categoría.

Sustancias de Tercera Categoría.-

La concesión de las canteras situadas en terrenos fiscales a las que alude el artículo 201 del Código de Minería, se rige además de los requisitos generales del artículo 8 de este Código y 19 del Código de Minería, el solicitante deberá expresar: a) Clase de sustancia a explotar, situación de la zona, extensión y tiempo por el que solicita la concesión. b) Plano de ubicación expresando las coordenadas de los vértices de la figura que la componen y las referencias que hubiere lugar para el caso de ríos. c) Acreditación de la titularidad del dominio fiscal. d) Proyecto de aprovechamiento del yacimiento.

Luego se ordena la publicación de la solicitud en el Boletín Oficial por 3 veces en el plazo de 15 días, existiendo un plazo de 20 días a partir de la última publicación para deducir oposiciones.

No formulándose oposición o resueltas favorablemente al peticionante las que se hubieren deducido, se resolverá sobre el otorgamiento de la concesión especificando las condiciones para su ejercicio. En la misma resolución se dispondrá su mensura o

demarcación. La extensión de la concesión no podrá exceder de cincuenta (50) hectáreas y no podrá exceder de los veinte (20) años su duración.-

El concesionario deberá abonar hasta el cinco 5 % del valor del mineral que extraiga, y o deberá iniciar los trabajos dentro de los 3 meses de otorgada la concesión.

Minas Vacantes.-

Las minas vacantes se hallan reguladas en los arts. 89 a 94 del Código de Minería.-

Las minas vacantes son inscriptas en el Registro respectivo, dentro de los 5 días desde que queda firme la resolución que así la declara, o desde el momento en que ésta opere automáticamente.-

Una vez registrada se debe publicar por 1 día en el Boletín Oficial, quedando en disponibilidad a partir del vencimiento del décimo día de la publicación. En ningún caso de vacancia el anterior concesionario podrá solicitar la mina, sino después de transcurrido 1 año de inscripta la vacancia.

Cuando un concesionario haga manifestación de abandono de una mina, se publicará dicha manifestación 3 veces en el término de 15 días. La adjudicación a terceros sólo podrá realizarse una vez transcurridos 10 días desde la última publicación, mediante la presentación de una solicitud de concesión presentada por triplicado que deberá contener, además de los requisitos exigidos en el artículo 8 del Código de procedimientos, los antecedentes, ubicación y matrícula catastral de la mina vacante. Asimismo, conjuntamente con la solicitud se deberá abonar el canon adeudado hasta el momento de haberse operado la caducidad; caso contrario la solicitud será rechazada y archivada sin dar lugar a recurso alguno.

De la presentación se corre vista al Escribano de Minas quien informará sobre el estado de vacancia y el Registro Catastral comunicará los antecedentes existentes en el mismo. Fecho, si los informes son favorables, la Autoridad Minera concederá la mina solicitada, ordenando su inscripción en el Registro correspondiente. Los gravámenes que pesaren sobre una mina vacante quedan caducos de pleno derecho con la declaración de vacancia.

SERVIDUMBRES:

El procedimiento aplicable a las servidumbres mineras se halla regulado en los arts. 107 a del Código de procedimientos.-

En la solicitud de servidumbre deberá manifestarse el objeto de la misma, la mina o derecho exploratorio de que es titular y determinará con precisión el terreno afectado. Con la solicitud se acompañará un croquis o plano de la zona en 3 ejemplares, con el nombre y domicilio de los propietarios del terreno, concesionarios mineros afectados por la servidumbre y un informe que justifique la necesidad de la misma. Presentada la solicitud se tomará nota del pedido y de la concesión de la servidumbre en cada uno de los expedientes para los cuales se ha solicitado.

Presentada la solicitud, el Registro Catastral ubicará el pedido y emitirá el informe correspondiente, del cual se corre vista al peticionante por el término de cinco (5) días. Si no hay observaciones o resueltas las mismas, se notificará a los propietarios de los terrenos, a los titulares de los derechos mineros afectados y se publicarán edictos por dos veces en el término de 10 días en el Boletín Oficial. Las personas indicadas anteriormente podrán deducir oposición dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Si no mediara oposición, o la que se dedujere fuere resuelta en favor del peticionante, la Autoridad Minera se expedirá concediendo o denegando la servidumbre. Cuando la resolución fuere favorable se la anotará en los registros respectivos.

TEXTO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS MINEROS

TITULO I

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El procedimiento de las actividades regidas por el Código de Minería y demás leyes de la materia se regirá por las disposiciones del Código de fondo y de este Código. El Código Procesal en lo Civil y Comercial de la provincia será de aplicación supletoria en toda cuestión no regulada especialmente en el presente.

ARTÍCULO 2.- La competencia de la Autoridad Minera provincial es originaria, improrrogable y excluyente. La incompetencia en razón de la materia es absoluta y debe ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso. La Autoridad Minera podrá encomendar a otras autoridades administrativas o judiciales, según corresponda, la ejecución de determinadas diligencias o actos vinculados al proceso.

ARTÍCULO 3.- La Autoridad Minera sólo podrá ser recusada con causa y excusarse conforme a las normas del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la provincia. La ley orgánica respectiva determinará la forma de reemplazo en cada caso.

ARTÍCULO 4.- El impulso procesal corresponde tanto a la Autoridad Minera como al peticionante. Cuando se hubiere paralizado el trámite durante sesenta (60) días por causa imputable al interesado, se le emplazará para que en el término de cinco (5) días lo continúe, bajo apercibimiento de declarar el abandono del mismo con pérdida de los derechos y archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 5.- En los procesos mineros principales o incidentales, cualquiera fuere su estado, la Autoridad Minera podrá citar a las partes para una Audiencia conciliatoria e intentar una solución de común acuerdo del conflicto de que se trate. La incomparencia de las partes o una de ellas, sin justificación acreditada antes de la audiencia, será presunción de voluntad negativa para la conciliación. Si compareciendo ambas, no se llegare a acuerdo alguno, la causa seguirá su trámite según su estado. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes y homologados por la Autoridad Minera tendrán efecto de resolución firme.

ARTÍCULO 6.- Los expedientes son públicos. Los interesados tendrán derecho en todo tiempo a conocer su estado por sí o por intermedio de sus representantes, siempre que no estén a despacho para resolución.

CAPITULO II

ACTOS PROCESALES

ARTÍCULO 7.- Toda persona con capacidad legal puede actuar como peticionante en el trámite minero o como parte en caso de contienda, por sí o por medio de representantes legales o por las personas autorizadas por el artículo 55 del Código

de Minería. Cuando la presentación se hiciere por medio de apoderado, éste deberá acreditar su personería o inscripción acompañando el testimonio del poder correspondiente el que se agregará al expediente, o su copia autorizada cuando el apoderado pidiere la devolución del original. El testimonio podrá ser pasado a Escribanía de Minas a los efectos de su inscripción en el Registro, debiendo dejarse constancia en el expediente. Podrá también conferirse autorización para actuar mediante la presentación de un escrito en el mismo expediente, con la firma certificada por el Escribano de Minas o Escribano Público de Registro, Juez de Paz o autoridad policial.

ARTÍCULO 8.- En todo escrito inicial que se presente ante la Autoridad Minera, deberá indicarse el nombre y apellido o razón social en su caso, documento de identidad, estado civil, edad, nacionalidad y profesión del peticionante, denunciar domicilio real, constituir domicilio legal dentro del radio que fije la Autoridad Minera y determinar en forma clara el objeto de la petición. Si no se hubiere fijado domicilio legal quedará automáticamente constituido en los estrados de la Autoridad Minera. La solicitud inicial referente a cualquier pedido de derechos mineros, deberá ser presentada ante Mesa de Entradas, donde se colocará el cargo respectivo que certificará el Escribano de Minas. La presentación se hará conforme a las leyes tributarias en vigencia y en triplicado, utilizando para cada caso el formulario que a tal efecto proveerá la Autoridad Minera a tarifa de costo y cuyo uso se declara obligatorio.

ARTÍCULO 9.- En toda petición de derechos mineros, Escribanía de Minas practicará las diligencias del artículo 49 del Código de Minería. Los demás escritos de actuación serán cargados por medios mecánicos o electrónicos que contendrán fecha y hora de ingreso, debiendo ser firmada la recepción por el funcionario autorizado. La foliatura de los expedientes se considera parte integrante del respectivo escrito, pieza o folio. El foliado deberá efectuarse en forma correlativa, en la parte superior derecha, y no podrá tacharse, enmendarse, ni modificarse sin decisión de la Autoridad Minera que exprese los motivos o justificativos del desglose o cambio de foliatura.

ARTÍCULO 10.- Los escritos, informes y demás piezas de un expediente, deben agregarse por orden cronológico. En las actuaciones no se emplearán abreviaturas, no se rasparán las frases equivocadas, sobre las que se pondrá una línea que permita su

lectura y se escribirán entre renglones las palabras que hayan de reemplazarlas, salvándose el error al final de la diligencia y antes de la firma.

ARTÍCULO 11.- La prioridad del descubrimiento o de cualquier otro derecho minero se determinará por quien primero presentare la respectiva solicitud en condiciones legales, salvo lo dispuesto en los artículos 60 a 62 del Código de Minería. Cuando se presentaren dos o más solicitudes simultáneas se preferirá al solicitante que haya cumplido todos o el mayor número de requisitos legales exigidos para la presentación de la solicitud. Si estos requisitos hubiesen sido cumplidos en paridad de condiciones la Autoridad Minera citará a los presentantes a una audiencia de conciliación. En caso de incomparencia de alguna de las partes, se tendrá por desistido el pedimento para el ausente. No mediando conciliación, la Autoridad Minera adjudicará la prioridad en el mismo acto mediante sorteo entre los presentes, realizado ante el Escribano de Minas.

ARTÍCULO 12.- Cuando en la petición inicial se hubieren omitido alguno de los requisitos subsanables exigidos por las leyes nacionales o provinciales sobre minería, se notificará al interesado fijándole un plazo de cinco (5) días, salvo que aquéllas fijen uno distinto para que supla las omisiones o rectifique los errores, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

ARTÍCULO 13.- Se rechazará "in limine" todo pedimento minero sobre un área ya solicitada que se encuentre en trámite. Dichas presentaciones no otorgarán prioridad alguna.

ARTÍCULO 14.- La Autoridad Minera podrá dictar medidas para mejor proveer. Rechazará "in limine" toda presentación que sea inoficiosa, notoriamente dilatoria o impertinente.

ARTÍCULO 15.- No se admitirán peticiones sobre caducidad de derechos mineros ya concedidos o en trámite, si no se acompaña testimonio o se indica claramente el lugar, asiento o expediente donde se encuentre la prueba que lo acredite. A este efecto la Autoridad Minera, a simple requerimiento de parte, solicitará o expedirá los testimonios e informes del caso.

ARTÍCULO 16.- Todo escrito que rebata dictámenes o informes recaídos en expedientes en trámite, de los que no estuviere previsto correr vista o traslado, será devuelto al presentante dejándose constancia en autos.

ARTÍCULO 17.- Una vez denominada la mina conforme a las prescripciones legales, no podrá cambiarse ni modificarse el nombre en forma alguna, aunque se declare caduca, vacante o se transfiera por cualquier título. En caso de homonimia o incorrecta manifestación del nombre de una mina que induzca a error en la individualización, la Autoridad Minera exigirá al denunciante su cambio, adición o rectificación, con carácter previo al registro de la concesión, bajo apercibimiento de hacerlo de oficio.

CAPITULO III

NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 18.- Las resoluciones de la Autoridad Minera, serán notificadas con arreglo a las disposiciones de este Código.

ARTÍCULO 19.- Las providencias, cuando no se disponga en este o por la Autoridad otra forma de notificación, quedarán notificadas ministerio por ministerio de la ley, en todas las instancias los días martes y viernes o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado o inhábil.

ARTÍCULO 20.- Serán notificadas personalmente o por cédula en el domicilio constituido las relativas a: a) El proveído de presentación. b) Los traslados, vistas, intimaciones o apercibimientos. c) Toda audiencia o comparendo. d) La apertura de la causa a prueba, la providencia que deniega o declara la causa de puro derecho y la que pone los autos para alegar. e) La resolución definitiva y las interlocutorias con fuerza de tal. f) Las providencias y resoluciones que expresamente deben notificarse por ley o por reglamentos en el constituido, o cuando lo ordenare expresamente en cada caso la Autoridad. g) La concesión o denegatoria de recursos.

ARTÍCULO 21.- Las providencias o resoluciones relativas a medidas de seguridad e higiene o de protección del ambiente que no admitan dilación y aquéllas que a juicio de la Autoridad revistan carácter de urgentes, podrán ser notificadas por

telegrama colacionado o carta documento, cuyo recibo y copia se agregarán al expediente.

ARTÍCULO 22.- Cuando deban citarse personas desconocidas o de domicilio ignorado, la notificación se hará por edictos. Una vez acreditadas en forma sumaria esas circunstancias, bajo la responsabilidad y a cargo del peticionante, serán publicados en la forma que establece el Código de Minería.

ARTÍCULO 23.- El retiro de los autos importa notificación de las providencias o resoluciones dictadas en el expediente.

ARTÍCULO 24.- La Autoridad Minera podrá disponer en casos especiales y a cargo del interesado si correspondiere, la notificación por otros medios de los ya expresados, tales como edictos publicados en la prensa privada, mensajes telegráficos, de radiodifusión, televisivos, carteles insertos en lugares públicos próximos al lugar de ubicación del derecho minero u otros medios de publicidad que garanticen la defensa en juicio y la continuidad del trámite de los expedientes.

ARTÍCULO 25.- Toda publicación que debiere efectuarse por edictos, que no tuviere fijado plazo deberá practicarse por una sola vez.

CAPITULO IV

PLAZOS

ARTÍCULO 26.- Los términos procesales que establece este Código son perentorios e improrrogables. Se computarán en días hábiles, salvo los fijados por el Código de Minería, y empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación. Se considerará válida la presentación efectuada el día hábil inmediato al del vencimiento y dentro de las dos primeras horas del despacho. La Autoridad Minera podrá habilitar días y horas inhábiles a instancia de partes o de oficio cuando hubiere causa urgente que lo justifique. Por excepción y a petición de parte o de oficio, podrá declarar por resolución fundada la suspensión de los términos.

ARTÍCULO 27.- Las vistas y traslados que no tengan un término especial establecido se entenderán conferidos por cinco (5) días.

ARTÍCULO 28.- Las prórrogas autorizadas por la ley de fondo sólo procederán si se solicitan antes del vencimiento acreditando causas justificadas. La prórroga no podrá

otorgarse por un término mayor al que se prorroga. Transcurridos los términos legales y las prórrogas, en su caso, se dará por decaído el derecho que se hubiere dejado de usar, continuándose la sustanciación del expediente según su estado.

CAPITULO V

RESOLUCIONES

ARTÍCULO 29.- Las resoluciones de la Autoridad Minera deberán ser dictadas dentro de los siguientes términos: a) Las de mero trámite dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del cargo de lo solicitado. b) Las que deban resolver incidencias, dentro de los quince (15) días siguientes de quedar firme el decreto de autos a estudio. c) Las que deban resolver sobre el fondo de las cuestiones objeto del proceso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de quedar firme el decreto de autos. Toda resolución firme que disponga la liberación de áreas registradas, ocupadas por derechos mineros, deberá ser publicada de oficio en extracto por la Autoridad Minera, por un día en el Boletín Oficial. Se podrá insertar un extracto de la misma en las tablillas de la Autoridad Minera. De la publicación se dejará constancia en los expedientes respectivos. Las zonas ocupadas sólo quedarán disponibles para la petición de terceros, después de transcurridos diez (10) días de la fecha de la publicación.

ARTÍCULO 30.- Las resoluciones interlocutorias y definitivas que dicte la Autoridad Minera deberán ser fundadas y contener: a) lugar y fecha; b) carátula de los autos o designación y número de expediente; c) nombre de las partes; d) sucinta relación de los hechos; e) mención de la prueba ofrecida y rendida, e informes y dictámenes obrantes en la causa; f) motivación o considerandos; y g) parte dispositiva, expresada en términos claros y precisos.

CAPITULO VI

PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 31.- Las solicitudes de exploración, manifestación de descubrimiento, socavones, ampliaciones o acrecentamiento de pertenencia, mejora de pertenencia y demasías y servidumbres, seguirán en general el siguiente procedimiento interno: a) La petición original, una vez certificado el cargo por Escribanía, pasará al Registro

Catastral, el que deberá expedir informe sobre la ubicación del pedimento y las circunstancias que juzgue pertinente consignar. b) Cumplido, tomará nuevamente intervención Escribanía la que completará y certificará la titularidad y estado de los derechos mineros que se le superponen. c) Una vez producidos los informes citados, o cuando por su índole deba prescindirse de la certificación de Escribanía, las actuaciones se cursarán a despacho de la Autoridad Minera a los efectos de proveer en un solo acto las medidas que correspondan.

ARTÍCULO 32.- Para las solicitudes en que no se haya previsto un trámite específico, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo anterior, conforme las normas del Código de Minería, aplicando en lo pertinente las disposiciones del presente en cuanto a publicación y caducidad de las peticiones.

ARTÍCULO 33.- Cuando deban realizarse inspecciones mineras para la verificación de obligaciones legales, los gastos serán a cargo del interesado, quien deberá depositar a la orden de la Autoridad Minera la suma que esta determine, y en el plazo que la misma establezca. La falta de depósito del importe en término, producirá: a) En verificaciones previas al otorgamiento de la concesión, la declaración del abandono del trámite y el archivo de las actuaciones. b) En verificaciones posteriores a la concesión, se aplicará una multa de hasta diez (10) veces el monto del canon correspondiente a una unidad de medida de exploración, debiendo ingresarse la misma en el plazo de veinte (20) días.

CAPITULO VII

NORMAS DE PROTECCION AMBIENTAL

ARTÍCULO 34.- Los titulares de derechos mineros, previo al inicio de las actividades, deberán dar cumplimiento a los requisitos que en materia de protección ambiental establece el Título XIII, Sección Segunda del Código de Minería.

TITULO II

CAPITULO I

PERMISO DE EXPLORACION O CATEO

ARTÍCULO 35.- La solicitud de permiso de exploración o cateo se presentará por triplicado en el formulario establecido en este Código. La prioridad se determinará por la fecha y hora de presentación de la solicitud en condiciones legales.

ARTÍCULO 36.- El solicitante de un permiso de exploración o cateo deberá cumplir en su escrito inicial con lo establecido en el artículo 8 de este Código, y con lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Minería. La solicitud deberá ser acompañada de la constancia del pago provisorio del canon de exploración correspondiente a las unidades de medidas solicitadas. Para la presentación del programa mínimo de trabajos, se utilizará el formulario que se inserta en el Anexo de este Código.

ARTÍCULO 37.- Cuando el interesado manifieste no conocer el nombre y domicilio del propietario del terreno, la Autoridad Minera, sin perjuicio de otras medidas que estime pertinentes, le entregará los oficios a los efectos de su individualización por ante las oficinas correspondientes. El interesado tendrá quince (15) días para gestionar los informes necesarios y devolver diligenciado el oficio a la oficina, bajo apercibimiento de tener por desistido el pedido.

ARTÍCULO 38.- La forma del área solicitada será lo más regular posible, de modo tal que pueda constituirse una pertenencia minera, salvo la existencia de otros derechos mineros colindantes, accidentes naturales, límites políticos o zonas prohibidas a los trabajos mineros. Los lados de los permisos que se soliciten deberán tener la orientación Norte - Sur y Este - Oeste.

ARTÍCULO 39.- Recibido el expediente por el Registro Catastral, éste deberá asignarle la matrícula catastral e informará sobre: ubicación del pedido, superficie, si es zona libre o si existe superposición, circunstancia de los artículos 29 y 30 del Código de Minería y demás elementos relativos al pedido y su graficación, dando cumplimiento en lo pertinente a lo dispuesto por el artículo 25 del Código de Minería.

ARTÍCULO 40.- Si el pedimento correspondiera a zona ocupada en su totalidad, se desestimaré la solicitud disponiéndose la devolución del canon abonado y el archivo del expediente, previa notificación al peticionante. Si la solicitud se superpusiera parcialmente a otras, la Autoridad Minera dará vista al interesado del informe de Registro Catastral por cinco (5) días bajo apercibimiento de tenerlo por aceptado, ordenándose la prosecución del trámite por la parte libre que quedare. En los casos en

que correspondiera la devolución del canon abonado, el reintegro deberá operarse dentro del plazo de diez (10) días conforme lo dispuesto por el artículo 25 del Código de Minería.

ARTÍCULO 41.- Llenados los requisitos de forma y producida la ubicación en el Registro Catastral, se ordenará la anotación del pedimento en el Registro de Exploraciones, su publicación dos (2) veces alternadas durante diez (10) días en el Boletín Oficial a costa del interesado, de acuerdo a lo establecido en el Código de Minería, y se procederá a notificar al superficiario. No encontrándose el propietario en el lugar de su residencia o tratándose de propietario incierto, la publicación será citación suficiente. Con la notificación de la anotación del pedimento en el Registro de Exploraciones se entregarán al interesado los edictos correspondientes para su publicación, debiendo acreditar la misma en el término de veinte (20) días. En caso de demora en la publicación deberá exhibir en el mismo plazo copia del recibo de pago.

ARTÍCULO 42.- Dentro del plazo de veinte (20) días que establece el Código de Minería, contados a partir de la última publicación de los edictos en el Boletín Oficial, toda persona que se considere con derecho a formular oposición deberá hacerlo por escrito con los requisitos exigidos en el artículo 8 y siguientes de este código, sustanciándose en la forma señalada para el trámite de las oposiciones. No formulándose oposición o sustanciada la misma, el expediente quedará en estado de resolver.

ARTÍCULO 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el propietario del terreno puede exigir que el explorador rinda fianza para responder por el valor de las indemnizaciones, de acuerdo al artículo 32 del Código de Minería. La incidencia de fianza no suspende el trámite de la concesión ni el transcurso del plazo fijado para la exploración.

ARTÍCULO 44.- Otorgado el permiso de cateo, se tomará nota en el Registro Catastral y en el Registro de Exploraciones dejándose constancia de la concesión, la fecha en que vence el permiso y la de la liberación de las áreas correspondientes. No concedido el permiso se archivará el expediente, dejándose constancia en el Registro de

Exploraciones y se comunicará al Catastro, cumpliéndose con la publicación dispuesta en el artículo 29 párrafo 2do de este Código.

ARTÍCULO 45.- Dentro de los treinta (30) días establecidos por el Código de Minería, contados a partir de la notificación del otorgamiento del permiso, deberán quedar instalados los trabajos de exploración descriptos en el programa a que se refiere el artículo 25 del Código de Minería. En el mismo plazo el cateador deberá expresar la situación del emplazamiento en el terreno y descripción de los trabajos, a los fines de la verificación correspondiente por la Autoridad Minera. El concesionario deberá presentar la información y documentación a que se refiere el artículo 30 última parte del Código de Minería dentro del plazo de noventa (90) días de vencido el permiso que éste establece bajo el apercibimiento contenido en la citada norma, salvo que la Autoridad Minera lo hubiera dispensado de esta obligación.

ARTÍCULO 46.- Toda zona de cateo cuyo permiso caducara por vencimiento del término o la solicitud fuera declarada caduca y archivadas las actuaciones por resolución de la Autoridad, no podrá ser solicitada por otro interesado sino después de transcurridos diez (10) días de la publicación dispuesta en el artículo 29 párrafo 2do. de este Código.

ARTÍCULO 47.- No podrá otorgarse a una misma persona ni a su socio ni por interpósita persona permisos sucesivos sobre una misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la publicación de la caducidad de una y la solicitud de otro un plazo no menor de un (1) año conforme lo dispuesto en el artículo 30 párrafo 5to. del Código de Minería.

ARTÍCULO 48.- Los permisos de cateo quedarán caducos de pleno derecho, por el sólo transcurso del término acordado para su duración. En los demás casos que prevé el artículo 41 del Código de Minería la caducidad se decretará previa constatación del incumplimiento por parte de la Autoridad Minera. Las caducidades, en todos los casos, se publicarán en la forma dispuesta en el artículo 29 2da. parte de este Código, dándose de baja de los registros correspondientes.

ARTÍCULO 49.- Para que la Autoridad Minera otorgue los diferimientos a que la faculta el artículo 30 párrafo 4to. del Código de Minería, el interesado deberá acreditar

causas debidamente justificadas. En todos los casos en que se otorgue el diferimiento deberá determinarse el término correspondiente.

CAPITULO II

INVESTIGACION DESDE AERONAVES

ARTÍCULO 50.- En el caso de investigación desde aeronaves, el interesado deberá cumplir en la presentación, además de los requisitos del artículo 36 de este Código, con lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Minería. Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso que fija el Código de Minería, deberá acompañar copia del pedido de autorización de vuelo presentado ante la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivar su solicitud sin más trámite. Con la presentación deberá adjuntar constancia de pago del canon provisional correspondiente a las unidades de medidas solicitadas bajo el apercibimiento contenido en el artículo 31 del Código de fondo.

ARTÍCULO 51.- Previa intervención de Escribanía de Minas y el Registro Catastral, el permiso se otorgará sin otro trámite y se publicará por un día en el Boletín Oficial, sirviendo la publicación de suficiente citación a propietarios y terceros. El permiso tendrá una duración no superior a los ciento veinte (120) días que fija el Código de Minería, contados a partir de la fecha de la notificación del otorgamiento o de la autorización de vuelo, lo que ocurra en último término conforme lo dispuesto en el artículo 31 1er. párrafo del mencionado Código. Si dentro del plazo de treinta (30) días, que fija el Código de Minería, y de presentada la solicitud el interesado no hubiera obtenido el permiso de vuelo, la misma será archivada sin dar lugar a recurso alguno.

ARTÍCULO 52.- Los permisos que se otorguen se anotarán en el Registro de Exploraciones y en los correspondientes al Catastro y no podrán afectar otros derechos mineros solicitados o concedidos prioritariamente en el área. No podrán otorgarse permisos sucesivos en la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud de otro el plazo ciento cincuenta (150) días conforme lo establecido en el artículo 31 8vo. párrafo del Código de Minería.

CAPITULO III

SOCAVON DE EXPLORACION

ARTÍCULO 53.- El pedido de socavón de exploración se registrará por lo dispuesto en el artículo 31 de este Código y 129 y concordantes del Código de Minería.

TITULO III

CAPITULO I

MINAS DE PRIMERA CATEGORÍA

ARTÍCULO 54.- Para obtener una concesión de mina de la primera categoría, el descubridor deberá presentar solicitud ante la Autoridad Minera por triplicado, en el formulario que a tal efecto proveerá la Autoridad Minera a tarifa de costo y cuyo uso se declara obligatorio. Dicho formulario deberá contener, además de lo dispuesto en el artículo 8 de este Código, los requisitos establecidos en el artículo 46 del Código de Minería.

ARTÍCULO 55.- Girada la solicitud por Escribanía de Minas al Registro Catastral, éste emitirá en el plazo correspondiente el informe sobre la ubicación del descubrimiento y área del reconocimiento, determinando si la misma recae en terreno franco en su totalidad o no. En caso de superposición parcial, el peticionante deberá pronunciarse de conformidad en el término de 15 días de notificado sobre su interés respecto del área libre. No existiendo pronunciamiento expreso, la petición se archivará sin más trámite.

ARTÍCULO 56.- Se procederá al rechazo in limine del pedido que no indique el punto de descubrimiento así como el área de reconocimiento solicitada en la forma prevista por el artículo 19 del Código de Minería. Cuando el área denunciada excediere la superficie máxima permitida por el Código de Minería, se emplazará al solicitante por cinco (5) días para que la determine en forma, bajo apercibimiento de la pérdida automática de la prioridad.

ARTÍCULO 57.- Con el informe del Registro Catastral, la solicitud pasará a despacho de la Autoridad Minera, a los efectos de proveer las medidas que correspondan. La muestra presentada podrá ser analizada sin que paralice el trámite del expediente, salvo el caso del artículo 47 del Código de Minería. Cumplido, se ordenará el registro de la manifestación y la publicación de los edictos indicados en el artículo 53 del Código de Minería. Si el peticionante no acreditare la publicación, previa

certificación del Escribano y de emitidos los dictámenes del caso, se declarará la caducidad del pedido y se ordenará el archivo de las actuaciones. Cualquier persona con interés legítimo podrá oponerse a la manifestación en el plazo de sesenta (60) previsto en el artículo 66 del Código de Minería.

ARTÍCULO 58.- Dentro de los cien (100) días de notificado el registro, el descubridor deberá ejecutar la labor legal conforme a lo dispuesto por los artículos 19, 68 y concordantes del Código de Minería, comunicando en el formulario inserto en el Anexo, los trabajos y estudios realizados que pongan de manifiesto la existencia y tipo de yacimiento descubierto acompañando un croquis demostrativo, la inclinación, dirección y potencia del mineral con la ubicación precisa de la labor e indicación de sus coordenadas. En caso de yacimientos de tipo diseminado, se deberá indicar las labores ejecutadas demostrativas de la existencia del yacimiento en los términos del artículo 76 tercer párrafo del Código de Minería.

ARTÍCULO 59.- Dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo para la realización de la labor legal o de las prórrogas que se hubieran otorgado conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 del Código de Minería, el titular del derecho deberá solicitar mensura y demarcación de pertenencias en la forma indicada por los artículos 19, 81, 82 y concordantes de ese cuerpo legal en el formulario inserto en el Anexo. La petición y su proveído se publicarán en la forma dispuesta por el artículo 53 del Código de Minería, debiendo acreditarse la publicación agregando el primer y último ejemplar de
de la misma.

ARTÍCULO 60.- Cuando dentro de los treinta de (30) días de vencido el plazo señalado en el artículo 68 y, en su caso las prórrogas de los artículos 69 y 70 del Código de Minería, el titular del derecho no hubiese comunicado la realización de la labor legal, o comunicada ésta se comprueba que es insuficiente o inexistente, la Autoridad Minera previa certificación del Escribano de Minas y dictámenes que fueran necesarios, declarará la caducidad del derecho, cancelando el Registro y teniendo la manifestación de descubrimiento como no presentada. Se tomará nota de esta resolución en el Catastro Minero y Escribanía de Minas.

ARTÍCULO 61.- Si dentro del mismo plazo se hubiera comunicado la realización de la labor legal, pero el titular del derecho no hubiese solicitado mensura de pertenencia u omitido la publicación de edictos de mensura se tendrán por desistidos los derechos en trámite, inscribiéndose la mina como vacante, conforme lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Minería.

ARTÍCULO 62.- Dentro de los quince (15) días de la última publicación los terceros que se consideren con derechos podrán deducir oposición a la petición de mensura, la que se tramitará y resolverá conforme lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minería y 124 de este Código.

ARTÍCULO 63.- Practicada la mensura y demarcación de pertenencias con arreglo a lo dispuesto en el Título V de este Código, y agregados a los autos el acta, diligencia y plano técnico correspondiente, la Autoridad Minera, previa intervención del Registro Catastral y con los dictámenes que fueran necesarios, se pronunciará sobre la misma. Aprobada la mensura ordenará la inscripción en el Registro, otorgando copia al concesionario como título definitivo de propiedad minera. Cuando se trate de la mensura de un grupo minero se seguirá el procedimiento indicado en los artículos 138 a 144 del Código de Minería. Se colocarán mojones demarcatorios de la concesión únicamente en los vértices de la figura resultante, si así lo pidiera el interesado. En la petición y mensura del grupo se dará intervención al Catastro Minero y Escribanía de Minas.

CAPITULO II

MINAS DE SEGUNDA CATEGORIA

ARTÍCULO 64.- Los pedidos de minas de segunda categoría se presentarán con los requisitos exigidos en el artículo 54 de este Código, a excepción de las señaladas en los incisos a) y b) del artículo 4 del Código de Minería.

ARTÍCULO 65.- Para obtener una concesión de explotación exclusiva de las sustancias señaladas en los incisos a) y b) del artículo 4, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en los artículos 187, 190, 192, 194 y 195 del Código de Minería. Cuando se trate del aprovechamiento de desmontes, relaves y escoriales, la Autoridad Minera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185 del Código de Minería, los declarará de

aprovechamiento común, previas las comprobaciones necesarias y mandará publicar dicha declaración en el Boletín Oficial de oficio y por una sola vez.

ARTÍCULO 66.- Cuando se solicite una concesión exclusiva de sustancias comprendidas en el inciso a) del artículo 4 del Código de Minería, para explotación por establecimiento fijo, deberán observarse los recaudos del artículo 8 de este Código y 19 del Código de fondo. Presentada la solicitud, pasarán de inmediato las actuaciones a Registro Catastral para que ubique el pedimento. Cumplido, se notificará a los dueños del terreno y a los que ocupen el espacio denunciado, se registrará el pedimento y se publicarán los edictos dispuestos en el artículo 53 del Código de Minería. Vencido el plazo de las oposiciones, la Autoridad Minera, previo informe de perito oficial sobre las condiciones necesarias del establecimiento, dictará la correspondiente resolución otorgando las pertenencias solicitadas y fijando un plazo de trescientos (300) días previsto en el artículo 189 del Código de Minería para que las obras y equipos necesarios estén en condiciones de funcionar, bajo apercibimiento de disponerse la pérdida de los derechos y cancelación del registro. En lo demás, se aplicarán los trámites y requisitos correspondientes a las sustancias de la primera categoría.

ARTÍCULO 67.- Las sustancias comprendidas en los incisos c), d), y e) del artículo 4 del Código de Minería se solicitarán y concederán en la misma forma que las sustancias de la primera categoría. En caso que se encontraren en terreno del dominio particular, se cumplirá con el requisito previo de la notificación al propietario del terreno, a los efectos de que éste pueda ejercer el derecho de preferencia que le confiere el artículo 171 del Código de Minería. Si el descubridor manifestare no conocer al propietario, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de este Código.

ARTÍCULO 68.- Si el propietario del terreno optare por la explotación del yacimiento, se registrará a su nombre y se procederá a la publicación de edictos, ejecución de la labor legal, petición y ejecución de la mensura, en las condiciones que fija el Código de Minería para las sustancias de la primera categoría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 173 de ese cuerpo legal. El propietario podrá obtener cualquier número de pertenencias, dentro de los límites de la propiedad particular de conformidad al artículo 175 del Código de Minería.

ARTÍCULO 69.- Si el propietario del terreno no optare en el término de veinte (20) días de notificado previsto por el Código de Minería, se declarará perdido su derecho, previa certificación del Escribano de Minas, registrándose el yacimiento a nombre del descubridor, para quien regirán desde dicha fecha los derechos, obligaciones y régimen de caducidad indicados en este Código y en el Código de Minería para los minerales de primera categoría.

CAPITULO III

SUSTANCIAS DE TERCERA CATEGORIA

ARTÍCULO 70.- La concesión de las canteras situadas en terrenos fiscales a las que alude el artículo 201 del Código de Minería, se regirá por las disposiciones del presente capítulo.

ARTÍCULO 71.- Además de los requisitos generales del artículo 8 de este Código y 19 del Código de Minería, el solicitante deberá expresar: a) Clase de sustancia a explotar, situación de la zona, extensión y tiempo por el que solicita la concesión. b) Plano de ubicación expresando las coordenadas de los vértices de la figura que la componen y las referencias que hubiere lugar para el caso de ríos. c) Acreditación de la titularidad del dominio fiscal. d) Proyecto de aprovechamiento del yacimiento.

ARTÍCULO 72.- Cumplido lo establecido en el artículo precedente la Autoridad Minera requerirá la conformidad de los organismos competentes en su caso, los que deberán expedirse en un plazo no mayor a quince (15) días. Si éstos no se expidieren en el plazo establecido, se entenderá su consentimiento.

ARTÍCULO 73.- La Autoridad Minera ordenará la publicación a cargo del interesado de la solicitud en el Boletín Oficial por tres (3) veces en el plazo de quince (15) días, fijando un plazo de veinte (20) días a partir de la última publicación para deducir oposiciones.

ARTÍCULO 74.- No formulándose oposición o resueltas favorablemente al peticionante las que se hubieren deducido, la Autoridad Minera, con los informes y dictámenes que correspondan, previa valoración sobre la congruencia y factibilidad de la explotación, resolverá sobre el otorgamiento de la concesión especificando las condiciones para su ejercicio. En la misma resolución se dispondrá su mensura o

demarcación con las instrucciones pertinentes, a costa del interesado, fijándose la fecha de realización de la diligencia. La Autoridad Minera determinará la extensión de la concesión, la que no podrá exceder de cincuenta (50) hectáreas y su duración, la que no podrá exceder de los veinte (20) años, de acuerdo a las características del yacimiento y del proyecto presentado. La concesión podrá ser cedida con la previa conformidad de la Autoridad Minera.

ARTÍCULO 75.- La concesión de canteras podrá ser renovada por un plazo no mayor al otorgado originariamente, siempre que se solicite antes de su vencimiento debiendo cumplimentarse los requisitos del artículo anterior.

ARTÍCULO 76.- A partir de la fecha de concesión se pagará un derecho de explotación de hasta el cinco por ciento (5 %) del valor del mineral que extraiga, puesto en cantera, acreditado por declaración jurada. La Autoridad Minera podrá requerir la exhibición de guías de tránsito de minerales, declaraciones impositivas o cualquier otro medio de prueba a los fines de verificar lo declarado. La Autoridad Minera, fijará el volumen de extracción exigible por mes a los efectos de la determinación del importe mínimo de pago.

ARTÍCULO 77.- En el plazo y por los períodos que fije la Autoridad Minera el concesionario presentará una planilla estadística expresando la extracción realizada y el precio obtenido, acompañando boleta de depósito del pago de los derechos. Es facultad de la Autoridad Minera comprobar los trabajos que se realicen, certificar datos y pedir informaciones al concesionario, el que obligatoriamente deberá proporcionarlos.

ARTÍCULO 78.- El concesionario deberá iniciar los trabajos dentro de los tres (3) meses de otorgada la concesión y no podrá suspenderlos salvo casos debidamente justificados.

ARTÍCULO 79.- Son causales de caducidad de concesión: 1) Incumplimiento de los artículos 74 último párrafo y 77 de este Código. 2) Incumplimiento de la obligación de realizar mensura y demarcación en el plazo fijado por la Autoridad Minera. 3) La omisión de la presentación o el falseamiento de la declaración jurada al que refiere el artículo 76. 4) Incumplimiento en el plazo de iniciación prevista por el artículo 78 o suspensión de los trabajos por un período superior a los seis (6) meses sin autorización.

ARTÍCULO 80.- Producida las caducidades por las causales previstas en el artículo 79 y determinados los saldos devengados impagos, la Autoridad Minera deberá intimar su pago al obligado por el término de diez (10) días. No abonados los mismos, realizará lo conducente para la iniciación de las acciones pertinentes. Deberá, asimismo, comunicar tal hecho a los organismos impositivos nacionales y provinciales.

ARTÍCULO 81.- Todo titular de una concesión que hubiere caducado en virtud de lo dispuesto en artículo 79 inciso 3) 2do. supuesto no podrá obtener otra concesión de las regladas en este capítulo por el término de cinco (5) años en dicha jurisdicción. La inhabilitación será inscripta en el Registro de Productores Mineros.

ARTÍCULO 82.- La concesión para explotar canteras no impedirá la concesión de permisos de cateo de sustancias de primera y segunda categoría, ni las manifestaciones de descubrimiento que hicieren otros interesados. Las relaciones entre ambos concesionarios se regirán por las reglas establecidas en los artículos 100 y 101 del Código de Minería.

ARTÍCULO 83.- El concesionario tendrá derecho a efectuar construcciones dentro de la cantera. No habrá derecho a indemnización al término de la concesión por las instalaciones y construcciones que se hubieren ejecutado; podrá, no obstante, retirar las que puedan ser separadas y transportadas sin perjuicio para el yacimiento. Caso contrario quedarán a beneficio de la cantera sin derecho a reclamo de indemnización alguna.

ARTÍCULO 84.- Los yacimientos de sustancias de tercera categoría situado en terreno de propiedad fiscal deberán obtener con anterioridad a la iniciación de la explotación su registro ante la Autoridad Minera, quedando sometido a las disposiciones concernientes a la estadística minera, policía, seguridad y protección del ambiente. También deberá obtener la respectiva matrícula catastral en su condición de mina, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 2 inciso 3) y 20 del Código de Minería. Las disposiciones del presente artículo son aplicables a los yacimientos de tercera categoría situados en terrenos de propiedad de particulares.

TITULO IV

CAPITULO I

OTRAS CONCESIONES

ARTÍCULO 85.- Las solicitudes de ampliación y de mejoras de pertenencias deberán presentarse ante la Autoridad Minera con los requisitos generales de los artículos 8 de este Código y 19 del Código de Minería, agregando el nombre de la mina, el terreno donde se encuentra y los hechos que justifiquen la petición.

ARTÍCULO 86.- Se seguirá el procedimiento para la concesión de las sustancias de primera categoría, y no habiéndose deducido oposición dentro del plazo señalado por el artículo 66 del Código de Minería, o resueltas las que se hubieren promovido, la Autoridad Minera, previo los informes que requieren los artículos 109 párrafos 2 y 3 y artículo 110 del Código de Minería, concederá la ampliación o mejora que se solicite, la que deberá ser anotada en el Libro respectivo. Los demás trámites relativos a la mensura se regirán por las disposiciones establecidas para las minas de primera categoría y las pertinentes del artículo 112 del Código de Minería.

ARTÍCULO 87.- Sin perjuicio de la publicación del artículo 53 del Código de Minería, la solicitud de demasía será notificada por cédula a los propietarios de minas colindantes. Si dentro del plazo que establece el artículo 66 del Código citado, éstos no ejercitaren su derecho, perderán la adjudicación proporcional que podría corresponderles. En lo demás se seguirá en las demasías el mismo procedimiento establecido para la ampliación de pertenencias.

CAPITULO II

MINAS CADUCAS POR FALTA DE PAGO DE CANON

ARTÍCULO 88.- En caso de caducidad por falta de pago del canon minero, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 219 del Código de Minería.

CAPITULO III

MINAS VACANTES

ARTÍCULO 89.- Las minas que quedaren vacantes deberán ser inscriptas en el Registro respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes de quedar firme la resolución de declaración de vacancia, o desde el momento en que ésta opere automáticamente,

de acuerdo al Código de Minería, sin perjuicio de la notificación a la autoridad de aplicación del Título XIII, Sección Segunda del precitado cuerpo legal.

ARTÍCULO 90.- Registrada la mina como vacante se procederá a la publicación por un (1) día en el Boletín Oficial, quedando en disponibilidad a partir del vencimiento del décimo día de la publicación. La misma deberá realizarse en un término no mayor de treinta (30) días de la inscripción en el Registro de minas vacantes. En ningún caso de vacancia el anterior concesionario podrá solicitar la mina, sino después de transcurrido un (1) año de inscripta la vacancia conforme el artículo 219 in fine del Código de Minería.

ARTÍCULO 91.- Cuando un concesionario haga manifestación de abandono de una mina o pertenencia, de conformidad al artículo 226 del Código de Minería, se publicará dicha manifestación tres (3) veces en el término de quince (15) días, conforme al artículo 228 del mismo Código. La adjudicación a terceros sólo podrá realizarse una vez cumplido el plazo que establece el artículo 29 2do. párrafo del presente Código. El escrito de abandono contendrá las medidas de protección ambiental que se propone llevar adelante el concesionario con posterioridad al cierre de la mina.

ARTÍCULO 92.- La solicitud de concesión de mina vacante será presentada por triplicado y deberá contener, además de los requisitos exigidos en el artículo 8 del presente Código, los antecedentes, ubicación y matrícula catastral de la mina vacante.

ARTÍCULO 93.- El Escribano de Minas informará sobre el estado de vacancia y el Registro Catastral sobre los antecedentes existentes en el mismo. Con los informes favorables la Autoridad Minera concederá la mina solicitada, ordenando su inscripción en el Registro correspondiente. El nuevo concesionario deberá proseguir el trámite según su estado. Los gravámenes inscriptos quedan caducos de pleno derecho con la declaración de vacancia.

ARTÍCULO 94.- En cualquier caso de vacancia, el solicitante deberá abonar el canon adeudado hasta el momento de haberse operado la caducidad, ingresando con la solicitud el importe correspondiente; caso contrario la solicitud será rechazada y archivada sin dar lugar a recurso alguno. En caso de solicitudes simultáneas de minas vacantes se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de este plexo legal.

CAPITULO IV

SOCAVON

ARTÍCULO 95.- Todo pedido de socavón se registrará por las normas de los artículos 124 y siguientes del Código de Minería.

CAPITULO V

MINERALES NUCLEARES

ARTÍCULO 96.- La concesión de los minerales nucleares y los desmontes, relaves y escoriales que los contengan, se registrarán por las disposiciones de este Código, referente a las minas de primera y segunda categoría, según los casos, sin perjuicio del cumplimiento por parte de los interesados ante la Autoridad Minera, de los requisitos establecidos en el Título XI del Código de Minería.-

TITULO V

CAPITULO I

MENSURA Y DEMARCACION DE PERTENENCIAS

ARTÍCULO 97.- Las mensuras de las minas, grupos mineros, rectificación de mensuras, reamojonamiento de minas y otras operaciones similares, serán a cargo del titular del derecho y deberán ser realizadas por perito oficial. No existiendo disponibilidad de éste, por profesional habilitado propuesto por el interesado.

ARTÍCULO 98.- En toda propuesta de perito particular deberá constar la aceptación del profesional y la constitución de su domicilio legal, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada.

ARTÍCULO 99.- El plazo máximo para la ejecución de la mensura será de sesenta (60) días corridos. En todos los casos la Autoridad Minera, con intervención del Catastro Minero, fijará fecha y hora de inicio, forma y condiciones de su realización.

ARTÍCULO 100.- En el caso que la mensura se realice por perito oficial el costo de la misma deberá ser depositado por el interesado con una antelación no menor a diez (10) días de la fecha de iniciación. La falta de depósito en término dará lugar a tener por desistido el derecho, registrándose la mina como vacante.

ARTÍCULO 101.- Si la mensura se realiza por perito particular, y no se ejecuta en el plazo fijado por la Autoridad Minera, se tendrá por desistido el derecho declarándose la vacancia.

ARTÍCULO 102.- Tanto los peritos oficiales como particulares, deberán ajustar su cometido a las normas del Código de Minería, Código de Procedimientos Mineros, Reglamento Operativo Unificado del Catastro Minero e instrucciones generales y particulares impartidas por la Autoridad Minera. En las operaciones de mensura actuará la Autoridad Minera o el funcionario que aquélla designe, cuyos gastos serán a cargo del interesado.

ARTÍCULO 103.- La notificación ordenada por el artículo 85 del Código de Minería a los titulares o representantes de las minas colindantes será efectuada por la Autoridad Minera con anticipación de cinco (5) días.

ARTÍCULO 104.- Cumplidos todos los requisitos establecidos en el presente capítulo la mensura se realizará con o sin presencia de las personas interesadas.

CAPITULO II

DILIGENCIA DE MENSURA

ARTÍCULO 105.- Toda diligencia de mensura contendrá: a) Las instrucciones especiales impartidas. b) Las notificaciones pertinentes. c) Descripción completa y exacta de la operación ejecutada, con expresa mención de la fecha en que se ha practicado, indicación de las minas colindantes, asistentes a las operaciones, observaciones formuladas, resoluciones adoptadas y cuestiones que han quedado pendientes de resolución por la Autoridad. d) Detalle de las operaciones de relacionamiento del perímetro de la concesión, del punto de partida y de la labor legal. e) Las características de la labor legal indicando rumbo, inclinación, potencia del criadero u otras que pongan de manifiesto la existencia, el tipo y características de la mineralización. f) Plano de la concesión demarcada y del terreno inmediato, con las coordenadas de los vértices de la figura resultante. La carátula del plano especificará número de expediente, el nombre y matrícula catastral de la mina, concesionarios, minerales, lugar y departamento en que se ubica, número de pertenencias, número de

expediente respectivo, como asimismo el croquis de ubicación, y cualquier otro dato de importancia a criterio de la Autoridad o del perito.

ARTÍCULO 106.- La diligencia de mensura deberá ser presentada por triplicado, con copia de todas las actuaciones que en ella figuren, con el plano levantado impreso y en soporte magnético. El plazo de presentación no deberá exceder los diez (10) días desde la fecha de terminación de las operaciones. Con la documentación indicada deberá adjuntarse el Acta de mensura siguiendo el contenido del formulario incorporado en el Anexo de este Código.

TITULO VI

CAPITULO I

SERVIDUMBRES

ARTÍCULO 107.- El solicitante de servidumbre deberá manifestar el objeto de la misma, sus datos personales, denunciar domicilio real y constituir domicilio legal, mina o derecho exploratorio de que es titular y determinará con precisión el terreno afectado. Acompañará un croquis o plano de la zona en tres (3) ejemplares, en la escala y con las indicaciones del Catastro Minero, nombre y domicilio de los propietarios del terreno, concesionarios mineros afectados por la servidumbre y un informe que justifique la necesidad inmediata de la misma. Se utilizará el formulario agregado al Anexo de este Código, tomándose nota del pedido y de la concesión de la servidumbre en cada uno de los expedientes para los cuales se ha solicitado.

ARTÍCULO 108.- Previa certificación de la vigencia del derecho minero para el cual se solicita la servidumbre, el Registro Catastral ubicará el pedido y emitirá el informe correspondiente. Del informe se correrá vista al peticionante por el término de cinco (5) días. Si no fuera impugnado o quedaran resueltas en forma sumaria las observaciones, se notificará a los propietarios de los terrenos, a los titulares de los derechos mineros afectados y se publicarán edictos por dos (2) veces en el término de diez (10) días en el Boletín Oficial. Las personas indicadas anteriormente podrán deducir oposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación. A los fines de la individualización del propietario del suelo, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 37 de este Código.

ARTÍCULO 109.- Si no mediara oposición, o la que se dedujere fuere resuelta en favor del peticionante, con el informe técnico correspondiente y previo cumplimiento del artículo 152 del Código de Minería, la Autoridad Minera se expedirá concediendo o denegando la servidumbre. Cuando la resolución fuere favorable se la anotará en los registros respectivos.

ARTÍCULO 110.- En el caso del artículo 153 del Código de Minería, la Autoridad Minera con el informe técnico fijará el importe de la fianza ajustándose en lo demás y en cuanto al trámite, a las normas del Título XI de este Código.

ARTÍCULO 111.- En las controversias a que diere lugar el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el artículo 148 del Código de Minería, por el uso de los caminos abiertos para dos minas o más, la Autoridad Minera a petición de parte, determinará la proporción en que cada uno de los concesionarios debe contribuir para sufragar los costos de la obra y gastos de conservación. En el caso de servidumbres de uso de aguas del dominio público, la Autoridad Minera concertará con la autoridad del agua, el régimen de utilización teniendo en cuenta el carácter de utilidad pública que reviste la industria minera. El uso del agua se ajustará a las disposiciones del Código de Minería y del Código y reglamentos de aguas de la Provincia. Las servidumbres sobre los terrenos para las instalaciones correspondientes al uso del agua, serán otorgadas por la Autoridad Minera.

TITULO VII

CAPITULO I

EXPROPIACION

ARTÍCULO 112.- Cuando el titular de una concesión minera quiera ejercer el derecho del artículo 156 del Código de Minería, deberá presentarse ante la Autoridad Minera demandando la expropiación del terreno respectivo. Cuando los terrenos pertenezcan a particulares, se observará el procedimiento establecido en el Título XI de este Código. Se dará intervención al Registro Catastral para el informe y toma de razón correspondiente.

ARTÍCULO 113.- El minero expresará también en su presentación el monto de la indemnización ofrecida, y si el propietario estuviere conforme con ella, se ordenará la

transmisión del dominio mediante escritura pública. Sin perjuicio de lo dispuesto por la segunda parte del párrafo primero del artículo 159 del Código de Minería, no se admitirá la ocupación del terreno hasta tanto no se haya acreditado el pago de la indemnización.

TITULO VIII

CAPITULO I

REGISTRO DE DOCUMENTOS Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS MINEROS

ARTÍCULO 114. - Todo documento, contrato, resolución administrativa o judicial que deba ser registrada ante la Autoridad Minera, se presentará en original o testimonio auténtico, acompañado de dos copias certificadas, juntamente con la solicitud presentada en el formulario agregado en el Anexo de este Código. Previa vista a Escribanía de Minas y al Catastro Minero, para su informe, la Autoridad Minera dispondrá la inscripción, si resulta procedente, y ordenará se expida constancia de la misma a favor del interesado. La diligencia de inscripción tramitara en expediente separado y no interrumpirá el curso del expediente principal, donde se dejará constancia de la misma.

ARTÍCULO 115.- Se realizarán por el sistema de folio real o matrícula, sin perjuicio de los sistemas de registración ya existentes, las inscripciones o anotaciones de los instrumentos que: a) Constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos de propiedad minera; b) transmitan el mero uso o tenencia de derechos mineros; c) dispongan embargos, indisponibilidades y demás providencias cautelares. La matriculación se efectuará destinando a cada mina una característica de ordenamiento que servirá para designarla. El funcionamiento y requisitos legales a cumplimentar para la toma de razón en el registro de la propiedad minera por el sistema de folio real será reglamentado por la autoridad competente. La registración por dicho sistema será obligatoria a partir de la vigencia de la fecha de vigencia que disponga la reglamentación respectiva.

ARTÍCULO 116.- La Autoridad Minera no inscribirá con carácter definitivo la transferencia de derechos en cuyos instrumentos no consten los informes o certificados otorgados por los registros correspondientes de los que surjan la titularidad del derecho, gravámenes que lo afecten y la capacidad del transmitente.

ARTÍCULO 117.- En las cuestiones no reguladas por el presente capítulo se aplicarán las normas y principio que surgen de la ley Nacional N° 17.801 o la que la reemplazare. La modificación de la matrícula catastral y de la matrícula registral, sólo podrá efectuarse, por resolución fundada de la Autoridad Minera.

ARTÍCULO 118.- Toda cesión y transferencia de derechos mineros deberá hacerse constar por escrito, en instrumento público o privado. La cesión o transferencia total o parcial, de derechos sobre minas, después del vencimiento del plazo para la realización de la labor legal deberá realizarse por instrumento público. Los contratos de transferencia de derechos sobre una mina, celebrados en instrumentos privados, después del vencimiento del plazo señalado precedentemente, sólo serán oponibles a terceros y procederá su registración o toma de razón a favor del adquirente, cuando hayan sido elevados a instrumento público.-

TITULO IX

CAPITULO I

INFRACCIONES

TRAMITE Y EJECUCION

ARTÍCULO 119.- La Autoridad Minera podrá ordenar medidas de Policía Minera, sin sustanciación alguna, en ejercicio de su competencia y poder de policía, para el control de la debida aplicación de las leyes nacionales y provinciales del sector minero.-

ARTÍCULO 120.- Las actuaciones por infracción a las normas de Policía Minera, a las disposiciones sobre certificación de propiedad y libre tránsito del mineral e infracción al Título 13 Sección II del Código de Minería y sus normas complementarias, serán tramitadas por ante la Autoridad Minera.

ARTÍCULO 121.- Labrada el acta de constatación de la infracción, en la misma se emplazará al infractor, para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del acta, comparezca ante la Autoridad Minera, constituya domicilio, formule su descargo y produzca la prueba que haga a su derecho. Dentro de los cinco (5) días siguientes, la Autoridad Minera deberá dictar resolución.- La resolución que se dicte estableciendo sanción, será recurrible según lo dispuesto en el Título XII de este Código, con efecto devolutivo.-

ARTÍCULO 122.- Las multas impuestas por la Autoridad Minera, por cualquier concepto, no abonadas en término por el obligado al pago, podrán ser demandadas judicialmente, por el trámite de juicio ejecutivo regulado por el Código Procesal en lo Civil y Comercial de la provincia. Servirá de suficiente título ejecutivo, la resolución de la Autoridad Minera con constancia de su notificación y que se encuentra firme e impaga.-

TITULO X

CAPITULO I

DERECHO DE VISITA DE LAS

CONCESIONES MINERAS COLINDANTES

ARTÍCULO 123.- Todo dueño de pertenencias puede solicitar permiso para visitar las minas colindantes por las causas, en los términos y bajo las condiciones establecidas en los artículos 107 y 108 del Código de Minería.

TITULO XI

CAPITULO I

CONTENCIOSO MINERO

ARTÍCULO 124.- Toda demanda u oposición que se formule a un pedimento deberá contener, además de los requisitos exigidos por el artículo 8, los siguientes: 1) Expresión clara del pedimento al cual se opone, con indicación de su matrícula catastral; 2) Fundamento de su oposición acompañando los instrumentos de prueba que tuviere en su poder; 3) Ofrecimiento de la prueba que haga a su derecho. En las oposiciones no proceden excepciones de previo y especial pronunciamiento, debiendo ser interpuestas, sustanciadas y resueltas juntamente con todas las demás defensas.

ARTÍCULO 125.- Todas las actuaciones contenciosas se sustanciarán corriendo traslado por el término de diez (10) días a la contraparte. Si hubiere reconvención, de la misma se correrá traslado por diez (10) días a la parte actora.- Los incidentes que se produzcan en la tramitación se sustanciarán conforme la regulación que para los mismos contiene el Código Procesal Civil y Comercial.-

ARTÍCULO 126.- Contestado el traslado y la reconvención en su caso, se abrirá la causa a prueba por el término de veinte (20) días, salvo que se declare cuestión de

puro derecho. La producción de las pruebas se regirá por las normas que para cada una de ellas establezca el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.-

ARTÍCULO 127.- Vencido el término probatorio, se certificará tal circunstancia y se pondrán los autos a disposición de las partes por cinco (5) días para que informen por escrito sobre el mérito de las pruebas. El proveído deberá notificarse a todas las partes y comenzará a correr el término común desde el día siguiente hábil a la última notificación realizada. Vencido el término, se agregarán los informes que se hubieren producido y se pasarán los autos a resolución de la Autoridad Minera.-

TITULO XII

CAPITULO I

RECURSOS

ARTÍCULO 128.- Contra las resoluciones de la Autoridad Minera podrá interponerse recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días de notificadas, a fin de que sean revocadas por contrario imperio. El recurso deberá fundarse en el escrito de interposición. Si la resolución hubiere sido dictada de oficio o a pedido de parte, se resolverá sin sustanciación alguna, y si hubiera contraparte, se conferirá traslado a la contraria por cinco (5) días. La resolución deberá dictarse en el plazo establecido por el artículo 29 de este Código.

ARTÍCULO 129.- Contra las resoluciones definitivas dictadas por la Autoridad Minera procederá el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial. El recurso de apelación se interpondrá por ante la misma autoridad dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución y se concederá libremente, conforme a las normas del procedimiento ordinario, tramitándose por ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia Ordinaria, con competencia en materia minera.

ARTÍCULO 130.- En la sustanciación del recurso de apelación, deducido en contra de una resolución de la Autoridad Minera en los procesos de jurisdicción voluntaria, deberá darse participación a Fiscalía de Estado. A tal efecto, la Autoridad Minera al conceder este recurso notificará a Fiscalía de Estado.

ARTÍCULO 131.- El presente ordenamiento entrará en vigencia dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir de su publicación. A partir de ese momento,

quedará derogado el Decreto Ley N° 117-HG-1.957 y toda otra disposición que se le oponga.

ARTÍCULO 132.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.-

LEY 6026 DE PROMOCION MINERA.-

La Ley 6026 fue sancionada el 15 de Diciembre de 1982 con el objeto de estimular la instalación de empresas mineras en el ámbito de la Provincia. En cuanto a los beneficios otorgados por ésta Ley, los mismos consisten en exenciones impositivas por tributos existentes o a crearse dentro de la jurisdicción provincial con excepción de las tasas por servicios y contribución por mejoras.-

Las exenciones serán otorgadas por el Poder Ejecutivo previa aprobación del correspondiente convenio en caso de que se cumplimenten los requisitos exigidos. La concesión o denegación de las exenciones establecidas se efectuar mediante el acto administrativo correspondiente.

Las exenciones no regirán para las Empresas Estatales, ni para las tasas impositivas que correspondan a las solicitudes de cateos. Tampoco se concede exenciones a aquellas empresas titulares, socios o gerentes registren condena pendiente de cumplimiento por cualquier tipo de delito doloso con pena privativa de libertad o cuando registren antecedentes por incumplimiento de cualquier régimen de promoción nacional o provincial o que mantengan deudas exigibles con el fisco provincial.

En cuanto a los beneficios que pueden ser otorgados, la Ley fija una escala que abarca desde el 100% de exención hasta el 50 % de acuerdo a los años de ejercicio fiscal:

Primero 5 ejercicios fiscales hasta 100% de exención.

6° a 10° hasta 75% de exención.

11° a 15° hasta 50% de exención.

En el caso de impuesto de Sellos, la exención es siempre en un 100% y hasta un plazo máximo de diez (10) ejercicios fiscales.

Vencido el plazo por el cual se acordó las exenciones, el beneficiario está obligado a mantener sus actividades mineras por un plazo mínimo de 5 años más, caso contrario deberá abonar los impuestos de los que estuvo exento.

*** Texto de la Ley 6026/82.-**

Salta, 15 de diciembre de 1982

LEY N° 6026

Ministerio de Economía

Expte. N° 25-00525/77.

VISTO lo actuado en el expediente N° 25-00525/77 del Registro del Ministerio de Economía y el decreto nacional N° 877/80, en ejercicio de las facultades legislativas concedidas por la Junta Militar.

El Gobernador de la Provincia de Salta

Sanciona y promulga con fuerza de LEY:

Artículo 1º.- La presente ley de promoción minera, tiene por finalidad:

- a) Estimular el desarrollo minero provincial en todas sus etapas: prospección, exploración, explotación, concentración y beneficio de minerales.
- b) Apoyar la instalación de nuevas actividades industriales que utilicen, como insumos principales, productos primarios provenientes del sector minero.
- c) Promover la instalación de sistemas integrados de explotación y/o beneficio que brinden escala económica al pequeño productor minero.
- d) Estimular el mejoramiento de la eficiencia productiva de las explotaciones existentes.

Art. 2º.- Podrán ser beneficiarios de la presente ley, las personas físicas o jurídicas, constituidas en el país con arreglo a su legislación y que desarrollen actividades mineras en la Provincia de Salta, y/o aquellas que se establezcan conforme a sus leyes con ese propósito.

El Poder Ejecutivo Provincial, mediante fundadas razones de orden técnico, político o económico, determinará las prioridades en cuanto a los minerales y/o actividades a promover en base a la ponderación de las mismas y su adecuación a los

objetivos y circunstancias de orden nacional y provincial. Asimismo, podrá excluir de los beneficios de la presente ley, a las actividades, sustancias o regiones cuya promoción no resultare necesaria.

Art. 3º.- Quedan expresamente excluidos de este sistema promocional las empresas unipersonales o pluripersonales cuyos titulares, socios, gerentes, administradores, directores o síndicos, se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

1- Registren condena pendiente de cumplimiento por cualquier tipo de delito doloso con pena privativa de libertad, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena.

2- Que registren antecedentes por incumplimiento de cualquier régimen de promoción nacional o provincial o que mantengan deudas exigibles con el fisco provincial.

Art. 4º.- A los fines establecidos en la presente ley, el Poder Ejecutivo podrá conceder para las actividades mencionadas en el artículo primero, exenciones impositivas en el ámbito de todos los gravámenes provinciales, existentes o a crearse, excepto tasas retributivas de servicios y contribución de mejoras. El plazo de las exenciones no podrá superar a quince (15) ejercicios fiscales.

El presente artículo será de aplicación, exclusivamente, para aquellos bienes, operaciones y/o actos directamente afectados en forma real y permanente a la actividad beneficiada por la presente ley, previa certificación y justipreciación de la autoridad competente.

Los beneficios promocionales que se otorguen no serán retroactivos y tendrán validez a partir de la fecha de aprobación del correspondiente convenio de promoción por decreto del Poder Ejecutivo.

En el caso de los impuestos provinciales que graven los actos y tramitaciones inherentes a la suscripción y/o aumento de capital social, constitución o fusión de la empresa y sus actos ante el Registro Público de Comercio y otros organismos oficiales, así como también, todo impuesto provincial a los trámites de escrituración, transferencia de dominio o inscripción de los inmuebles afectados a las obras a realizar, los mismos

serán otorgados por Resolución de la Dirección General de Rentas de la Provincia, previo dictamen favorable de la Autoridad de Aplicación.

Art. 5º.- Los inversionistas que forman parte de las empresas acogidas al presente régimen y mientras dure su vigencia, podrán deducir de sus deudas fiscales originadas en el Impuesto que grave a los ingresos brutos, según la designación que el mismo tenga vigente o el que en el futuro la sustituya, el setenta y cinco por ciento (75%) de las sumas efectivamente invertidas como aportaciones directas de capital o suscripción de acciones destinadas a la formación y ampliación de dichas empresas, siempre que, en este último supuesto, las mismas se integren dentro del año de suscripción. Las deducciones mencionadas podrán ser utilizadas dentro del ejercicio fiscal en que se suscriban las inversiones y hasta un mínimo del cincuenta por ciento (50%) sobre las citadas deudas fiscales. Cuando la deducción total acordada, supere este último mínimo, los contribuyentes podrán utilizar el saldo en obligaciones a concretarse en próximos ejercicios fiscales.

Art. 6º.- Sin perjuicio de las precedentes medidas de promoción, el Poder Ejecutivo por intermedio de sus organismos competentes, podrá acordar al pequeño productor minero:

1. Colaboración técnica y ejecución de trabajos exploratorios para la realización de consultas o anteproyectos destinados a lograr apoyo técnico y/o económico de entes públicos y privados nacionales o internacionales.

2. Realización de análisis químicos, petro-calcográficos, estudios y pruebas de concentración o beneficio de minerales con tarifas promocionales.

3. Construcción y mejoramiento de huellas de acceso a yacimientos en base a estudios geológicos que las justifiquen.

- 4.

Art. 7º.- Las exenciones contempladas en la presente ley, no regirán para las Empresas Estatales, ni para aquellas prestaciones de servicios públicos con tarifas monetarias establecidas, cualquiera sea su denominación, ni para las tasas impositivas que correspondan a las solicitudes de cateos.

Art. 8º.- Toda empresa minera que desee acogerse a los beneficios de la presente ley, deberá solicitarlo ante el Poder Ejecutivo, el que, previo estudio y

dictamen del organismo provincial competente, los concederá o denegará mediante el acto administrativo correspondiente.

Art. 9º.- Establécese la siguiente escala máxima para las exenciones previstas en el artículo 4º.

Primero 5 ejercicios fiscales hasta 100% de exención.

6º a 10º hasta 75% de exención.

11º a 15º hasta 50% de exención.

La precedente escala no será de aplicación en el impuesto de Sellos, para el cual la exención será siempre en un 100% y hasta un plazo máximo de diez (10) ejercicios fiscales.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer los convenios que regulen derechos y obligaciones de las empresas acogidas al presente régimen de promoción.

Art. 11.- Se considerarán infracciones específicas, pasibles de sanciones, las siguientes:

a) El incumplimiento en término de la iniciación y ejecución de los planes incluidos en los proyectos aprobados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado y aceptado como tal a solo juicio de la autoridad de aplicación y en general el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios de promoción.

b) La falsedad o demora de las informaciones suministradas por los beneficiarios.

c) La utilización de los bienes afectados al proyecto para fines distintos de los expresamente determinados en el convenio de promoción y las normas que lo rigen.

d) La falta de cumplimiento en tiempo y forma, de los deberes tributarios a cargo del beneficiario, inclusive los puramente formales.

Art. 12.- Las infracciones en que incurrieren los beneficiarios en el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley o de los actos aprobatorios de convenios de promoción, podrán ser sancionados con las siguientes penalidades:

a) Caducidad del convenio de promoción.

b) Caducidad de los beneficios promocionales, otras exenciones y cobro compulsivo de los tributos no ingresados, con más los recargos y multas que correspondieran de acuerdo a la legislación impositiva y los que se establezcan en la reglamentación que se harán efectivos de acuerdo al trámite, plazo y montos que la misma fije.

Art. 13.- A los fines previstos en el artículo 6° de la presente ley el Poder Ejecutivo incluirá anualmente, en el Presupuesto General de Gastos, una partida para el funcionamiento de un “Fondo Especial de Promoción Minera”, el cual se formará con los siguientes conceptos:

a) El ochenta por ciento (80%) del importe a recaudar por cobro del canon minero.

b) El cien por ciento (100%) de los importes a percibir por trabajos requeridos en base a lo estipulado en el artículo 6°.

c) El seis por ciento (6%) de los importes a percibir por regalías de petróleo y gas.

d) El ochenta por ciento (80%) de los importes a percibir por regalías de la Comisión nacional de Energía Atómica (CNEA) y de otras empresas estatales.

e) El cien por ciento (100%) de los importes a recaudar como consecuencia de convenios de promoción.

f) Los fondos asignados especialmente en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.

La creación de los presentes recursos, no significará en ningún caso la disminución, congelación o supresión de las partidas presupuestarias o recursos de cualquier índole que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones de los organismos estatales del área de la minería.

Art. 14.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley sus decretos reglamentarios, será el organismo específico competente del sector estatal provincial en materia minera que determina la Ley Orgánica de Ministerios, quedando facultado el Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos de asesoramiento que estime necesarios.

La Autoridad de Aplicación prestará asesoramiento gratuito sobre la aplicación de la presente ley por intermedio del organismo técnico que reglamentariamente se

designe al efecto. Asimismo, colaborará en la formulación de proyectos de productores mineros de la pequeña y mediana empresa y cooperativas, cuando los mismos carecieran de la suficiente infraestructura técnica y/o administrativa.

Art. 15.- Luego de vencidos los plazos por los que se hubieran acordado las exenciones impositivas de esta ley, el beneficiario de la misma queda obligado a mantener sus actividades mineras por un plazo mínimo de cinco (5) años más, caso contrario la Dirección General de Rentas podrá exigir el pago actualizado de los impuestos no abonados a indicación de la Autoridad de Aplicación.

Art. 16.- El Poder Ejecutivo concertará con las autoridades municipales y otros organismos de la jurisdicción provincial, la adhesión a la presente ley.

Art. 17.- Dentro de los sesenta (60) días de sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo, a proposición de la Secretaría de Estado de Industria y Minería, dictará su reglamentación correspondiente.

Art. 18.- Queda sin efecto toda disposición legal y reglamentaria que se oponga al cumplimiento de la presente ley.

Art. 19.- Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial de Leyes y archívese.

LEY 6294 DE REGALIAS MINERAS.-

La presente Ley viene a establecer el pago que deben soportar las empresas mineras, sean éstas personas físicas o jurídicas privadas, o reparticiones nacionales, provinciales y municipales por la extracción de minerales de yacimientos situados en la Provincia.

Se hallan comprendidas las sustancias minerales de primera y segunda categoría y las de tercera categoría cuando su extracción se realice en terrenos de dominio fiscal.-

La Regalía Minera se fija en base al volumen físico de sustancias minerales extraídas de cada yacimiento en boca-mina, y teniendo cuenta las declaraciones juradas que se deberá presentar a tal efecto en las fechas preestablecidas en la presente Ley.

En cuanto a la forma de pago de las regalías mineras, la ley establece que se efectuará en dinero efectivo y/o en especie mediante la entrega de sustancias minerales, quedando a criterio de la Provincia, la opción del mismo.

Cuando el pago se efectuara en especie, el mineral será adjudicado en venta directa a empresas fabriles radicadas en la Provincia teniendo preferencia, las instaladas en el Departamento del cual provenga el mineral.

Los fondos recaudados se distribuirán de la siguiente forma: 50% al Fondo Especial de Promoción Minera y 50% a la Municipalidad donde se origine la producción.

La falta de pago de las Regalías Mineras vencidos los plazos establecidos en la Ley, trae aparejada una sanción consistente en un recargo mensual del diez por ciento (10%).-

Texto de la Ley N° 6294

Regalía Minera

-Extracción y pago de sustancias minerales

Capítulo I - Del hecho generador

Art. 1º.- La extracción de sustancias minerales que el Código de Minería clasifica como de primera y segunda categoría y las de tercera categoría cuando su extracción se realice en terrenos de dominio fiscal, quedan sujetas al pago de Regalía Minera, con arreglo a las normas que se establecen en esta ley..

Art. 2º.- El pago de la Regalía Minera se exigirá desde el momento en que se proceda a la extracción de las sustancias minerales en boca-mina, con prescindencia del destino de las mismas.

Art. 3º.- Exceptúase del pago de la Regalía Minera a la extracción de sustancias minerales destinadas a la investigación o estudios especiales, en cantidades adecuadas y perfectamente justificadas y a las concesiones mineras regladas en el artículo 270 del Código de Minería.

Capítulo II

De los responsables

Art. 4º.- Son responsables del pago de las regalías, las personas físicas y jurídicas, los organismos y reparticiones nacionales, provinciales y municipales que en el ejercicio principal o accesorio de sus actividades practiquen extracción de minerales de yacimientos o aluviones situados en la Provincia.

Art. 5º.- Cuando en la realización del hecho intervengan dos o más personas se deben considerar solidariamente responsables del pago total de las regalías.

Capítulo III

Bases para la determinación de la Regalía Minera

Art. 6º.- La Regalía Minera se aplicará sobre el volumen físico de sustancias minerales extraídas de cada yacimiento en boca-mina y con independencia de su posterior beneficio.

Art. 7º.- Establécense las siguientes alícuotas para la determinación de las regalías mineras: Sulfato de Sodio – Azufre – Boratos – Carbonato de sodio – Diatomita – Perlita – Granulado Volcánico = Hasta 300 Tn. Exento – Excedente 10%

Cloruro de Sodio. De 0 hasta 500 Tn. Trimestrales: 6%. Más de 500 Tn. 6%. Hierro, cobre, manganeso y aluminio: Hasta 1.250 Tn. Trimestrales: exento. Excedente: 5%. Plomo, plata y otros metalíferos: Hasta 500 Tn. Trimestrales: exento. Excedente: 5%. Canteras y otros minerales no especificados: 3%.

Art. 8º.- A los fines de la determinación del monto de la Regalía Minera, los responsables deberán presentar dentro de los quince (15) días corridos a partir del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de cada año, una declaración jurada en formularios especiales provistos por la Dirección General de Minería.

Capítulo IV

Del pago de las regalías

Art. 9º.- El pago de las regalías mineras se efectuará en dinero efectivo y/o especie, quedando a criterio de la Provincia, la opción del mismo. En el caso de resolver el Estado que el pago de las regalías mineras deban efectuarse en dinero efectivo, se notificará a través del organismo competente, a los productores o responsables, con un trimestre de anticipación.

Art. 10.- El mineral destinado al pago de la Regalía, será entregado sin cargo alguno para el fisco puesto en cancha – mina y tendrán las mismas cualidades y condiciones que tenga el tipo medio común del o los minerales que queden en propiedad del responsable, sobre lo que la Dirección General de Minería, cuando lo considere necesario, practicará los controles de calidad y cantidad.

Art. 11.- Para efectivizar el pago de las Regalías, los productores deberán retirar de la Dirección General de Minería las correspondientes liquidaciones acreditivas del monto fijado y efectuar el pago en el Banco Provincial de Salta.

Art. 12.- El Banco Provincial de Salta arbitrará los medios para que los montos recaudados sean distribuidos en los siguientes porcentajes: 50% al Fondo Especial de Promoción Minera y 50% a la Municipalidad donde se origine la producción, para lo cual requerirá a la Dirección General de Minería la información necesaria.

Art. 13.- El mineral proveniente de las Regalías será adjudicado en venta directa a empresas radicadas o a instalarse con plantas fabriles en la Provincia teniendo preferencia, las instaladas o a instalarse en el Departamento del cual provenga el mineral, pero éste deberá ser procesado en el período máximo de 180 días. Si hubiera más de un establecimiento interesado, la venta se realizará a prorrata teniendo en cuenta la importancia del establecimiento, la cantidad de obreros, etc.

Capítulo V

De las infracciones

Art. 14.- Transcurridos quince (15) días del vencimiento del trimestre calendario, el productor que no haya presentado la declaración jurada a que se hace referencia en el artículo 8º, la Dirección General de Minería fijará de oficio la cantidad y el valor de la Regalía Minera.

Art. 15.- En caso de falsedad en la declaración jurada, el responsable será pasible de una multa equivalente del cien por ciento (100%) del valor correcto de la regalía a pagar.

Art. 16.- La Dirección General de Minería queda facultada para exigir cuando lo considere necesario, la exhibición de libros y documentos de contabilidad de los responsables, a los efectos de la verificación del volumen físico y costo de extracción. Cuando los gastos consignados en las declaraciones juradas presentadas no se encuentren registrados en libros de contabilidad, deberán exhibirse los documentos originales y los antecedentes que sirvieron de base para la cumplimentación de la declaración jurada.

Art. 17.- La falta de pago de las Regalías Mineras al vencimiento de los siguientes plazos: primer trimestre: 15 de mayo; segundo trimestre, 15 de agosto; tercer trimestre: 15 de noviembre de cada año y cuarto trimestre: 15 de febrero del año siguiente, dará lugar a la aplicación de un recargo mensual del diez por ciento (10%).

Art. 18.- Si el responsable no diese cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 16, perderá todo derecho y su reinscripción en el Registro de Productores Mineros de la Provincia, hasta que regularice la deuda y/o la información requerida.

Art. 19.- Las sanciones previstas en la presente Ley, son sin perjuicio de las estipulaciones vigentes o que se establezcan mediante leyes tributarias, a los efectos de mora, infracción o evasión en el pago de la Regalía Minera.

Art. 20.- No tendrán derecho a la compra de minerales provenientes de Regalías quienes no se encuentren al día con el pago de sueldos y aporte previsionales del personal, para lo cual la Dirección General de Minería, exigirá los comprobantes que considere necesarios.

Art. 21.- Derógase el Decreto-ley N° 297/63, la Ley N° 5884 y los decretos N°s. 822/75 y 129/73. Como asimismo toda disposición que se oponga a la presente Ley.

Art. 22.- Comuníquese, etc.

LEY 6712 DE ADHESION A LAS LEYES 24.196 Y 24224.-

Texto de la Ley 6712/93.-

Promulgada por Decreto – Adhesión a Leyes nacionales N°s. 24.196 y 24.224. Sancionada el 19/08/93. Inversiones mineras y Reordenamiento Minero. B.O. N° 14.263. Exptes. N°s. 91-3.370/93; 91-3.324/93; 91-3.363/93 y 91-3.351/93.

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Salta a las Leyes N°s. 24.196 y 24.224 de Inversiones Mineras y Reordenamiento Minero, respectivamente.

Art. 2°.- Invítase a los Municipios de la provincia de Salta a adherir al régimen previsto en la Ley N° 24.196 dictando las normas legales pertinentes.

Art. 3°.- Ratifícase el Acuerdo Federal Minero firmado por el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial, en la ciudad de Buenos Aires el día seis de mayo del año mil novecientos noventa y tres.

Art. 4°.- Invítase a los Municipios de la Provincia a dictar las normas legales pertinentes a tenor de lo previsto en la cláusula noventa del Acuerdo Federal Minero.

Art. 5°.- La presente Ley entrará en vigencia, a partir del día de su publicación oficial.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Salta, 19 de agosto de 1993.

LEY 7221 REFORMA EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO MINERO.-

La Ley 7221/02 modifica el art 135 del Código de Procedimiento Minero, al establecer que las personas dedicadas a la extracción de áridos deberá inscribirse en un registro especial creado al efecto y deberá cumplir con la normativa de Policía Minera e impacto ambiental. Asimismo deberá abonar la regalía correspondiente.

La explotación deberá estar amparada por la Guía de Tránsito correspondiente, en la cual se especificará la concesión minera, contratos concesivos o constancias de inscripción del área territorial concreta en la que se efectúa la explotación, nombre del productor o transportista, tipo de material y metros cúbicos que habilita extraer y transportar.

Quien extraiga o transporte áridos con fines comerciales, sin la correspondiente Guía de Tránsito de Áridos deberá abonar una multa equivalente a cien litros de nafta común, precio público, la primera vez que se labre el acta de infracción. En caso de

primera reincidencia la multa a abonar será equivalente a doscientos litros de nafta común, precio público.

En caso de ulteriores reincidencias la multa será equivalente a trescientos litros de nafta común, precio público.

Esta Ley es complementada y modificada por los decretos 1150 y 334 y las resoluciones 011, 075 y 076 de la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos, las cuales serán objeto de análisis en los puntos subsiguientes.-

*** Texto de la Ley N° 7.221**

Expte. N° 91 – 11.558/02

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, Sancionan con fuerza de LEY

Artículo 1° - Modifícase el Artículo 135 de la Ley de Procedimientos Mineros de la Provincia N° 7.141, quedando redactado de la siguiente forma:

“Art. 135.- Todo productor de áridos está obligado a inscribirse en el registro correspondiente establecido por la normativa aplicable y a dar cumplimiento a todas las normativas de Policía Minera y de impacto ambiental para la actividad minera establecida en la Ley N° 24.585. Asimismo está obligado al pago de regalía conforme Ley Provincial 6.294.

Toda extracción de minerales del presente título, que se realice en los ríos y/o cauces fluviales o terrenos fiscales, deberá estar amparada por Guía de Tránsito, en la cual se especificará la concesión minera, contratos concesivos o constancias de inscripción del área territorial concreta en la que se efectúa la explotación, nombre del productor o transportista, tipo de material y metros cúbicos que habilita extraer y transportar. Los demás requisitos, formalidades y especificaciones, incluyendo el precio de esta Guía, serán determinados por la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos o el órgano que en el futuro la reemplace.

Quien extraiga o transporte áridos con fines comerciales, sin la correspondiente Guía de Tránsito de Áridos y sin perjuicio de aplicarse lo previsto en el Art. 139 de este Código, deberá abonar una multa equivalente a cien litros de nafta común, precio

público, la primera vez que se labre el acta de infracción. En caso de primera reincidencia la multa a abonar será equivalente a doscientos litros de nafta común, precio público.

En caso de ulteriores reincidencias la multa será equivalente a trescientos litros de nafta común, precio público”.

Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Salta, en Sesión del día doce del mes de Noviembre del año dos mil dos.

CAPITULO III:

LEGISLACION VIGENTE EN MATERIA DE ARIDOS EN LA PROVINCIA DE SALTA

La extracción de áridos de los ríos ubicados dentro de la provincia o que la atraviesan, significan para aquella y para los distintos municipios, una fuente de riqueza muy importante, en virtud de su gran explotación, y el consecuente pago del canon que perciben.-

Sin embargo a lo largo de los años existió una situación caótica en virtud de que no existía normativa legal que dejara establecido claramente quien era la autoridad encargada de otorgar las concesiones, controlar una racional explotación y/o extracción, y a quien correspondía percibir el canon, impuestos y/o tasas derivados de tal explotación.

En efecto, como consecuencia de dicho marco normativo confuso, no existía una exclusiva autoridad responsable y competente para cada uno de esos cometidos, y por lo tanto, dicha confusión ha derivado muchas veces en conflictos de competencia que tuvieron que ser judicialmente resueltos.-

Asimismo, a raíz de tal situación, siempre existió una explotación irracional de áridos, y en muchas ocasiones por particulares que carecían de la respectiva concesión legal.-

Dicho aprovechamiento irracional y sin concesión legal, no solo implica una pérdida económica para el fisco provincial y/o municipal, sino que también implica un riesgo, ante la posibilidad cierta de que se causen desvíos en las aguas con los consiguientes daños que se puede ocasionar en las propiedades de los particulares, como así también en los bienes de dominio público, como ser las rutas.

Sentado lo anterior se hizo necesario uniformar el régimen jurídico administrativo aplicable al respecto de las autoridades designadas y competencias atribuidas a los efectos de establecer las modalidades técnicas y la forma de aprovechamiento de los áridos situados en los cauces de los ríos de la Provincia, así como para otorgar las concesiones de explotación de dichos áridos.

Precisamente, a los efectos de paliar tal situación a partir del año 1997 comenzaron a dictarse distintas leyes, decretos y resoluciones de la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos, las cuales tienen por objeto establecer y determinar sobre quien pesa la competencia de contralor en la explotación y quienes deben percibir el producto de tales extracciones. Asimismo se hace hincapié en la explotación racional y el aprovechamiento de los áridos.-

DECRETO 2495/97.-

Es a partir del dictado del presente decreto, en que se establece claramente cual es el órgano competente para intervenir en las cuestiones de extracción de áridos.

Se establece que corresponde a la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos a través de los Programas de Catastro Minero y fiscalización minera (decreto 1192/96), determinar las modalidades técnicas y las formas de aprovechamiento de las arenas y ripios a las cuales se deben someter los concesionarios, así como para delimitar las zonas susceptibles de aprovechamiento de los áridos que se encuentran en los cauces de los ríos de la Provincia, y es el órgano materialmente competente para ejercer el poder de policía minero y las funciones administrativa de concesión de minas, conforme el sistema de división de poderes estatuido constitucionalmente. La concesión es otorgada por el Juez de Minas.-

No obstante lo anterior, para el cumplimiento de los fines perseguidos por el presente decreto, la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos, podrá delegar en los Municipios de la Provincia, el ejercicio de determinadas facultades propias de su competencia. En ese sentido se delega en las Municipalidades la potestad del control de la extracción de áridos ubicados en los cauces de los ríos de la provincia, cuando éstos atraviesan su jurisdicción, incluyendo la percepción de las guías de extracción y transporte correspondiente, siempre que suscriban el convenio de colaboración, que forma parte del presente y corre adjunto a tal efecto.

Para un mejor control, se establece un registro concesiones de áridos ubicados en los cauces de los ríos de la Provincia, el cual se encuentra a cargo de la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos.

Asimismo se fijan las normas técnicas pertinentes, para la venta de las guías de áridos, que corresponden a los Municipios, como así también para el control de las cantidades de sustancias extraídas.

También se instaure el alcance de las sanciones por faltas y contravenciones en que incurran los concesionarios en la explotación de las canteras otorgadas. Las mismas consisten multas de hasta un máximo equivalente al quintuple del precio del metro cúbico del árido extraído. En caso de reincidencia, se aplicará el máximo de la multa más el decomiso del mineral extraído.

La Provincia podrá delegar en los Municipios el control de la extracción de los áridos del cauce de los ríos de la Provincia, en el tramo de su jurisdicción percibiendo en dicho caso las guías de extracción y transporte correspondiente, de conformidad a las pautas previstas en el Convenio que a tal fin deberán suscribir con la Provincia.

No existen lugar a dudas que el decreto en análisis representa un gran avance en materia de extracción de áridos en cuanto fija claramente cual es el papel que juegan los distintos órganos estatales en la concesión, explotación, contralor y percepción de canon, regalías e impuestos derivados de tal actividad.-

Texto del Decreto N° 2495/97

VISTO las disposiciones de los decretos – ley 430/57 y 660/57 y el Decreto 553/78 reglamentario de la Ley 775 (Código de Aguas); y

CONSIDERANDO:

Que se ha podido determinar la existencia de practicas y usos intensos abusivos e irracionales por parte de particulares en el aprovechamiento de los áridos ubicados en los cauces y lechos de los ríos de la provincia, debido a la explotación sin la concesión legal pertinente o a la explotación fundada en una previa concesión legal otorgada pero desprovista de un eficiente y eficaz control estatal de la actividad.

Que como consecuencia de ese aprovechamiento irracional de las canteras de dichas sustancias minerales de tercera categoría ubicadas en los cauces de los ríos provinciales, se podría eventualmente causar desvíos en las aguas y provocar serios e irreparables daños a propiedades particulares contiguas a dichos cursos de agua.

Que la existencia de extracciones de de áridos sin concesión legal por autoridad competente, además de la inexistencia de control sobre la extracción del mineral, implica una evasión de impuestos y tasas, es decir de recursos tan necesarios para la Provincia y los Municipios que las deberían percibir.

Que corresponde entonces uniformar el régimen jurídico administrativo aplicable al respecto de las autoridades designadas y competencias atribuidas a los efectos de establecer las modalidades técnicas y la forma de aprovechamiento de los áridos situados en los cauces de los ríos de la Provincia, así como para otorgar las concesiones de explotación de dichos áridos.

Que en ese sentido existen en la Provincia de Salta un marco normativo confuso que ha determinado la ausencia de una exclusiva autoridad responsable y competente para cada uno de esos cometidos, confusión que ha derivado no solo en conflictos de competencia judicialmente resueltos, sino en un tratamiento y explotación del recurso sumamente perjudicial para la Provincia, los Municipios y los particulares.

Que los Decretos-ley 430/57 y 660/57 establecieron la Autoridad Minera de la Provincia de Salta, creando a tal efecto el Juez de Minas y la Dirección de Minas.

Que el Juez de Minas constituye un órgano de naturaleza judicial y posee atribuciones para entender en todas las cuestiones de derecho emergentes del Código de Minería, Leyes y decretos del a materia, que se trate de casos contenciosos o controversiales.

Que conjuntamente con el Juez de Minas y como órgano auxiliar técnico-operativo de dicha autoridad, aunque dependiente del Poder Ejecutivo de la Provincia, el decreto-ley 660/57 creó la Dirección de Minas, facultándola, entre otras materias a : Dictar los reglamentos de policía minera de aplicación en todo el territorio de la Provincia. Controlar los trabajos de explotación, para que se ejecuten dentro de las normas establecidas, tendientes a explotaciones racionales y conservativas de las reservas mineras. Vigilar el cumplimiento de los contratos o convenios que en materia minera haya suscripto la provincia. Informar y asesorar al Juez de Minas la caducidad de las concesiones que hubieren incurrido en ella. Asesorar a los concesionarios (Conf. Art. 3°), siendo de sumo valor sus trabajos realizados en materia de cartas geológicas

mineras, ubicación de pertenencias, inspecciones técnicas, realización de mensuras, en base al trabajo de su personal altamente especializado.

Que el dictado y aplicación del decreto 553/78, reglamentario de la Ley N° 775 atribuyo a la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas de la Provincia, la Administración General de Aguas de Salta (A.G.A.S.), competencia para: a) Establecer las modalidades técnicas y las formas de aprovechamiento de las arenas y ripios que se encuentran en los cauces de los ríos hasta la línea de la ribera (Art. 1°). b) Otorgar permisos temporales para la extracción de áridos que se encuentren en los cauces de los ríos, sujetos a las condiciones que imponga dicha Administración. C) Controlar y fiscalizar al permisionario (Art. 4°). D) Delegar el ejercicio del Poder de Policía en las Municipalidades.

Que el dictado del Decreto 553/78 otorgó a la A.G.A.S. una competencia de sustancia administrativa, la autorización de concesiones mineras, pero correspondiente en razón de la materia a la Autoridad Administrativa a cargo del poder de policía Minero, tal cual resulta del decreto –ley 660/57 la Dirección de Minas, por lo cual el decreto resulta nulo de nulidad absoluta por exceso de reglamentación e incompetencia.

Que ello es así, en tanto la A.G.A.S., conforme la Ley 775, posee competencia en la materia de administración y explotación de los recursos hídricos, pero no tiene competencia atribuida respecto a la materia minera o de áridos y canteras.

Que no obstante ser denominada por el decreto 553/78 “permiso temporal”, la norma hace referencia a la figura de la concesión para la extracción y explotación de los áridos, los que, independientemente del lugar en que se encuentren, incluyendo los cauces de los ríos de la Provincia, eran y son objeto de concesión por parte de la autoridad minera.

Que también han sido autorizados a otorgar concesiones de explotación de canteras que se encuentren en los cauces de los ríos de la Provincia, los Municipios de la Provincia, en virtud del modelo de convenio, éstos y la A.G.A.S. aprobado por decreto N° 1769 del 20 de setiembre de 1988.

Que el conflicto normativo sobre la competencia para otorgar, renovar, etc., concesiones de áridos en los cauces de los ríos continua hasta el presente siendo

fuelle de conflictos de competencias entre los organismos, generando inseguridad jurídica entre los particulares, confusión e inseguridad que a su vez incide en el control eficiente y eficaz del aprovechamiento del recurso.

Que así lo demuestran los pronunciamientos judiciales del Fuero de Minas y de la Cámara de Apelaciones.

Que en autos "Solicitud de concesión de cantera de áridos (arena, ripio y ripiosa) denominada MONICA DEL VALLE. Ubicada en Rosario de Lerma " (C. Apel. C.C., Sala IV, T XIII, F. 1. 103-108, del 11 de abril de 1991) se señala: "Así delimitada la cuestión litigiosa, entendemos que la misma queda circunscripta a un problema funcional derivado del dictado de normas de facto que atribuyen la competencia de la concesión de las canteras o aridos ubicadas en los ríos públicos de la Provincia, uno a la Jurisdicción judicial (del Juez de Minas) y el otro a la facultad administrativa que el Poder Ejecutivo Provincial asignó a A.G.A.S."

Que por su parte el Juez de Minas en autos "Manifestaciones de Descubrimiento. Cantera "LOS PINOS" de áridos, ubicada en Rosario de Lerma, Río Toro-Campo Quijano de René Valdez" del 21 de marzo de 1995 señala: "las diligencias formales (se refiere a los trámites concesivos) se complican debido a la anarquía normativa que hay al respecto, conforme lo expone la Cámara de Apelaciones en canteras "MONICA VALLE".

Que en "Cantera LOS PINOS" el Juez de Minas dispuso: "esto (hace referencia a la anarquía normativa), se solucionaría probablemente si se deroga el decreto 553/78. Pero la realidad es que en la actualidad, hay muchos extractores que continúan solicitando permiso de explotación en A.G.A.S., otros concurren al Juzgado y otros extraen material sin pedir concesión".

Que el decreto 553/78 constituye una normativa atributiva de competencia de carácter reglamentario, por la cual se entendió oportuno facultar a la A.G.A.S. a otorgar las concesiones de áridos ubicados en los cauces de los ríos y a ejercer el Poder de Policía respecto de la extracción de dichas sustancias, criterio que, actualmente es legítimo y conveniente modificar conforme lo expresado precedentemente.

Que en virtud de todo lo expuesto es necesario coordinar las competencias actualmente otorgadas para las concesiones de minas de áridos sobre los cauces de los Ríos de la provincia, a los efectos de prevenir los conflictos suscitados por la superposición de competencias materiales en detrimento para el interés público de la Provincia.

Que el sistema de división de poderes obliga a respetar el ejercicio de las funciones actualmente otorgadas a cada Poder, destacando que corresponde al Poder Judicial la resolución de los casos concretos y contenciosos, al Poder Legislativo, la creación de reglas de conducta abstractas, generales e imperativas y al Poder Administrador el ejercicio de la función de administrar los bienes estatales y preponderar al bienestar general y la satisfacción de las necesidades públicas. Por ello, y en virtud de tal sistema, corresponde entender, conforme lo ha establecido el decreto ley 660/57, que la autoridad minera, se divide en: el Juez de Minas, con competencia para la decisión de los casos contenciosos que se susciten en torno a la cuestión minera, y autoridad administrativa, a la cual le corresponde el ejercicio de la función administrativa en materia minera y el poder de policía minera, siendo inherente de tal función el otorgamiento de concesiones mineras.

Que lo expuesto se funda en el art. 75 inc. 18 de la Constitución Nacional, el art. 10 del Código de Minería, la Constitución Provincial, art. 80 y el Decreto 660/57.

Que asimismo, es necesario fortalecer el sistema de control del cumplimiento de parte de los concesionarios de áridos en los cauces de los ríos, de las normas de fondo y reglamentarias relativas a la extracción y explotación de dichas sustancias minerales.

Que la Dirección de Minas, como órgano administrativo en ejercicio de la autoridad minera prevista en el Decreto-Ley 660/57, ha dejado de existir en la actual —organización administrativa de la Provincia. — — —

Que la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos a través de los Programas de Catastro Minero y fiscalización minera (decreto 1192/96), es el organismo técnico adecuado para establecer las modalidades técnicas y las formas de aprovechamiento de las arenas y ripios a las cuales se deben someter los concesionarios, así como para delimitar las zonas susceptibles de aprovechamiento de los áridos que se encuentran en los cauces de los ríos de la Provincia, y es el órgano

materialmente competente para ejercer el poder de policía minero y las funciones administrativa de concesión de minas, conforme el sistema de división de poderes estatuido constitucionalmente.

Que corresponde establecer las normas técnicas pertinentes, para la venta de las guías de áridos, que corresponden a los Municipios en virtud de lo prescripto por la Constitución de la Provincia de Salta, art. 169 inc. 4° y la Ley 1349 art. 83 inc. 24, y para el control de las cantidades de sustancias extraídas.

Que corresponde determinar el alcance de las sanciones por faltas y contravenciones en que incurran los concesionarios en la explotación de las canteras otorgadas.

Que es de suma importancia para el cumplimiento de los fines perseguidos por el presente decreto, la participación de los Municipios de la Provincia, ejerciendo las facultades que pudieran serle delegadas así como las demás funciones propias de su competencia.

Que en ese sentido corresponde delegar en las Municipalidades la potestad del control de la extracción de áridos ubicados en los cauces de los ríos de la provincia, cuando éstos atraviesan su jurisdicción, incluyendo la percepción de las guías de extracción y transporte correspondiente, siempre que suscriban el convenio de colaboración, que forma parte del presente y corre adjunto a tal efecto.

Que el presente decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto por los arts. 80, 141 inc 3° y 170 inc. 13 de la Constitución Provincial, y art. 2 del decreto-ley 660/57.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

Artículo 1°: La Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos del Ministerio de la Producción y el Empleo, será la autoridad competente para establecer las modalidades técnicas y las formas de aprovechamiento de las arenas y ripios que se encuentran en los cauces de los ríos de la Provincia. Asimismo será la autoridad competente para establecer las modalidades técnicas y las formas de aprovechamiento de las arenas y ripios que se encuentran en los cauces de los ríos de la Provincia.

Asimismo será la autoridad competente para delimitar las zonas susceptibles de aprovechamiento de los áridos que se encuentren en los cauces de dichos ríos y para ejercer el poder de policía sobre las explotaciones de los mismos, incluyendo la competencia para entender en el otorgamiento de concesiones mineras.-

La fiscalización y control de las explotaciones periódicamente realizadas por los concesionarios, podrán ser delegadas por la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos en los Municipios que suscriban el convenio de colaboración, anexo al presente decreto.

En virtud del poder de policía de control que detenta la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos, ésta se reserva la facultad de inspeccionar en cualquier momento la explotación realizada por el concesionario titular de la misma.

Artículo 2: Toda persona titular de una concesión de minas con referencia a canteras situadas en los cauces de los ríos de la provincia, deberá sujetarse en su explotación a las reglamentaciones técnicas, modalidades y condiciones que dispongan la Secretaría de Minería Industria y Recursos Energéticos.

Dicho órgano llevará el registro básico de concesiones de áridos ubicados en los cauces de los ríos de la Provincia.

Artículo 3°: Los concesionarios de canteras de áridos situados en los cauces de los ríos de la Provincia, deberán abonar una cuota fija establecida para las minas en concepto de canon minero, conforme las disposiciones del Código de Minería. La Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos, percibirá dicho canon.

Artículo 4°: La Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos fijará las normas pertinentes para la extracción de los áridos, la venta de las guías de áridos y para el control posterior de las cantidades extraídas de los cauces de los ríos de la Provincia.-

Artículo 5°: Los concesionarios de áridos ubicados en el cauce de los ríos de la Provincia abonarán en concepto de regalía lo establecido por la Ley Provincial 6294.

Artículo 6°: Las faltas y contravenciones que se produjeran como consecuencia de la violación de la legislación y demás normativas aplicables a la concesión otorgada, dará lugar a la aplicación de multas que oscilarán hasta un valor máximo del quintuple del precio del metro cúbico del árido extraído. En caso de reincidencia, será sancionado

con el máximo de la multa mas el decomiso del mineral extraído, sin perjuicio de las sanciones que la autoridad judicial competente pudiera adoptar.

Artículo 7°: Los transportistas de áridos deberán sujetarse al cumplimiento de las disposiciones vigentes para el transporte de dichos áridos así como a las restantes normas de la Ley de tránsito y transporte aplicable.

Artículo 8°: Los Municipios de la Provincia podrán controlar la extracción de los áridos del cauce de los ríos de la Provincia, en el tramo de su jurisdicción y percibirán las guías de extracción y transporte correspondiente, de conformidad a las pautas previstas en el Convenio que a tal fin deberán suscribir con la Provincia, el cual se anexa al presente decreto, formando parte integrante del mismo.

Artículo 9°: Las concesiones otorgadas al momento de entrada en vigencia del presente, deberán adecuar su explotación a las reglamentaciones que se dicten en virtud de lo dispuesto en su artículo 2°. La Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos podrá solicitar a la autoridad judicial la caducidad de las concesiones cuando se compruebe fehacientemente que los concesionarios estuvieren explotando en forma irracional los áridos que se encuentren en los cauces de los ríos de la Provincia y puedan ocasionar con esa explotación ocasionar un grave peligro para los propietarios ribereños, la infraestructura y/o el medio ambiente.

Artículo 10: Deróganse los Decretos Provinciales 553/78, 1769/88 y toda otra norma que se oponga a la presente. Sin perjuicio de las normas vigentes en materia de caducidad, las concesiones otorgadas al amparo de las prescripciones que se derogan se mantendrán vigentes por el tiempo que hubieren sido otorgadas.

Artículo 11: El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de la Producción y el Empleo y por la Señora Secretaria General de la Gobernación.

Artículo 12: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.

ANEXO AL DECRETO 2495.-

CONVENIO DE COLABORACION

Entre la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos, con domicilio en Avda. Bolivia N° 4650 de la ciudad de Salta, representada en éste acto por el

Señor....., en adelante "LA SECRETARIA", por una parte, y la Municipalidad de con domicilio en de dicha localidad, representada en éste acto por el Señor Intendente Municipal, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por la otra, convienen en celebrar el presente acuerdo, de conformidad a las siguientes cláusulas:

PRIMERA OBJETO: El presente convenio en los términos del decreto del cual forma parte, tiene por objeto acordar los mecanismos, derechos y obligaciones de cada una de las partes en la delegación y ejercicio de la actividad de control de las concesiones otorgadas por la autoridad minera para la explotación de los áridos ubicados en los cauces de los ríos de la Provincia que atraviesen la jurisdicción de "LA MUNICIPALIDAD".-

SEGUNDA CONTROL DE LA MUNICIPALIDAD: "LA MUNICIPALIDAD", deberá controlar que todos los concesionarios de áridos localizados dentro de su jurisdicción, posean la pertinente concesión otorgada por el Juez de Minas, conforme al procedimiento aplicable y den cumplimiento en la explotación de la cantera, a la legislación minera vigente aplicable a dicha actividad.-

TERCERA INFORMACION: "LA MUNICIPALIDAD", informará mensualmente a "LA SECRETARIA", a través de un sistema interno a implementar por ésta última, las partes de producción correspondiente a cada concesión. En dichas partes constará Número de Inscripción del Producto Minero, Nombre y Apellido del mismo, Nombre y Número del Expediente de la Cantera y del río en que se sitúa la misma. También constará el volumen extraído durante ese período, y el listado de los transportistas habilitados para la realización de dicha tarea. Asimismo deberá informar a "LA SECRETARIA" cualquier incumplimiento del concesionario en la explotación que éste realice, o respecto de la falta de pago y/o uso de las guías de extracción y/o tránsito a fin de que ésta tramite, de corresponder, la caducidad de la conexión ante el Juez de Minas de la Provincia.-

CUARTA CAPACITACION TECNICA DE PERSONAL: "LA SECRETARIA", capacitará y adiestrará técnicamente al personal de la Municipalidad designando para la tarea de control de producción de los áridos en los términos de las normas vigentes.

Los agentes municipales que efectúen el control de producción señalado, no podrán adoptar resolución alguna por propia iniciativa, y su actividad se limitará a proporcionar a "LA SECRETARIA" y a "LA MUNICIPALIDAD", la información pertinente en el tiempo y forma que determine oportunamente.-

QUINTA INGRESOS POR VENTA DE GUIAS: Los ingresos que se obtengan por la venta de guía, serán distribuidos de la siguiente manera: 50 % para "LA SECRETARIA" y el 50 % restante para "LA MUNICIPALIDAD".-

SEXTA REVOCACION DEL CONVENIO: La Provincia de Salta, a través de "LA SECRETARIA", podrá revocar el presente convenio en caso de incumplimiento, por acción u omisión de "LA MUNICIPALIDAD", de las obligaciones asumidas en las cláusulas precedentes sin derecho a reclamo alguno.-

Se firman ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de salta, a losdías del mes de.....del año-

DECRETO 1150 REGLAMENTA LA EXPLOTACION RACIONAL DE ARIDOS.-

El Decreto 1150/98 tiene por objeto inmediato instaurar normas racionales de explotación evitando de ésta manera un daño ambiental irrecuperable. Asimismo intenta evitar la evasión de impuestos y tasas, recursos éstos indispensables tanto para la Provincia, como para los Municipios. De ésta manera, el Decreto fija las normas para la extracción, la venta de guías y el control posterior de las cantidades extraídas, a cargo de la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos con la colaboración de los Municipios que hubieren suscrito el convenio anexo del decreto.

En definitiva con el decreto en cuestión se pretende controlar y establecer normas en todo lo relativo a la explotación, venta de Guías de Extracción y Transporte de Áridos, a las cuales deberán ajustarse todas las empresas o entidades oficiales y/o privadas que se dediquen a la explotación de áridos situados en los cauces de los ríos de la Provincia.

En cuanto al articulado de decreto se establece la obligatoriedad de contar con la Guía de Extracción y Transporte de Áridos, por la extracción o transporte de materiales áridos que se realice en los ríos y/o en los cauces fluviales públicos o terrenos fiscales,

la cual deberá especificar el área territorial en la que se realiza la explotación, el nombre del productor o transportista, tipo del material, el término de validez y cantidad en metros cúbicos de áridos que habilita a extraer y transportar.

En cuanto al régimen sancionatorio, se establece que en caso de que se extraiga o transporte áridos sin la correspondiente Guía de Extracción y Transporte, se aplicará una multa equivalente al DOBLE del precio de la mencionada Guía. En caso de reincidir una vez en esta conducta, la multa del TRIPLE del precio de la Guía; en caso de reincidir dos veces o más, la multa será equivalente al QUÍNTUPLO del precio de la Guía, pudiendo la Autoridad de Aplicación proceder al secuestro del material, los equipos y las maquinarias del infractor, hasta tanto regularice su situación abonando la totalidad de las multas.

La adquisición de una Guía de Extracción y Transporte, da derecho, hasta tanto obtenga la concesión legal, a la explotación y transporte de áridos en la zona demarcada en la Guía, durante el plazo fijado en la misma o hasta alcanzar la cantidad de metros cúbicos en ella establecidos.

Para el caso que un particular solo se encuentre interesado en Transportar áridos y no extraer, deberá el productor o extractor entregarle la Guía correspondiente a la cantidad de material a transportar en cada oportunidad.

Las guías son provistas por la Autoridad de Aplicación de las Municipalidades que hayan suscrito el convenio anexo a este Decreto, quienes también tienen a su cargo el control de la explotación y transporte de áridos.

Los ingresos percibidos por la venta de las Guías serán distribuidos entre la Autoridad de Aplicación y los Municipios, siempre que el área de explotación a la que se refiere la Guía, se encuentre dentro del territorio del mismo.

—En cuanto a la forma y condiciones de la explotación, se establece que la extracción deberá realizarse del tercio medio del río en forme de capas, y solo hasta un metro de profundidad. En su art. 11 también reglamenta las demás condiciones de la explotación y fija prohibiciones, las que en caso de ser incumplidas dará derecho a la autoridad de aplicación a exigir la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y a imponer multas. Incluso y de acuerdo a la gravedad y reiteración de las faltas, podrá declarar la caducidad de las Guías de Explotación y Transporte, sin derecho a

indemnización alguna, así como solicitar al Juez de Minas que se le declare caduca su concesión.

Texto del Decreto N° 1150/98

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO

Expediente N° 143-04802/98, Cde. 1

VISTO la necesidad de reglamentar la explotación racional de áridos dentro de la Provincia, así como la implementación y venta guías de explotación y transporte; y

CONSIDERANDO:

Que a raíz de la existencia en la Provincia de practicas y usos abusivos e irracionales en el aprovechamiento de los áridos ubicados en los cauces y lechos de los ríos, y debido a que dicha obtención se realiza en su gran mayoría sin que dichos productores cuenten con una concesión, se pueden generar daños ambientales de importancia, haciendo peligrar la seguridad y el medio ambiente en general;

Que en efecto, muchos explotadores de áridos no cumplimentan actualmente con las disposiciones mínimas de seguridad y protección al ambiente, lo que podría traer aparejado el desvío del curso de las aguas provocando serios e irreparables daños en las propiedades contiguas a dichos cursos de agua, así como a las obras de arte;

Que es facultad insoslayable del Estado Provincial, el dictar las normas reglamentarias para la preservación del medio ambiente, tal como establece la Constitución Nacional (art. 41, tercer párrafo) y la Constitución Provincial del Salta (art. 30);

Que el Código de Procedimientos Mineros de la Provincia de Salta, Decreto Ley 430/57, estableció en su art. 115 el deber de quien explota minerales de tercera categoría entre los que se incluyen los áridos, de abonar un derecho de explotación de cada metro cúbico que se extraiga;

Que el Decreto Provincial N° 1557/79 relativo al uso de la guía de transporte en todo el territorio de la Provincia, aplicable a otras sustancias de tercera categoría, dentro de la cual se encuentran incluidos los áridos, resulta insuficiente para una regulación integral de la problemática;

Que la insuficiencia de esta norma, reside en que los extractores o productores furtivos de áridos, que ejercen su actividad no solo en la clandestinidad, sino sin respetar muchas veces pautas mínimas de seguridad para evitar innecesarios daños al medio ambiente, suelen mudar ágilmente sus productos y explotaciones, lo que trae aparejada la falta del debido control estatal sobre sus explotaciones, y de responsabilidad por sus acciones;

Que en forma paralela, esto genera una evasión de impuestos y tasas, es decir recursos indispensables, tanto para la Provincia, como para los Municipios, que deben ejercer los controles conforme al art. 1 párrafo segundo y art. 8 del Decreto N° 2495/97, y de esa manera evitar males mayores como los ya mencionados;

Que corresponde a la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos fijar las normas para la extracción, la venta de guías y el control posterior de las cantidades extraídas, con la colaboración de los Municipios que hubieren suscrito el convenio que se encuentra como Anexo Decreto N° 2495/97 conforme lo estableció el art. 8 de dicho Decreto;

Que dichos Municipios tendrán derecho a percibir de la Provincia, los importes que ingresen por la venta de Guías de Extracción y Transporte de Áridos correspondiente a su jurisdicción, conforme lo establece el art. 8 del Decreto N° 2495/97, cuyo monto será fijado por la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos conforme al art. 4 de la mencionada norma;

Que esta situación requiere el dictado de normas relativas a la venta de Guías de Extracción y Transporte de Áridos, a las cuales deberán ajustarse todas las empresas o entidades oficiales y/o privadas que se dediquen a la explotación de áridos situados en los cauces de los ríos de la Provincia;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Título I: Guía de Extracción y Transporte de Áridos

Artículo 1°: Toda extracción o transporte de materiales áridos que se realice en los ríos y/o en los cauces fluviales públicos o terrenos fiscales, deberá estar amparada por la Guía de Extracción y Transporte de Áridos, en la cual se especificará el área

territorial concreta en la que se emplaza la explotación de áridos, el nombre del productor o transportista, tipo del material, el término de validez y cantidad en metros cúbicos de áridos que habilita a extraer y transportar. Los demás requisitos, formalidades y especificaciones, incluyendo el precio de esta guía serán determinados por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 2°: Quien extraiga o transporte áridos sin el amparo de la correspondiente Guía de Extracción y Transporte, deberá abonar una multa equivalente al DOBLE del precio de la mencionada Guía, en la primera vez que se le labre el acta de infracción. En caso de reincidir una vez en esta conducta, la multa a abonar será equivalente al TRIPLE del precio de la Guía; en caso de reincidir dos veces o más, la multa será equivalente al QUÍNTUPLO del precio de la Guía, pudiendo la Autoridad de Aplicación proceder al secuestro del material, los equipos y las maquinarias del infractor, hasta tanto regularice su situación abonando la totalidad de las multas. Las multas serán giradas al Sr. Juez de Minas para que proceda a su notificación. En caso de incumplimiento, el Juez remitirá las actuaciones al Fiscal del Estado, a fin de que se realice el correspondiente juicio de apremio.

Artículo 3°: La adquisición de una Guía de Extracción y Transporte, dará derecho a su titular, hasta tanto obtenga la concesión legal, a la explotación y transporte de áridos en la zona demarcado en la Guía, durante el plazo fijado en la misma o hasta alcanzar la cantidad de metros cúbicos en ella establecidos; previa verificación de inexistencia de superposiciones de concesiones mineras de cualquier índole, que gocen de rango prioritario, a tal fin la Autoridad de Aplicación llevará el Registro correspondiente.

Artículo 4°: Para el caso que un particular solo se encuentre interesado en Transportar áridos y no extraer, deberá abstenerse a las condiciones fijadas para la Guía de Extracción y Transporte de Áridos, debiendo el productor o extractor entregarle la Guía correspondiente a la cantidad de material a transportar en cada oportunidad.

Artículo 5°: De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 2495/97, las Guías de extracción y Transporte serán provistas por la Autoridad de Aplicación de las Municipalidades que hayan suscrito el convenio anexo a ese Decreto. Esas Municipalidades deberán efectuar el control de la explotación y

transporte de áridos y elevar una rendición mensual por productor minero, identificando cantidad y tipo de material, las actas de constatación labradas y demás información que consideren de utilidad.

Artículo 6°: Los ingresos que se perciban por la venta de las Guías de Extracción y Transporte de Áridos, serán distribuidos entre la Autoridad de Aplicación y los Municipios, cuando corresponda, en las condiciones fijadas en el Decreto N° 2495/97. Se entiende que corresponde coparticipar a determinado Municipio, cuando el área de explotación a la que se refiere la Guía, se encuentre dentro del territorio del mismo.

Título II: Condiciones Técnicas de Explotación y Transporte de Áridos

Artículo 7°: Todo explotador, transportista o productor de áridos está obligado a inscribirse en el Registro establecido por el Decreto N° 2154/89 y a dar cumplimiento a todas las normativas de policía minera y de impacto ambiental para la actividad minera establecidas por la Ley Nacional N° 24.585.

Artículo 8°: Las Empresas y Entes del Estado que con razones fundadas y a juicio de la Autoridad de Aplicación requieran disponer de la explotación de áridos para determinadas obras públicas o de bien público, podrán solicitar áreas de exclusividad. En todos los casos deberán cumplimentar con las normativas técnicas para una racional extracción.

Artículo 9°: La Autoridad de Aplicación controlará que las extracciones de áridos en todo el territorio de la Provincia cumplieren con las disposiciones vigentes en materia de policía minera, seguridad, explotación racional del recurso y preservación del medio ambiente. A tal efecto, coordinará sus acciones con las Municipalidades que hayan suscripto el Convenio aprobado por Decreto 2495/97

Artículo 10°: Los explotadores o productores de áridos deberán extraer el material del tercio medio del río en forme de capas, solo hasta un metro de profundidad a lo largo del río. La explotación de áridos no dará derecho a ejecutar zanjas o a interrumpir el libre tránsito de la ribera, pudiendo la Autoridad de Aplicación establecer condiciones especiales según el caso, para salvaguardar la seguridad, o el medio ambiente.

Artículo 11°: En atención a la protección de riberas expresamente se prohíbe:

1. Extraer material de las riberas de los ríos;

2. Extraer material a una distancia menor de 800 metros aguas arriba y de 200 metros aguas abajo del lugar en que se encuentren las tomas de agua u obras de arte, sean éstas públicas o privadas, salvo que la extracción sea de utilidad para el mantenimiento de las tomas u obras de arte, caso en el cual deberá suscribirse convenio con la Autoridad de Aplicación;

3. Desviar a través de la extracción el curso de las aguas dejando en seco cualquier toma u obstaculizando el libre escurrimiento hacia ella;

4. Destruir defensas u obras de arte construidas en los ríos.

La Autoridad de Aplicación podrá disponer otras prohibiciones u obligaciones en aras de la seguridad y/o la protección del medio ambiente.

Artículo 12°: El incumplimiento de estas normas y su reglamentación hará pasible al explotador de reparar los daños y perjuicios ocasionados a su costo, pudiendo la Autoridad de Aplicación imponer multas y llegar a la caducidad de las Guías de Explotación y Transporte, sin derecho a indemnización alguna, así como solicitar al Juez de Minas que se le declare caduca su concesión, según sea el caso.

Artículo 13°: El personal de control labrará en ocasión de realizar las inspecciones a los explotadores y/o transportista de áridos, un acta de constatación, estableciéndose en ella como mínimo:

1. Nombre del Explotador y/o transportista;

2. Zona de explotación con croquis de ubicación, ubicada mediante coordenadas GAUSS KRUGÜER;

3. Si la correspondiente Guía de Explotación y Transporte de Áridos y los datos de individualización de ésta;

4. Si cumple con las disposiciones normativas vigentes;

5. Si se detectan de esa inspección, infracciones a la normativa vigente.

El explotador y/o transportista está obligado a firmar el acta de constatación, entregándosele la copia pertinente. En caso de negativa se dejará constancia de tal circunstancia. El acta será remitida sin más a la Autoridad de Aplicación a efecto del establecimiento de las sanciones que correspondiesen conforme a la normativa vigente.

Artículo 14°: El explotador de áridos no tendrá derecho al término de la explotación a indemnizaciones por las construcciones que hubiera ejecutado, las que

solo se permiten a título precario, pudiendo así retirar las instalaciones pero no podrá destruir las construcciones no transportables, las cuales quedarán en beneficio de la utilidad que la Autoridad de Aplicación resuelva darles, sin derecho a indemnización alguna para el explotador.

Artículo 15°: La Autoridad de Aplicación, actuando coordinadamente con el Sr. Juez de Minas, podrá disponer de oficio distribución de zonas entre concurrentes, cuando así lo exija la conservación del orden, la convivencia, la organización de la explotación o los intereses de las personas o la Provincia.

Artículo 16°: La Autoridad de Aplicación establecerá las condiciones de explotación que en cada caso particular resulten adecuadas a su criterio, pudiendo ordenar construcciones, edificaciones u otras obras para una mejor explotación y preservación de la seguridad y el medio ambiente.

Artículo 17°: El Ministerio de la Producción y el Empleo, a través de la Secretaria de Minería, Industria y Recursos Energéticos, es la Autoridad de Aplicación del presente Decreto. Se encuentra habilitada esta Autoridad a emitir todas las disposiciones complementarias y reglamentarias que resulten necesarias para la correcta implementación de lo dispuesto en este acto.

Artículo 18°: Derogase el Decreto N° 1557, de fecha 16 de Noviembre de 1979, respecto de la explotación y transporte de los minerales áridos.

Artículo 19°: El presente Decreto será refrenado por el Sr. Ministro de la Producción y el Empleo y la Sra. Secretaria General de la Gobernación.

Artículo 20°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DECRETO 334 APROVECHAMIENTO DE ARIDOS.-

El presente decreto tiene por objeto establecer las condiciones para un mejor aprovechamiento y las modalidades técnicas para una mejor explotación de áridos en los cauces de los ríos e la Provincia. Para ello se hace necesario ejercer un control estricto en la explotación de manera que la misma sea efectuada cumplimentándose las disposiciones vigentes en materia de la Policía Minera, seguridad, salubridad, explotación racional del recurso y preservación del medio ambiente.

En virtud de que la mejor forma de ejercer dicho contralor lo es a través de los Municipios, mediante la suscripción de los respectivos convenios y que dicho contralor implica para los Municipios una serie de erogaciones, las cuales no pueden ser satisfechas con el 50% de los ingresos por ventas de Guías de Transporte de Áridos establecidas por el Decreto N° 2.495/97, con el presente decreto se establece que los Municipios percibirán el 100 % de las ventas de las Guías de Transporte de Áridos, las multas establecidas en el Decreto N° 1.150/00, y el Derecho de Explotación que surge del Artículo 76 de la Ley N° 7.141.-

Asimismo se modifica lo relativo a la multa aplicable a quien extraiga o transporte áridos sin el amparo de la correspondiente Guía de Tránsito de Áridos, fijándosela en el equivalente a cien litros de gas-oil, precio público, la primera vez. En caso de primera reincidencia la multa a abonar será de trescientos litros de gas-oil, precio público. En caso de ulteriores reincidencias la multa será equivalente a quinientos litros de gas-oil, precio público.

Texto del Decreto N° 334/02

MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO

Expte N° 143-11.200/02

VISTO que la Ley N° 7.141, establece en su Artículo 133 que la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos es la autoridad de aplicación, a los efectos de establecer las formas para un mejor aprovechamiento y las modalidades técnicas para una mejor explotación de áridos en los cauces de los ríos e la Provincia; y,

CONSIDERANDO:

Que para cumplir con su cometido la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos debe controlar que la explotación de áridos en los cauces de los ríos de la Provincia sea efectuada cumplimentándose las disposiciones vigentes en materia de la Policía Minera, seguridad, salubridad, explotación racional del recurso y preservación del medio ambiente.

Que el Decreto N° 2.495/97 autoriza a la precitada Secretaría a suscribir con los Municipios, convenios, atribuyéndoles a estos las facultades de fiscalización y control de la extracción de áridos en sus respectivas jurisdicciones.

Que dicha modalidad de vinculación se encuentra también prevista en el Artículo 136 de la Ley N° 7.141, llevando implícita esa disposición la necesidad de establecer los recursos con los que tales Municipios solventarán las tareas inherentes al desenvolvimiento de esas misiones, puesto que para poder cumplir con las obligaciones a través de los convenios, deben incurrir en una serie de erogaciones.

Que con el objeto de que los Municipios puedan afrontar los gastos de gestión de tales misiones, se aprobó por medio del Decreto N° 2.495/97, el modelo de convenio de colaboración que su cláusula quinta establece que el 50% de los ingresos por ventas de Guías de Transporte de Áridos, serán para los Municipios.

Que el porcentaje aludido en dicho modelo resulta insuficiente y torna antieconómico el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de los Municipios, razón por la cual y a los efectos de evitar que esa circunstancia obste a la consecución de los objetivos previstos en la norma, se impone la necesidad de que los Municipios con los que se firmó y/o firme el modelo de convenio aprobado por Decreto N° 2.495/97, perciban el 100 % de las ventas de las Guías de Transporte de Áridos, las multas establecidas en el Decreto N° 1.150/00, y el Derecho de Explotación que surge del Artículo 76 de la Ley N° 7.141.

Que en consonancia con lo expresado en los párrafos precedentes es conveniente adecuar los importes previstos en el Artículo 2° del Decreto N° 1.150/00, que por la antigüedad de las actuales cifras, no cumplen con la función disuasiva de infracción que es propósito de toda amenaza de sanción.

Que así mismo se hace necesario modificar los Artículos 1° y 2° del Decreto N° 1.150/00, a los fines de unificar su terminología con la del Código de Procedimiento Minero, sustituyendo la expresión Guía de Extracción y Transporte de Áridos por "Guía de Tránsito de Áridos".

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Artículo 1° - Los Municipios que hayan suscripto o suscribieran el modelo de convenio aprobado por Decreto N° 2.495/97, percibirán la totalidad de los montos por las ventas de las Guías de Tránsito de Áridos, las multas establecidas en el Decreto N° 1.150/00 y los montos que por Derecho de Explotación, establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 7.114, correspondan a sus respectivas jurisdicciones.

Art. 2° - En virtud de lo establecido en el Artículo precedente y con vigencia a partir de la fecha del presente decreto, queda modificada la cláusula quinta del modelo de convenio aprobado por Decreto N° 2.495/97.

Art. 3° - La Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos proveerá a los Municipios de las respectivas Guías de Tránsito de Áridos, fijará el precio de cada Guía y demás condiciones y modalidades para su utilización. Asimismo determinará el importe mínimo a abonar por el Derecho de Explotación.

Art. 4° - Sustituir el Título I, Artículo 1° y Artículo 2° del Decreto N° 1.150/00, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Título I: Guía de Transporte de Áridos”.

“Artículo 1°: Toda extracción o transporte de materiales áridos que se realice en los ríos y/o cauces fluviales públicos o terrenos fiscales, deberá estar amparada por la Guía de Tránsito de Áridos, en la cual se especificará el área territorial concreta en la que se emplaza la explotación de áridos, el nombre del productor o transportista, tipo de material, el término de validez y cantidad en metros cúbicos de áridos que habilita a extraer y transportar. Los demás requisitos, formalidades y especificaciones, incluyendo el precio de esa Guía serán determinados por la Autoridad de Aplicación”.

“Artículo 2°. Quien extraiga o transporte áridos sin el amparo de la correspondiente Guía de Tránsito de Áridos y sin perjuicio de aplicarse lo previsto en el Artículo 139 de la Ley N° 7.141, deberá abonar una multa equivalente a cien litros de gas-oil, precio público, la primera vez que se labre el acta de infracción. En caso de primera reincidencia la multa a abonar será de trescientos litros de gas-oil, precio público. En caso de ulteriores reincidencias la multa será equivalente a quinientos litros de gas-oil, precio público”.

Art. 5° - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de la Producción y el Empleo y Secretario General de la Gobernación.

Art. 6° - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

**RESOLUCIONES 11/02, 076/02 Y 074/04 DE LA SECRETARÍA DE MINERÍA Y
RECURSOS ENERGÉTICOS.-**

Resolución 11/02.-

La resolución 11/02 se dicta como consecuencia de que el Decreto N° 334/02 establece que los Municipios percibirán los montos que correspondan por Derecho de Explotación, y que los mismos serán fijados por la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos. Precisamente mediante ésta resolución la Secretaría fija una escala con valores mínimos, en base a la superficie concesionada, estableciendo un valor mínimo constante, a los fines de que la misma no pierda vigencia o actualidad en el tiempo. De ésta manera se establece: Hasta 10 hectáreas \$ 150,00. De 10 a 20 hectáreas \$ 300,00. De 20 a 30 hectáreas \$ 450,00. Mas de 30 hectáreas \$ 750,00. Los importes mencionados deben ser abonados del 1 al 10 de cada mes.-

Por último establece una sanción de multa para los extractores furtivos o sin concesión legal, equivalente al máximo de la escala anterior.-

**Texto de la Resolución 11/02.-
SECRETARÍA DE MINERÍA, INDUSTRIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS**

VISTO que el Decreto N° 334/02 en el Artículo 1° faculta a los Municipios que hayan suscrito el convenio aprobado por el Decreto N° 2495/97, a percibir los montos que correspondan por Derecho de Explotación, establecido en el Artículo 76 in fine de la Ley N° 7141 y en el Artículo 3° establece que esta Secretaría fijará el importe mínimo a abonar por el Derecho de Explotación, y;

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las características geológicas de yacencia de los materiales áridos en los cursos de los distintos ríos que se sitúan en el territorio provincial donde se practica extracciones de áridos desde muchos años a la fecha, con rendimientos satisfactorios tal cual lo demuestran las estadísticas que existen en este Organismo, corroborado por las obras públicas que se realizaron en los últimos años, cuyos

materiales áridos utilizados en las mismas fueron en su totalidad suministrados por las explotaciones de los ríos del territorio provincial;

Que en razón de lo expuesto corresponde establecer una escala con valores mínimos. Que resulta conveniente, a los fines de obtener esta escala, relaciona una superficie, hectárea concesionada, con un valor mínimo constante, a los fines de que la misma no pierda vigencia o actualidad en el tiempo;

Que luego de un exhaustivo análisis y con el fin de determinar en forma equitativa los valores mínimos exigibles, y realizados los estudios de los volúmenes que se extraen en una cantera en explotación, se concluye que corresponde fijar que por cada 10 hectáreas, se abone PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00), manteniéndose ese valor hasta treinta hectáreas, a partir de esta última superficie incrementar, por mayor extensión concesionada, el monto en PESOS TERCIENTOS (\$ 300.00);

Que el monto mínimo determinado deberá ser abonado por los extractores de áridos mientras la cantera esté en producción;

Que es necesario establecer normativas de equidad entre los productores concesionarios de canteras y los extractores que no poseen concesión, por la cual se fijan valores mínimos de derecho de explotación para estos casos.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MINERÍA, IND. Y RECURSOS ENERGÉTICOS
RESUELVE:

Artículo 1°.- Establecer la siguiente escala a fin de que los productores de áridos abonen mensualmente los montos mínimos del derecho de explotación.

Hasta 10 hectáreas – Volumen exigible 2.00 m3. – Monto a pagar PESOS CIENTO CINCUENTA (\$ 150,00).

10 a 20 hectáreas – Volumen exigible 4.000 m3. – Monto a pagar PESOS TERCIENTOS (\$ 300,00).

20 a 30 hectáreas – Volumen exigible 6.000 m3. – Monto a pagar PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA (\$ 450,00).

Mas de 30 hectáreas – Volumen exigible 10.000 m3 – Monto a pagar PESOS SETECIENTOS CINCUENTA (\$ 750,00).

Artículo 2°.- Los extractores furtivos deberán abonar el máximo de la escala establecida en el Artículo anterior.

Artículo 3°.- El pago mensual del derecho de explotación deberá realizarse del uno al diez del mes posterior al vencimiento, en el Municipio correspondiente, cuando exista convenio con el mismo, o mediante depósito bancario a nombre de la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos en la cuenta corriente N° 41-858/6 Fondo Especial de Promoción Minera del Banco Macro S.A.

Artículo 4°.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

Fdo: Dr. Sergio Antonio Gorustovich, Secretario de Minería, Industria y Recursos energéticos.

Resolución 075/02.-

Los valores mínimos para la extracción de áridos fijados por la Resolución N° 11/02 fueron objeto desde su dictado de numerosas críticas por parte de los productores, llegándose a poner en tela de juicio la licitud de la misma. Como consecuencia de ello y atento a las diversas cargas que pesan sobre los explotadores de canteras, la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos decidió disminuir el valor de los importes mínimos.-

De esta manera la escala quedó modificada de la manera siguiente:

Hasta 10 hectáreas – Volumen exigible 500 m3. – Monto a pagar PESOS VEINTE (\$ 20,00).

10 a 20 hectáreas – Volumen exigible 1.000 m3. – Monto a pagar PESOS CUARENTA (\$ 40,00).

20 a 30 hectáreas – Volumen exigible 1.500 m3. – Monto a pagar PESOS SESENTA (\$ 60,00).

Mas de 30 hectáreas – Volumen exigible 2.500 m3 – Monto a pagar PESOS OCHENTA (\$ 80,00).

También Se modifica la sanción de multa a los extractores furtivos en la suma de \$ 500.-

Resolución 076/02.-

La resolución 076/02 tiene por objeto reglamentar todo lo relativo a las guías empleadas por los transportistas de áridos, ya que las mismas son muy importantes para determinar área territorial de la cual se extrajo el material, el nombre del productor o transportista, tipo de material, y asimismo contribuyen para determinar las regalías que deben pagar los productores.

En virtud de que hasta el momento del dictado de la resolución se advirtió que circulaban guías de transporte que no contenían los requisitos y formas actuales por haber sido adquiridas varios años antes al de su efectivo uso, y a los fines de uniformar los requisitos de las mismas, con la presente resolución se establece un plazo de vencimiento de las mismas, establecido en el 31 de diciembre de cada año. Transcurrida dicha fecha las guías en desuso podrán ser cambiadas por las nuevas sin costo alguno.

Texto de la Resolución 076/02

SECRETARÍA DE MINERÍA Y RECURSOS ENERGÉTICOS

VISTO las facultades que acuerdan a esta Secretaría los Decretos N°s. 1557/79 y 1150/00, y;

CONSIDERANDO:

Que el transporte de minerales y de materiales áridos debe estar amparado por la correspondiente guía de transporte la cual cumple diversas funciones, como ser: área territorial de la cual se extrajo el material, el nombre del productor o transportista, tipo de material, a la vez las mismas sirven de control para determinar las regalías que deben pagar los productores.

Que se ha podido comprobar en reiteradas oportunidades que circulan guías de transporte que no responden a los requisitos y formas actuales. Que tal circunstancia se debe a que varios productores están utilizando guías que fueron adquiridas desde hace un tiempo a la fecha, y que no fueron oportunamente usadas.

Que las guías anteriores no se adaptan a las exigencias actuales razón por la cual, con el fin de agilizar el debido control de la producción se impone la necesidad de

su reemplazo, estableciendo un plazo prudencial para que los productores puedan acudir por ante esta Secretaría a tal fin.

Que el reemplazo de los talonarios deberá ser realizado sin costo alguno para los productores, eso en razón de que los mismos oportunamente al adquirir los talonarios abonaron el precio correspondiente.

Que es aconsejable anualmente reemplazar los talonarios no utilizados de manera tal que, en cada año calendario, solo se utilicen guías de ese año;

Por ello,

EL SECRETARIO DE MINERIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Establecer Que el transporte de minerales y de materiales áridos que se realice dentro del territorio de la provincia, solo deberá ser realizado utilizando guías de transporte que han sido adquiridas dentro del año calendario y correspondientes a dicho ejercicio.

ARTÍCULO 2°.- Todas las guías de transporte caducarán de pleno derecho los días 31 de Diciembre de cada año, pudiendo los tenedores legitimados de guías no utilizadas, canjearlas y/o revalidarlas sin costo alguno por ante la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos o por ante el Municipio en el caso que corresponda.

ARTÍCULO 3°.- Establecer que las guías de transporte de áridos que no sean del año 2002 caduquen de pleno derecho el 15 de Octubre del corriente año. Las no utilizadas podrán ser canjeadas sin costo alguno como se establece en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 4°.- El productor y/o transportista que utilice guías que no hayan sido adquiridas dentro del año calendario, se harán pasibles de las sanciones previstas en la legislación vigente, debiendo en tal caso aplicarles las multas previstas en el Artículo 2° del Decreto N° 1150, y Artículo 5° del Decreto N° 1557/79.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, publicar en el Boletín Oficial y archivar.

TITULO III

REGIMEN TRIBUTARIO

APLICABLE AL DERECHO

MINERO

CAPITULO I:

LINEAMIENTOS GENERALES:

INTRODUCCION

El presente capítulo y los subsiguientes no pretenden ser un estudio exhaustivo de la normativa impositiva vigente en materia de derecho minero, sino dar un panorama general de la normativa impositiva aplicable, y establecer cuales son los beneficios impositivos concedidos por distintas leyes a la explotación minera.-

Antes de comenzar a analizar todo lo concerniente al régimen tributario aplicable a las explotaciones mineras, resulta necesario caracterizar a este tipo de explotación, tener en cuenta ciertos aspectos esenciales que diferencian al sector minero del resto.-

En esta actividad se requieren inversiones de alto riesgo, toda vez que la experiencia mundial indica que de los proyectos que arrancan desde la prospección solo algunos llegan a la etapa productiva.

Los recursos minerales frecuentemente se localizan en zonas en las cuales las obras de infraestructura son nulas o muy escasas, por lo tanto resulta necesario efectuar inversiones en caminos de acceso, transporte, obras civiles de uso comunitario, generación y transmisión de energía, comunicaciones y otras que, en otros casos, habitualmente son brindadas por la inversión pública.

Por tratarse de recursos no renovables, es necesario que las empresas del sector realicen una constante actividad exploratoria, con los consiguientes riesgos, a los efectos de reemplazar las reservas consumidas, debiendo para ello aplicar nuevas tecnologías y técnicas exploratorias para agregar recursos no evidenciados.

Las inversiones necesarias para poner en producción una nueva reserva medida suelen ser de montos muy significativos y generalmente los retornos de los mismos se producen a largo plazo, por lo cual se tornan muy sensibles a las variaciones de los distintos factores de incidencia.

Otro aspecto sensible que caracteriza esta actividad es la inelasticidad de la oferta de productos hacia el mercado, ya que la misma está condicionada por el recurso disponible, siendo muy difícil variarla ante cambios de la demanda.

Es justamente en base a todos estos riesgos propios de la actividad, que el Estado, en su afán de fortalecer y fomentar desarrollo de los sectores productivos del país, dictó reglas claras y condiciones favorables para una corriente de inversiones nacionales e internacionales, en este campo de la producción, máxime si tenemos en cuenta que nuestro territorio ofrece una amplia y variada gama de recursos minerales inexplorados, aptos para sustentar un grado de desarrollo del sector que lo lleve a constituirse en uno de los de mayor relevancia.-

En éste marco de ideas se dictó la Ley 24.196, modificada por la Ley 25.429, las cuales permiten en lineamientos generales:

- a. Condiciones adecuadas para hacer atractivo el ingreso de capitales para la inversión de riesgo en el campo de la minería.
- b. Conocer y potencializar los recursos mineros del país.
- c. Incrementar la producción de los mismos y mejorar en calidad y cantidad el abastecimiento de materias primas a las industrias manufactureras.
- d. Inclinar favorablemente la balanza del intercambio comercial en materia de minerales y sus derivados primarios.
- e. Generar fuentes de trabajo y asentamientos estables en zonas alejadas, fronterizas y por lo general de escaso desarrollo.
- f. Incorporar y crear tecnología minera.

EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD FISCAL: LEY N° 24196 (modificada por LEYES 24.296, 25.161 y 25.429).-

La Ley 24.196 y sus modificatorias instituyen un Régimen de Inversiones para la Actividad Minera el cual rige para todas las personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, o que se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas.-

Dichas inversiones resultan imprescindibles para obtener un adecuado conocimiento del indudable potencial minero que posee el país, mediante prospecciones, exploraciones y la definición de los recursos, así como su aprovechamiento integral a través de las operaciones de extracción y beneficio, generando un significativo incremento en la producción global y en el desarrollo de las economías regionales.

ACTIVIDADES COMPRENDIDAS:

Prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería.

Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado, siempre que estos procesos sean realizados por una misma unidad económica. De manera que comprende también ciertos procesos de Industrialización.-

ACTIVIDADES EXCLUIDAS: Quedan expresamente excluidas las actividades vinculadas a:

- a. Hidrocarburos líquidos y gaseosos.
- b. El proceso industrial de fabricación de cemento a partir de la calcinación.
- c. El proceso industrial de fabricación de cerámicas.
- d. Las arenas y el canto rodado, destinados a la industria de la construcción.

Estabilidad Fiscal:

El beneficio de la estabilidad fiscal no tiene precedentes en los regímenes promocionales argentinos, significa que la Nación, la Provincia o el Municipio no aumentarán la carga impositiva a las empresas que lo soliciten y a partir de la presentación del estudio y factibilidad técnica económica.

“Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozaran de estabilidad fiscal por el término de 30 años, contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad.”-

De lo expresado en la ley surge que la estabilidad fiscal puede ser definida como un compromiso asumido por el Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, que haya adherido al régimen de la presente ley, de no aumentar las cargas tributarias, como consecuencia de aumentos en los tributos o bien la creación de nuevos, de quienes tomen a su cargo nuevos emprendimientos mineros, o a quienes ya habiéndolos iniciados incrementen su capacidad productiva. Dicha estabilidad se extiende por el término de 30 años, a partir de la presentación de su estudio de factibilidad técnica económica. La ley excluye expresamente al Impuesto de Valor Agregado.-

La estabilidad fiscal se refiere no sólo a una estabilidad arancelaria, como por ejemplo a la exención de tributos de importación de equipamiento minero, sino también a una estabilidad cambiaria, que implica el mantenimiento de las condiciones actuales en las que se desarrolla el mercado de cambios.-

El beneficio de la estabilidad fiscal se otorga en forma independiente en el ámbito nacional, provincial y municipal y se mantiene en forma separada no pudiendo compensarse la baja tributaria en una jurisdicción con el aumento de otra.-

La estabilidad fiscal conforme la letra de la ley significa que las empresas sujetas al presente Régimen no podrán ver incrementada su carga tributaria total, considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada al momento de la presentación del citado estudio de factibilidad. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las empresas inscriptas.

Comprende a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de ampliación.-

Cuando la Ley establece que las empresas no podrán ver incrementada su carga tributaria total, hace referencia al aumento que pudieren sufrir en su tributación como consecuencia de: creación de nuevos tributos; el aumento en las alícuotas, tasas o montos; la modificación en los mecanismos para la determinación de la base imponible del tributo; derogación de exenciones otorgadas; eliminación de deducciones admitidas

incorporación de situaciones exceptuadas; aplicación de tributos a casos o situaciones que no se hallaban alcanzados a la fecha de la presentación del estudio de factibilidad.-

La ley establece que las disposiciones relativas a la estabilidad fiscal no alcanzan al Impuesto al Valor A, el cual a los fines de la actividad minera se ajustará al tratamiento impositivo general.-

Asimismo establece que en caso de violación por las provincias o municipios a dicho principio dará derecho a los perjudicados a reclamar ante las autoridades que se retengan los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagos en exceso, para que se proceda a devolver al contribuyente.-

En lo relativo al impuesto a las ganancias establece la Ley que las empresas podrán deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el ciento por ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico económica de los mismos.-

En materia de importaciones se establece que las empresas sujetas al régimen se encuentran exentas del pago de los derechos a la importación por la introducción de bienes de capital, equipos especiales o partes o componentes de dichos bienes que fueren necesarias para la ejecución de las actividades comprendidas en el Capítulo III (Prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería. Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación, aserrado, tallado, pulido y lustrado, siempre que estos procesos sean realizados por una misma unidad económica. De manera que comprende también ciertos procesos de Industrialización).-

En lo referido a Regalías, se dispone que las provincias adheridas al régimen y que perciban regalías, no podrán cobrar un porcentaje superior al 3 % sobre el valor "boca de mina" del mineral extraído.-

La Autoridad de Aplicación de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, recae en la Secretaría de Minería de la Nación o el organismo específico que lo sustituya.-

Por último corresponde destacar que la Ley N° 25.063, en su artículo 6° - Capítulo I, art. 3°, inciso b, exime del IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA a los bienes pertenecientes a los sujetos alcanzados por el régimen de esta Ley de Inversiones Mineras, que se hallen afectados al desarrollo de las actividades comprendidas en el mismo.-

La presente ley se aplica únicamente en el territorio de las Provincias que hubieran adherido de modo expreso a la Ley 24.196, mediante el dictado de una ley al respecto, lo que implica a contrario sensu que las Provincias que no se hayan adherido a este régimen, no son alcanzadas por las medidas impositivas que la LIM establece.-

La exigencia del dictado de una norma expresa se entiende desde que ese modo se asegura una equitativa distribución entre Nación y Provincias del costo fiscal que implica otorgar beneficios impositivos como los previstos en la presente Ley, entre los que mencionamos, exención de tributos aduaneros, exención de los Impuestos a los Activos, a la estabilidad fiscal, entre otras.-

La Provincia de LA PAMPA es la única que hace expresa reserva en cuanto a las normas tributarias contenidas en el presente convenio en razón de poseer su propio régimen de promoción de la actividad minera (Ley provincial N° 928).-

La Provincia de salta adhiere a la Ley 24.196 mediante Ley Provincial N° 6.172.-

CUADRO TRIBUTARIO GENERAL.-

Impuesto a las Ganancias	Ley N° 20.628 y modif. (T.O. Dec. 649/97) Dec. Reg. 1344/98	Grava las ganancias de fuente argentina y obtenidas en el exterior por sujetos domiciliados en el país correspondientes a personas físicas o ideales	Sociedades de Capital: 35% Personas Físicas: escala progresiva del 9% al 35%.	Comprende a sucursales de empresas extranjeras. Régimen de Retenciones y Anticipos.
	Idem, art. 19	Quebrantos	Se compensan en los siguientes ejercicios	Desde el año siguiente al período del quebranto.

			durante 5 años	
	Idem, art. 91	Utilidades de sucursales de empresas extranjeras	No gravadas	
	Idem, art. 75	Minas y Canteras	Amortización por agotamiento, en función de las unidades extraídas	Cuando su explotación implique un consumo de la sustancia productora de la renta
	Idem, arts. 91, 92 y 93	Beneficiarios del exterior	Tasa aplicable: 35% Ganancia Neta Presunta: del 35% al 90%	Sobre la ganancia neta presunta Según ítems detallados en el art. 92
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	Ley N° 25.063 Dec Reg. 1.533/98	Grava los activos de las empresas	Tasa: 1% sobre valor del activo.	Pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias Exentos los bienes aplicados a la actividad mineras de inscriptos en la Ley N° 24.196.
Aportes Patronales al Sistema Único de Seguridad Social	Ley 24.241	Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones	16%	Sobre remuneraciones brutas(excluido Asignaciones Familiares)
	Ley 23.568	Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)	2%	Sobre remuneraciones brutas (excluido Asignaciones Familiares)
	Decreto 1382/01	Asignaciones Familiares	7,5%	Sobre remuneraciones brutas (excluido Asignaciones Familiares)
	Ley 24013	Fondo Nacional de Empleo	1,5%	Sobre remuneraciones brutas (excluido Asignaciones Familiares)
	Ley 23661	ANSSAL	0,6%	Sobre remuneraciones brutas (excluido Asignaciones Familiares)
	Ley 23660	Básico Obra Social	5,4%	Sobre remuneraciones

				brutas (excluido Asignaciones Familiares)
Impuesto aplicable a la Energía Eléctrica	Ley 24065, art. 70	Importe	\$ 2,40 por cada MWh	
	Ley 23681	Tasa	0,6% del costo de la energía comprada	
	Resolución 406 de la Secretaría de Energía	Casos en que el precio del peaje, según el cuadro tarifario del distribuidor resulta caro	El usuario puede invocar y exigir la aplicación de dicha resolución	
Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural	Ley N° 23966, Título III Ley N° 24.698 Decreto 1.098/96 Decreto 802/01 Ley N° 25.745 y Decreto N° 548/03	Grava la transferencia o importación de combustibles líquidos y gas natural por parte de sujetos encargados de refinación, comercialización o importación de esos productos.	Alicuota gas-oil 19% precio	Pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y del I.V.A. Exención al sur de Ruta Pcial. N° 23 y/o paralelo 42 (Patagonia)
	Decreto 377/98	Combustible especial para minería	No gravado	
Tasa sobre Gas-oil	Decreto 976/01	Grava la transferencia o importación	Tasa: \$ 0,05 por litro	
Aranceles de Importación	Código Aduanero	Grava la importación de bienes, locación y prestación de servicios, derechos de autor, etc.	Sobre valor CIF en Aduana: Derechos de Importación: hasta 21% (Extra Zona) Tasa de Estadística: 0,5% Comprobación de Destino: 1% (Ver reducciones de tasa y/o exenciones)	Percepciones y Retenciones: I.V.A.: 21% I.V.A. Adicional: 10% Imp. Gcias.: 3%
Derechos de Exportación	Decreto 310/02 Res.	Grava la exportación de bienes	Tasa: 10% para productos primarios.	

	M.E.e I. N° 11/02	para consumo	Según listado anexo 5% para productos industriales a la Resolución	
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)	Ley N° 23.349 y modif. Dec. Reg. 692/98	Grava la venta o importación definitiva de cosas muebles, obras, locaciones y prestación de servicios. Son sujetos del impuesto quienes realicen venta habitual de cosas muebles, importación definitiva, prestación de servicios y locaciones.	Tasa general: 21% Tasa para servicios: 27% Tasa diferencial: 10,5% Aplicables sobre la facturación neta de descuento: Débito Fiscal por ventas menos Crédito Fiscal por compras.	Exportaciones: exentas Régimen de reintegros por exportaciones Agentes de percepción: retienen 5%
Impuestos Internos	Ley N° 24.674 y modif. Decreto 296/97 Decreto 290/00	Grava determinados bienes o servicios como tabacos, bebidas, auto- motores, motores, seguros, teléfonos celulares y satelitales, yates, aeronaves y objetos suntuarios. Son sujetos de este impuesto quienes realicen venta, im- portación o fraccionado.	Tasas del 4% al 60% sobre valor de venta sin I.V.A.	Impuesto contenido en los precios de compra de los bienes o servicios.
Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios	Ley N° 25.413 (Competitividad) Decreto 380/01 Decreto 613/01	Grava operaciones de créditos y débitos bancarios en Cuenta Corriente y Caja de Ahorro, siendo sujetos las personas jurídicas y físicas	Tasa: hasta el 0,6%	Por Decreto 315/02 se eliminó el pago a cuenta de otros impuestos

Impuesto de Sellos	Decreto 114/93 Decreto 2.291/94	Transferencia de inmuebles	Alícuota progresiva del 0,75% al 2,5% sobre valores de transferencia	Excluye aportes de capital a sociedades, transferencia de establecimientos y vivienda familiar.
Impuesto a los Bienes Personales – Acciones y Participación en Capital de Sociedades	Ley N° 23.966 - Ley N° 25.585	Grava la tenencia de acciones en sociedades de la Ley N° 19.550 de las personas físicas domiciliadas en el país o en el exterior y de las sociedades o personas de existencia ideal domiciliadas en el exterior.	Tasa: 0,5% sobre valor patrimonial proporcional de las acciones según balance al 31 de Diciembre de cada año.	A liquidar o ingresar por las sociedades Ley N° 19.550, con carácter de pago único y definitivo.

Ley 20.628 – Impuesto a las ganancias.-

La presente Ley, grava todas las ganancias derivadas de fuente argentina, obtenidas por personas de existencia visible o ideal, cualquiera sea su nacionalidad, domicilio o residencia.-

Son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aún cuando no se indiquen en ellas; los rendimientos, rentas o enriquecimientos derivados de la realización a título oneroso de cualquier acto o actividad habitual o no.

Asimismo, se consideran ganancias gravadas las provenientes de juegos de azar, de apuestas, concursos o competencias deportivas, artísticas o de cualquier otra naturaleza, cuando no estén alcanzadas por la ley del impuesto a los premios de determinados juegos y concursos.

En lo que se refiere al impuesto a las ganancias aplicable a la explotación minera, el mismo se halla regulado en el art. 74 de la Ley 20.628, el cual establece:

Art. 74.-El valor impositivo de las minas canteras, bosques y bienes análogos estará dado por la parte del costo atribuible a los mismos, más, en su caso, los gastos incurridos para obtener la concesión.

Cuando se proceda a la explotación de tales bienes en forma que implique un consumo de la sustancia productora de la renta, se admitirá la deducción proporcionalmente al agotamiento de dicha sustancia, calculada en función de las unidades extraídas. La reglamentación podrá disponer, tomando en consideración las características y naturaleza de las actividades a que se refiere el presente artículo, índices de actualización aplicables a dicha deducción.

La Dirección podrá autorizar otros sistemas destinados a considerar dicho agotamiento siempre que sean técnicamente justificados.-

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (LEY 25.063)

El impuesto a la ganancia mínima presunta resulta aplicable en todo el territorio de la Nación, con excepción de los bienes situados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y se determina sobre la base de los activos de las empresas contribuyentes.-

Se encuentran expresamente excluidos los bienes pertenecientes a los sujetos alcanzados por el régimen de inversiones para la actividad minera, instituidos por la ley 24. 196, que se hallen afectados al desarrollo de las actividades comprendidas en el mencionado régimen (art. 3° Inc. b) de la Ley 25.063).-

En cuanto a la tasa aplicable, el impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de la alícuota del uno por ciento (1%) sobre la base de los activos de las empresas.-

El impuesto a las ganancias determinado para el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el presente gravamen, podrá computarse como pago a cuenta del impuesto de esta ley.-

Impuesto al Valor Agregado (LEY 25.063)

El Impuesto al valor agregado (I.V.A) se aplica y grava las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país; las obras, locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el territorio de la Nación, las importaciones definitivas de cosas muebles.-

La base imponible se encuentra determinada por el precio neto de la venta, de la locación o de la prestación de servicios, el cual a su vez se encuentra constituido por el monto que figura en la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto.-

En cuanto a la tasa, la alícuota del impuesto es del veintiuno por ciento (21%).-

Ley 24.402 Financiamiento para el pago del I.V.A.-

La Ley objeto de análisis, establece un régimen de financiamiento, destinado al pago del impuesto al valor agregado, el cual se aplica a:

a) Las operaciones de compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos.-

b) Las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera, de conformidad a las disposiciones de la presente ley.-

Son beneficiarios, los adquirentes o importadores de los referidos bienes, en tanto los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia la venta en el mercado externo, y los sujetos acogidos al régimen de la Ley N° 24.196 que realicen inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la producción de bienes destinados a la exportación. -

El presente régimen, dispone el art. 4°, se implementará a través de una línea de créditos, que las entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones podrán otorgar a los sujetos mencionados en el artículo 2°, destinados al pago del impuesto indicado en el artículo 1°.

En compensación, El Estado Nacional otorgará a dichas entidades financieras una retribución que no podrá superar el equivalente al doce por ciento (12 %) de tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos.

La retribución aludida se encuentra exenta del impuesto al valor agregado.-

Decreto Nacional 779/95 – Reglamentario del Régimen de Financiamiento para el pago del Impuesto al Valor Agregado.

Este decreto establece que se entiende exclusivamente por obras de infraestructura física para la actividad minera las siguientes:

- a) Accesos.
- b) Obras viales.
- c) Captación y transporte de agua.
- d) Desagües.
- e) Generación y transporte de energía.
- f) Campamentos y viviendas para el personal.
- g) Sistemas de comunicaciones.
- h) Sistemas de transporte de mineral o materiales.
- i) Sanidad.

Los interesados en hacer uso del régimen de financiación del Impuesto al Valor Agregado deberán acreditar, bajo declaración jurada, la existencia de un plan de producción, de ampliación de la misma o de un proyecto de inversión, destinado a la venta en el mercado externo de los bienes producidos.-

En cuanto a la retribución por parte del ESTADO NACIONAL a las entidades financieras fijada en la Ley 24.402, se establece que la misma no podrá exceder al monto resultante de aplicar el DOCE POR CIENTO (12%) de tasa anual efectiva sobre el monto del crédito otorgado.-

Las Autoridades de Aplicación del presente régimen serán la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, respecto a las compras, importaciones e inversiones destinadas al sector minero, y la SECRETARIA DE COMERCIO E INVERSIONES del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, respecto a las compras e importaciones destinadas al resto de los sectores de la economía. En los aspectos que sean comunes ambas Secretarías actuarán conjuntamente.-

Las Autoridades de Aplicación estarán facultadas para dictar todas las normas complementarias o aclaratorias convenientes para la mejor instrumentación del presente régimen.-

REGIMEN ADUANERO.-

En lo que respecta al Régimen Aduanero, analizaremos únicamente las normas reguladoras de la importación y exportación de bienes. La actividad minera necesita constantemente de la incorporación de maquinarias e insumos del exterior, como así también lo obtenido de las explotaciones, en muchos casos se exporta a otros países ya sea como producto primario o industrializado.-

En lo atinente a la importación y exportación de sustancias minerales corresponde analizar el Código Aduanero específicamente la Sección III, IV y V, los cuales contienen normas específicas en todo lo relativo a la importación y exportación de bienes en general; arts. 130 a 465.-

La primera parte del título primero de la sección segunda contiene normas generales, las cuales establecen que todo medio de transporte procedente del exterior que arribare a nuestro país o se detuviere en el, deberá hacerlo en lugares habilitados y presentar la totalidad de la documentación que la Administración de Aduanas, como autoridad de aplicación le requiera.-

Posteriormente el Código regula los distintos medios de transporte, regulando en primer lugar el transporte acuático en el Capítulo segundo del Título primero Sección III. Establece la documentación a presentar por los buques ante la autoridad aduanera a saber: la declaración de los datos relativos al buque; el o los manifiestos originales de la carga, incluida la declaración del equipaje no acompañado y de las encomiendas marítimas; el manifiesto del rancho y el manifiesto de la pacotilla. Dicha documentación debe presentarse traducida al idioma nacional, inmediatamente después del arribo del buque, salvo la traducción del manifiesto original de la carga, que podrá presentarse hasta DOS (2) días después, contados desde su arribo. En caso de negativa a presentar la documentación referenciada, el servicio aduanero podrá interdictar el buque y obligarlo a retornar al exterior.-

Luego en su Capítulo tercero el Código Aduanero regula el transporte Terrestre, estableciendo primeramente la documentación que debe presentar ante el servicio aduanero todo automotor de carga a saber: la declaración de los datos relativos al medio de transporte y a su conductor; las guías internacionales correspondientes a la mercadería transportada; y los manifiestos originales de la carga.-

Al igual que en el transporte acuático, en caso de negativa a presentar la documentación referida, el servicio aduanero podrá interdictar el medio de transporte u obligarlo a retornar al exterior.-

En el caso de transporte por ferrocarril la documentación a presentar es la siguiente: las guías internacionales correspondientes a la mercadería transportada; las papeletas correspondientes a la mercadería que transportare cada vagón.-

Además se debe redactar el manifiesto general de la carga y presentarlo al servicio aduanero en el plazo de UN (1) día, a contar desde su arribo.-

En el Capítulo cuarto se reglamenta todo lo concerniente al transporte aéreo, estableciéndose en primer lugar la documentación a presentar: la declaración general, que incluirá los datos relativos a la aeronave, su itinerario, tripulación y cantidad de pasajeros y de manifiestos originales de la carga; los manifiestos originales de la carga, incluida la declaración internacional de equipaje no acompañado de pasajeros.-

Además se exige que tengan una lista detallada de las provisiones de a bordo y demás suministros, cuya exhibición podrá ser requerida por el servicio aduanero.-

Como en todos los casos anteriores, en el supuesto de que mediare negativa a presentar dicha documentación exigida el servicio aduanero podrá interdictar la aeronave y obligarla a retornar al exterior.-

Cuando las aeronaves no desembarcaren pasajeros o mercadería ni realizaren otras operaciones aduaneras, por continuar en tránsito a otra aduana nacional o al exterior, sólo deberá presentarse la declaración general al servicio aduanero.-

Para todos los tipos de transporte, en los supuestos pérdida o deterioro de la mercadería originados en vicio inherente a la misma o en siniestro acaecido durante su transporte en el período que media desde el embarque hasta la descarga, deberá presentarse, dentro del plazo de DOS (2) días contados desde que hubiere finalizado la descarga, una declaración en la cual se expresen las características y causas

determinantes de pérdida o deterioro de la mercadería en cuestión, así como la indicación de la mercadería perdida o deteriorada, con la estimación del volumen y cantidad de la misma y el nombre y domicilio de su propietario.-

El administrador de la aduana decidirá sobre la aceptación o el rechazo de la justificación invocada, con fundamento en las probanzas y elementos de juicio de que dispusiere.-

A continuación se regula todo lo relativo a las operaciones de descarga, para lo cual es requisito obligatorio presentar la totalidad de la documentación mencionada en los párrafos anteriores.-

La totalidad de la mercadería incluida en el manifiesto de la carga que estuviere destinada al lugar de arribo deberá ser descargada, con excepción de aquella cuya permanencia o trasbordo hubiere sido autorizado por el servicio aduanero.

La mercadería descargada, hasta tanto se autorizare o se le asignare de oficio, según el caso, alguna destinación aduanera, queda sometida al régimen de depósito provisorio. Los lugares de depósito deberán contar con habilitación de la Administración Nacional de Aduanas, la que determinará:

- a) las condiciones que debe reunir el ámbito que se pretendiere habilitar a tal fin;
- b) si se habilita para recibir cualquier mercadería o sólo ciertas especies de ella;
- c) si se habilita para ser utilizado por cualquier persona, por personas determinadas o únicamente por el titular de la mercadería depositada;
- d) el importe de la garantía que, debe prestar el depositario a fin de asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones. Esta garantía no será exigible para la habilitación de depósitos de administración estatal.

El depositario de la mercadería ingresada asentará su recepción cotejando los manifiestos de la carga con las referencias que ostentaren los bultos o envases debiendo expresar el estado en que se hallaren y condiciones extrínsecas.

El ingreso de la mercadería en depósito provisorio de importación se hará bajo el control del servicio aduanero y los horarios habilitados el efecto.

En el TITULO II el Código regula todo lo relativo al destino que debe dársele a la mercadería importada, estableciendo que el importador debe solicitar una destinación de importación dentro del plazo de QUINCE (15) días contado desde la fecha del arribo

sin perjuicio de poder hacerlo con anterioridad. En el caso que no lo hiciere dentro del plazo establecido el importador será pasible de una multa equivalente al UNO (1%) por ciento del valor en aduana de la mercadería. La declaración contenida en la solicitud de destinación de importación es inalterable una vez registrada y el servicio aduanero no admitirá del interesado rectificación, modificación o ampliación alguna, salvo que la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella.-

En las operaciones aduaneras cuya tramitación no pudiere concluirse por incomparecencia del interesado, se citará a éste por un plazo no inferior a CINCO (5) días, contado desde la fecha de su notificación. Transcurrido el mismo sin que el interesado concurriera, podrá proseguirse el trámite de oficio sin la presencia ni intervención de aquél, no admitiéndose posteriormente reclamo alguno por los derechos que hubiere dejado de ejercer.-

Una vez librada la mercadería por la autoridad aduanera por haberse cumplido con la totalidad de los requisitos y formalidades exigidos, su retiro se efectuará por los lugares, en las horas y con sujeción a las formalidades que determine la Administración Nacional de Aduanas.-

Por libramiento, se entiende el acto por el cual el servicio aduanero autoriza el retiro de la mercadería objeto de despacho.-

El código legisla también otra forma de importación de mercaderías, en la cual aquella puede ser despachada directamente a plaza sin previo sometimiento de la misma al régimen de depósito provisorio de importación.-

Para optar por éste procedimiento el importador deberá presentar la solicitud de destinación de importación dentro de los (5) días anteriores al arribo del medio de transporte.-

Sin perjuicio de ello, el servicio aduanero podrá disponer que la mercadería ingrese, total o parcialmente, a un lugar de depósito al solo efecto de practicar una verificación exhaustiva.-

La Sección IV del Código de Minería regula todo lo concerniente a la Exportación de mercaderías. Bajo el Título I legisla lo que se denomina Destinaciones de Exportación, la cual consiste en la declaración contenida en una solicitud creada al

efecto sobre el destino que se le dará a la mercadería a exportar, la cual es inalterable una vez registrada y el servicio aduanero no admitirá del interesado rectificación, modificación o ampliación alguna, salvo las excepciones previstas para las Destinaciones de importación, es decir cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementarios anexos a ella.-

Para el caso de operaciones aduaneras cuya tramitación no pudiere concluirse por incomparecencia del interesado, se citará a éste por un plazo no inferior a DOS (2) días. Transcurrido dicho plazo sin que el interesado concurriera, el servicio aduanero podrá proseguir el trámite de oficio sin la presencia ni intervención del interesado, o declarar la caducidad de la solicitud de destinación de exportación de que se tratare.-

Libramiento, a los efectos de la exportación, es el acto por el cual el servicio aduanero autoriza la salida con destino al exterior de la mercadería objeto de despacho.-

La mercadería introducida a zona primaria aduanera para su exportación, que no fuere cargada inmediatamente en medio de transporte queda sometida al régimen de depósito provisorio de exportación hasta tanto se le asigne alguna destinación.-

Cuando no fuere solicitada la destinación aduanera o la restitución a plaza, según correspondiere, de la mercadería sometida al régimen de depósito provisorio de exportación, dentro de los plazos que determinare la reglamentación, el servicio aduanero procederá a anunciar la existencia y situación jurídica de la mercadería durante TRES (3) días en el boletín de la repartición aduanera, indicando el número, marca y envase u otras características suficientes para su individualización. Dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos, contado desde la última publicación, se permitirá al interesado, previa acreditación de su derecho a disponer de la mercadería, solicitar alguna de las destinaciones autorizadas, sin perjuicio del pago de las multas respectivas.-

Cuando se hubiere solicitado la destinación aduanera o la restitución a plaza y venciere el plazo para cumplimentarla, el servicio aduanero podrá disponer la venta de la mercadería, previa verificación, clasificación y valoración de oficio de la misma.-

El depositario de la mercadería ingresada en depósito provisorio de exportación registrará su recepción efectuando una descripción de la misma de conformidad con los

remisos, guías o permisos de embarque, según el caso, dejando constancia de su estado, condiciones extrínsecas y demás características suficientes para su individualización.-

Una vez dispuesta la salida de la mercadería y asignada la destinación de la exportación, todo medio de transporte que hubiere de salir del territorio aduanero debe hacerlo por los lugares habilitados y por las rutas y establecidos; poner el medio de transporte a disposición del servicio aduanero a los fines del ejercicio del control a su cargo; presentar al servicio aduanero la relación de la carga objeto de exportación.-

La reglamentación del Código aduanero se dispuso por intermedio del Decreto N° 1.001/82, el cual precisa algunos conceptos y establece normas procedimentales que perfeccionan o llenan vacíos dejados por el Código Aduanero.-

Nomenclatura Común del MERCOSUR

Como consecuencia de la incorporación de la 3° Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el Decreto N° 690 de fecha 26 de abril de 2002 (publicado en el Boletín Oficial del 02/05/02) actualizó las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (NCM).-

DERECHOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACION

El Decreto N° 690/02 establece:

Exportación

- Derecho de Exportación: a ser aplicados a las mercaderías exportadas a consumo.-

- Reintegros: Se debe mencionar que los exportadores de mercaderías manufacturadas en el país, nuevas, sin uso, con carácter oneroso tendrán derecho a obtener el reintegro total o parcial de los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores en las distintas etapas de producción y comercialización. Dicho reintegro se aplicara sobre el valor imponible definido en el Artículo 735 y siguientes del Código Aduanero.-

Para percibir el reintegro, previamente debe ingresarse el contravalor en divisas de la exportación y abonar los eventuales derechos de exportación. De acuerdo a lo

previsto en la Resolución ME N° 220/01 gozan de igual tratamiento las exportaciones destinadas a los países integrantes del MERCOSUR.-

- La alícuota del reintegro a las exportaciones por “Puertos patagónicos” se encuentra legislada por la Ley N° 23.018 y su modificatoria N° 24.490.-

Importación

- El Arancel Externo Común, vigente en los países miembros del MERCOSUR.-

- Derecho de Importación extrazona, es decir los tributos aplicables a los países no miembros del Tratado de Asunción:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO e IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PARA LAS IMPORTACIONES IVA

El nacimiento del hecho imponible se verifica en el momento en que la importación es definitiva y alcanza a casi todas las posiciones NCM

- La tasa general es del 21%.-
- Tasa reducida 10,5%, a) correspondiente al Artículo 28 del Decreto N° 690/02; b) correspondiente al Artículo 29 del Decreto N° 690/02; y c) Artículo 28 de la Ley de IVA.-

Impuesto a las Ganancias

La Dirección General de Aduanas (Decreto N° 1.076/92) interviene en carácter de agente de retención y/o percepción de este impuesto con arreglo a las disposiciones que dicte la AFIP.-

Al respecto se estableció un régimen de percepción aplicable a los bienes que se importen a consumo y alcanza a todas las posiciones de la NCM.

Liquidación

La liquidación de los conceptos impuesto al valor agregado adicional y anticipo al impuesto a las ganancias se encuentran normados en la Resolución General AFIP N° 591 del 13 de mayo de 1999 e Instrucción General DGA N° 9 del 31 de agosto de 1999.-

Regímenes especiales para exportaciones

Muestras sin valor comercial: La Dirección General de Aduanas podrá dar intervención de oficio o a solicitud del interesado para que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERIA dictamine si la cantidad de minerales o sus concentrados que el exportador quiere enviar al exterior se encuentra debidamente justificada y no represente una exportación encubierta (Artículo 5º del Decreto Nº 815 del 21 de mayo de 1992).

Mercaderías producidas en determinados departamento de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy:

La Resolución ex MEyOySP Nº 762 del 08 de julio de 1993 y su modificatoria Nº 479 del 23 de abril de 1998 estableció un régimen especial de reintegro a las exportaciones de sustancias minerales y determinados productos derivados contemplados en la NCM que cumplan ciertas condiciones y certificación de origen a través de la Subsecretaría de Minería, de acuerdo a lo previsto en la Resolución ex SM Nº 130 del 13 de agosto de 1993.

CAPITULO II:

DEVOLUCION DEL IVA A LAS ACTIVIDADES EXPLORATORIAS

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

A los fines del fomento de la actividad minera, y en concordancia con la aplicación de la Ley de inversiones mineras, se establece un régimen de Devolución al Impuesto de Valor Agregado que hubiera sido pagado durante la realización de determinadas actividades exploratorias:

DESCRIPCION GENERAL DEL REGIMEN. PRINCIPALES

CARACTERISTICAS

Podemos mencionar entre las principales características del régimen de devolución de IVA, las siguientes:

Es automático, estando sujeto a todas las acciones de verificación y control que deben efectuar la Secretaría de Minería y la AFIP-DGI, quienes evalúan la documentación y efectuarán las comprobaciones pertinentes, debiendo el interesado satisfacer los requerimientos que se le formulen.

Sin garantías.

La devolución, alcanza al impuesto pagado (créditos fiscales) originado en las importaciones y adquisiciones de determinados bienes y servicios.-

Los beneficiarios deberán estar inscriptos en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras - habilitado en la Dirección Nacional de Minería dependiente de la Secretaría de Minería.

El beneficiario deberá observar las disposiciones vigentes y cumplir con los requisitos formales establecidos.

En ningún caso procederá la devolución de los mencionados créditos cuando, entre otros: a) los mismos hubieran sido absorbidos por débitos fiscales en virtud de las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, o se hubiere hecho uso de los beneficios establecidos en el régimen general para exportadores (artículo 43 de la ley del IVA), o hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la Ley N° 24.402.

Los créditos fiscales computados por el responsable en el impuesto al valor agregado, deben ser netos de los conceptos que disminuyen el precio de tales operaciones (bonificaciones, descuentos, quitas, etc., obtenidos por los mismos bienes o servicios).

Alcanza, también, a los créditos fiscales originados por los servicios prestados conjuntamente con la operación gravada o como consecuencia de la misma (conceptos comprendidos en el artículo 10, quinto párrafo, inciso 1) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones). Ejemplos: transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, etc.

En el supuesto de verificarse pagos parciales, se presumirá sin admitir prueba en contrario, que los importes cancelados operan en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado.

El importe a devolver será verificado por la AFIP-DGI mediante la utilización de medios informáticos, que permitan constatar -entre otros aspectos- dicho monto con la información que posee en su base de datos.

La Dirección Nacional de Minería podrá suspender la aplicación de este régimen, sin necesidad de sumario o trámite alguno, notificando fehacientemente al interesado, cuando tenga conocimiento de que los derechos mineros han perdido vigencia, ya sea en forma temporal o definitivamente, o que se ha dictado una sanción de clausura o cierre (artículo 264 y concordantes del Código de Minería) o una medida de suspensión de los trabajos, u otra que inhabilite a realizar tareas de exploración.

Corresponderá la detracción de los montos a cuyo respecto se detecten:

- a) Facturas o documentos equivalentes que correspondan a proveedores con Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) no válida y/o inexistente.
- b) Facturas o documentos equivalentes apócrifos.

c) Proveedores que no revistan la calidad de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado.

d) Proveedores que registren bajas en el impuesto al valor agregado con anterioridad a la fecha de emisión de la factura o documento equivalente.

e) Proveedores que registren altas en el impuesto al valor agregado con posterioridad a la fecha mencionada en el punto precedente.

f) Facturas que no se encuentren en un rango de Código de Autorización de Impresión (CAI), autorizado y vigente a la fecha de su emisión.

g) Demás situaciones que determinen la improcedencia del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado.

Las empresas inscriptas antes del 02/06/01 (vigencia de la Ley N° 25.429), podrán usar los beneficios de devolución del Impuesto al Valor Agregado, para aquellas erogaciones efectuadas con posterioridad a tal vigencia, en tanto que para las empresas inscriptas con posterioridad, el beneficio será utilizable solamente para las erogaciones en que se incurriere desde la fecha de inscripción.

Los beneficiarios no podrán transferir, a título gratuito u oneroso, los bienes por los cuales hubieran obtenido los beneficios del presente régimen, salvo autorización previa de la Autoridad de Aplicación, quien la otorgará cuando la enajenación no afecte al desarrollo del proyecto. Esta limitación resultará de aplicación por el plazo de ejecución de las tareas exploratorias y hasta que el área comprendida en la exploración no sea objeto de formal liberación -salvo concesiones de explotación y/o minas de tercera categoría- y se haya dado cumplimiento al suministro de información dispuesto por el artículo 27 de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, su reglamento, o en el Código de Minería.

Con la solicitud de devolución el interesado deberá acompañar una copia autenticada de las facturas correspondientes a los bienes o servicios adquiridos, de los certificados de avance de obra, de los certificados de despacho a plaza si se trata de bienes importados y de los comprobantes de pago del precio y del Impuesto al Valor Agregado. En el anverso de todos los originales de la documentación que se acompañe y en las facturas de compra de bienes y servicios sujetos al régimen de devolución, los solicitantes deberán insertar la leyenda "Ley N° 24.196 Art. 14 bis. Devolución incluida

en la “primera” o “segunda”, (según corresponda) devolución del año”, dejando constancia el escribano público que autentique las copias, que tal leyenda se encuentra en el original. Sin perjuicio de ello, el interesado deberá poner a disposición los originales de la referida documentación para su intervención por la Autoridad de Aplicación como ésta lo establezca.

En el supuesto de haberse producido la transmisión por cualquier título legalmente admisible de los derechos mineros, el beneficiario podrá solicitar la devolución de los créditos fiscales generados a partir de la fecha en que opere la transferencia. El transmitente, por su parte, podrá solicitar la devolución de los créditos fiscales que se hubieran originado con anterioridad a dicho momento. Toda transmisión de los derechos mineros deberá acreditarse fehacientemente ante la referida Dirección Nacional. A tales efectos, la autoridad minera provincial competente deberá emitir una certificación de la titularidad de los derechos mineros - con indicación del período correspondiente a cada titular -, que describa la situación física, jurídica y demás antecedentes de los mismos.

La solicitud de devolución comprenderá también al impuesto al valor agregado de las importaciones y adquisiciones realizadas entre el momento de la solicitud de dichos derechos a la autoridad minera y el de su concesión, siempre que la misma haya sido previamente otorgada.

Tratándose de bienes de capital no será de aplicación el régimen especial de devolución cuando, al momento de su solicitud, los bienes no integren el patrimonio del solicitante, excepto que haya mediado caso fortuito o de fuerza mayor -incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros- debidamente probado.

BENEFICIOS OTORGADOS

El beneficio consiste en la devolución de la totalidad del IVA efectivamente abonado por todas aquellas operaciones gravadas vinculadas con actividades, bienes y servicios que legalmente permitan la aplicación del beneficio. La citada devolución procederá luego de transcurridos DOCE (12) períodos fiscales, contados a partir de aquel en que resultó procedente su cómputo, en la medida que los importes respectivos

integren el saldo a favor técnico en la declaración jurada del IVA (saldo a favor del responsable a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la ley de impuesto al valor agregado).

ACTIVIDADES, BIENES Y SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL BENEFICIO

Las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios que efectúen las empresas que realicen tareas de exploración minera, gozarán de los beneficios en la medida que:

Tengan por destino realizar actividades mineras consistentes en prospección, exploración, ensayos mineralúrgicos e investigación aplicada.

Se encuentren incluidos en el listado de bienes y servicios susceptible de otorgar beneficios, establecido por la Secretaría de Minería en el Anexo I de su Resolución N° 83/04. A continuación se presenta un detalle del contenido del citado Anexo:

ANEXO

Bienes de capital, partes y repuestos para:

Transporte de personas y bienes

Movimiento de suelos y rocas

Obras de infraestructura física consistentes en: obras viales, captación y transporte de agua, desagües, generación y transporte de energía, campamentos, viviendas para el personal y edificaciones auxiliares con su equipamiento, sistemas de comunicaciones, sanidad, educación y esparcimiento

Estudios, análisis, ensayos y muestreos, tanto en el terreno como en gabinete y laboratorio

Voladuras y perforaciones de suelo y rocas

Procesamiento de información

Bienes de consumo necesarios para la exploración adquiridos en la zona de las tareas de exploración exclusivamente o, fuera de ella, cuando la empresa acredite ante la Autoridad de Aplicación y a satisfacción de la misma, la imposibilidad de obtener en la cantidad o calidad suficientes de dichos bienes en la zona de la exploración .

Alquiler de bienes para la exploración arrendados en la zona de las tareas de exploración exclusivamente o, fuera de ella, cuando la empresa acredite ante la Autoridad de Aplicación y a satisfacción de la misma, la imposibilidad de obtener en la cantidad o calidad suficientes de dichos bienes en la zona de la exploración.

Servicios:

Análisis y ensayos químicos, geoquímicos y mineralógicos

Estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, mineralógicos, topográficos, geodésicos, sensores remotos, mecánica de rocas y suelos, mineralúrgicos, metalúrgicos, ambientales, hidrológicos, hidrogeológicos, de prefactibilidad y factibilidad de los recursos mineros explorados.

Perforación de suelos y rocas.

Voladuras y movimiento de suelos y rocas.

Construcción y reparación de infraestructura física ubicada en la zona de exploración.

Servicios generales (alimentación, limpieza, seguridad, medicina laboral y mantenimiento) efectuados en la zona de las tareas de exploración exclusivamente.

Transporte de bienes y personas.

Comunicaciones

Reparación de equipos.

Es importante señalar, además, que:

Los bienes de capital comprendidos son aquellos que revistan la calidad de bienes muebles o inmuebles amortizables para el impuesto a las ganancias (artículos 83 y 84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias), e integren el patrimonio del contribuyente y/o responsable al momento de la solicitud de devolución, excepto cuando haya mediado caso fortuito o de fuerza mayor debidamente probado y en la medida que tales bienes encuadren en la resolución citada.

Los bienes por los que se podrá solicitar el beneficio podrán ser nuevos o usados, en la medida que se encuentren en condiciones de aptitud para operar. En el caso de los bienes usados, la importación se ajustará a la normativa que reglamenta la nacionalización de los mismos.

A los fines del presente régimen, además de la compraventa, están incluidos la locación y el "leasing".

BENEFICIARIOS

Pueden ser beneficiarios del presente régimen las empresas que:

Realicen tareas de exploración minera; se encuentren inscriptas en el régimen de la ley de inversiones mineras y cumplan con los requisitos exigidos por las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia.

PRESENTACION PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES EXPLORATORIAS

Para poder gozar de los beneficios y con la finalidad de permitir la fiscalización pertinente por parte de la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Minería de la Nación), el interesado deberá informarle, antes del inicio de las actividades exploratorias respecto a las cuales prevé utilizar el beneficio, los siguientes aspectos:

- 1.1 Descripción de trabajos a realizar con su ubicación
- 1.2 Cronograma de Ejecución
- 1.3 Presupuesto estimativo de inversión
- 1.4 Bienes a adquirir y servicios a contratar

En caso de modificación sustancial de lo programado, deberá informar de ello a la Autoridad de Aplicación.

REQUISITOS Y CONDICIONES A CUMPLIR

La solicitud de devolución podrá interponerse siempre que:

Respecto al área o las áreas en las que se realizaron los trabajos, el peticionante acredite ante la Dirección nacional de Minería, lo siguiente:

Haber cumplido con la presentación previa al inicio de las actividades exploratorias (informando los trabajos a realizar, el cronograma de ejecución, el presupuesto estimativo de inversión y los bienes a adquirir y servicios a contratar).

Ser titular de derechos mineros transferidos o ser titular de:

Permisos exclusivos de exploración vigentes, otorgados por la autoridad minera competente (artículo 25 y concordantes del Código de Minería), o de concesiones de explotación (artículos 44, 186, 187 y concordantes del Código de Minería), si se trata de minas de primera o segunda categoría. De tratarse de minas de tercera categoría, el peticionante deberá acreditar la propiedad del suelo en el que se encuentren o de los derechos mineros transmitidos por el propietario.

La aprobación del Informe de Impacto Ambiental (artículos 252, 253 y concordantes del Código de Minería), otorgada con carácter previo a las actividades exploratorias alcanzadas por el régimen, salvo que configuren meras tareas de prospección para las cuales no sea necesaria la presentación de dicho informe, según las reglamentaciones o disposiciones vigentes en la provincia respectiva.

Los bienes y servicios por los que se solicite el beneficio sean necesarios para la realización de las actividades mineras consistentes en prospección, exploración, ensayos mineralúrgicos e investigación aplicada, de acuerdo con el Anexo I de la Resolución N° 83/04, en relación con las áreas o concesiones y/o derechos a que se refiere el precedente punto 1.

A la fecha de efectuar la presentación en la Dirección Nacional de Minería , el responsable hubiera:

Detraído de su saldo a favor técnico, el monto por el cual solicita devolución, en la declaración jurada del impuesto al valor agregado correspondiente al período fiscal inmediato anterior a dicha fecha.

Presentado las declaraciones juradas del referido impuesto, correspondientes a los períodos fiscales transcurridos desde aquel en que resultó procedente el cómputo del crédito fiscal hasta el inmediato anterior a la fecha de solicitud, ambos inclusive.

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION. INFORMACION A SUMINISTRAR

El procedimiento a seguir a los efectos de la devolución del IVA, se encuentra normado en la Resolución conjunta dictada por la AFIP DGI y Secretaria de Minería N° 83/04

La misma se dicta en la necesidad de reglamentar la modalidad de devolución, en la misma se establecen las formalidades, plazos y otros requisitos que se deberán observar a los fines de lograr el beneficio,.-

El trámite del pedido de devolución se iniciará mediante la presentación de una nota con carácter de declaración jurada, ante la Dirección Nacional de Minería, que deberá estar acompañada de los siguientes elementos:

a) Una copia de la nota presentada ante la autoridad minera, por medio de la cual oportunamente se informaron y detallaron todos los trabajos a realizar, el cronograma de ejecución, el presupuesto estimativo de inversión y de los bienes a adquirir y servicios a contratar.

b) Una nota dirigida a la citada Dirección Nacional, con carácter de declaración jurada, suscrita por el representante legal (o apoderado) del peticionante (con firmas certificadas por escribano público de registro, con la respectiva intervención del Colegio de Escribanos correspondiente) en la que se manifieste que toda la información presentada es exacta y la documentación acompañada, en originales o copias, es auténtica, y además se declare: el domicilio legal a los efectos de todas las notificaciones o comunicaciones de la Dirección Nacional de Minería., el domicilio fiscal, a los mismos efectos, denunciado ante la AFIP/DGI.

Los importes cuya devolución se solicita corresponden a créditos fiscales en el impuesto al valor agregado originados en importaciones y/o adquisiciones de bienes y/o servicios que reúnen las exigencias establecidas por el artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, su reglamentación y las normas aclaratorias o complementarias.

No existen impedimentos legales para lograr la devolución que se solicita atendiendo a la normativa vigente.

La mencionada nota deberá ser suscripta por el titular, o apoderado con facultades suficientes para ello, con firma legalizada ante Escribano Público.-

La información atinente a las certificaciones de avance de obra

Los pagos efectuados por las operaciones que contienen crédito fiscal sujeto a pedido de devolución, se ajustan a las disposiciones sobre medios de pago

oportunamente sancionadas por la AFIP (Resoluciones Generales N° 151, su modificatoria y su complementaria o N° 1.547, según corresponda).

En el caso de realizarse cancelaciones mediante medios electrónicos, se dejará constancia de dicho procedimiento en las planillas de detalle de comprobantes del Anexo III (A,B,C,D), circunstancia que, respecto de la verificación y cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre medios de pago autorizados, deberá constar en la certificación contable, señalada en el Anexo V.

Copia de la Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad minera provincial, para cada una de las etapas de cada proyecto.

La certificación de titularidad de los derechos mineros emitida por la autoridad minera provincial.

La información detallada en los Anexos II, III (A,B,C,D), y IV del presente y copia autenticada (por escribano público y su firma certificada por el Colegio de Escribanos correspondiente) de la documentación a que se refiere el Apartado II del inciso b), del artículo 14 bis del Reglamento de la Ley de Inversiones Mineras, o documentación equivalente, separada por cada proyecto u obra realizada, indicando localidad, departamento y provincia, ordenados por fecha de factura o certificado de importación.

Copia autenticada (por escribano público y su firma certificada por el Colegio de Escribanos correspondiente) de toda otra documentación que permita corroborar la veracidad de las erogaciones realizadas para la adquisición de los bienes y servicios comprendidos en el beneficio y la exactitud de los importes a devolver (entre otras: copia de los contratos, órdenes de trabajo o documentación equivalente correspondiente a la contratación de los servicios por los que pide el beneficio, notas de crédito por bonificaciones, descuentos, quitas y similares que disminuyan el importe de dichas compras y/o servicios, recibos y/o documentos equivalentes, que acrediten los respectivos pagos y la cancelación total del impuesto al valor agregado).

Un informe extendido por contador público independiente (con firma del profesional certificada por el Consejo Profesional o entidad en la que se encuentre matriculado) acerca de la:

Razonabilidad y legitimidad del monto a devolver (entre otros conceptos: procedencia, imputación, veracidad, importe, registración, etc.).

Existencia del bien de capital - integrando el patrimonio del solicitante - al momento de la solicitud. Cuando al referido momento, el bien no integre el patrimonio del responsable por caso fortuito o de fuerza mayor, en el informe se dejará constancia de dicha situación y se adjuntará copia de la documentación que la acredite fehacientemente.

Existencia del bien de capital al momento de la solicitud para el caso de bienes sujetos a contratos de alquiler o "leasing" y veracidad de que la prestación de dichos bienes se realiza de acuerdo a los contratos obrantes.

Procedencia de la devolución en razón de que se cumple con toda la normativa vigente para este régimen especial .

El citado informe deberá constar en una certificación contable que, como mínimo, contenga el monto cuya devolución se solicita, la justificación de la procedencia del pedido, la documentación original correspondientes a las operaciones alcanzadas por este beneficio, los pagos por operaciones que contienen crédito fiscal, y constancia de que los bienes por los que se solicita la devolución del impuesto al valor agregado están incorporados al patrimonio social al momento de la solicitud.-

Los reportes originados por el respectivo programa aplicativo (que la AFIP pondrá a disposición del contribuyente).

CIRCUITO ADMINISTRATIVO PARA CONCRETAR LA DEVOLUCION. PLAZOS

Esquemáticamente el circuito para que se concrete la devolución es el siguiente:

Una vez efectuada formalmente y presentada la solicitud de devolución ante la Dirección Nacional de Minería este organismo requerirá de ser necesario que, dentro de los 20 días hábiles administrativos inmediatos siguientes al de la presentación, se subsanen las omisiones o deficiencias observadas. El incumplimiento al requerimiento formulado, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos inmediatos siguientes a la fecha de notificación del citado requerimiento, dará lugar sin más trámite al archivo de las actuaciones.

Luego de efectuadas las comprobaciones y controles que determine la citada Dirección Nacional, de corresponder, remitirá el expediente a la AFIP - DGI ;

conteniendo toda la información presentada y dejando constancia en el expediente del monto susceptible de devolución, mediante la emisión de un informe favorable donde manifieste la conformidad de la documentación presentada y de la información en ella consignada, tanto en sus aspectos formales como materiales que resulten de su competencia, sin que ello obste a la verificación que debe realizar la AFIP.

Recibido el expediente por la AFIP/DGI ésta notificará al contribuyente, en el domicilio fiscal oportunamente declarado, que se encuentra habilitado para la prosecución del trámite. A estos fines el contribuyente deberá presentar ante la dependencia de la AFIP/DGI en la que se encuentre inscripto, los siguientes elementos:

Formulario de declaración jurada en el que constará el importe total por el cual se solicita devolución así como el mes y el año de la declaración jurada en la que se encuentra exteriorizado.

Soporte magnético que contendrá información relativa a las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios que generaron el derecho a la devolución -en disquete de tres pulgadas y media (3½") HD-, rotulado con indicación de apellido y nombres, denominación o razón social, Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), acompañado por el formulario de declaración jurada, referida en el punto 3.1., ambos generados mediante el programa aplicativo denominado "RECUPERO DE IVA – REGIMENES ESPECIALES – Versión 2.0" aprobado por la propia AFIP/DGI mediante RG N° 1761, el que podrá ser transferido desde su página "web" (<http://www.afip.gov.ar>).

Observaciones:

Cuando se efectúe la entrega del mencionado soporte, se procederá a la lectura y validación de la información contenida en los archivos magnéticos y se verificará si ella responde a los datos contenidos en el formulario de declaración jurada generado por el sistema.

De comprobarse errores, inconsistencias, utilización de un proceso distinto del provisto o la presencia de archivos defectuosos, la presentación será rechazada, generándose una constancia de tal situación.

De resultar aceptada la información, se entregará el duplicado del mencionado formulario, como comprobante de recepción.

Respecto de los elementos presentados de acuerdo con los puntos 3.1. y 3.2. podrá requerirse que se subsanen las omisiones o deficiencias observadas, dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos inmediatos siguientes al de la fecha de su presentación.

En el supuesto del punto anterior se le otorgará al responsable un plazo no inferior a diez (10) días hábiles administrativos (contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento), bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de disponer el archivo de las actuaciones.

La solicitud será considerada formalmente admisible por la AFIP/DGI sólo cuando el juez administrativo haya recibido el expediente completo en todas sus partes, en las condiciones que exige el presente régimen, y transcurrido el plazo de 10 días hábiles administrativos señalados en el punto 3.2.4., no se haya formulado el citado requerimiento; o las omisiones o deficiencias detectadas se subsanen, dentro del plazo mencionado en el punto 3.2.5.

La fecha en la que se considerará a la presentación como formalmente admisible, será la de presentación de los elementos indicados en los puntos 3.1. y 3.2. o la que surja del punto 3.2.6.2. precedente, según corresponda.

La procedencia de la solicitud será resuelta por el juez administrativo competente de la AFIP/DGI, dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la solicitud resulte formalmente admisible. En el mencionado término, podrán solicitarse las aclaraciones y/o el aporte de la documentación complementaria que resulten necesarios para la evaluación de la solicitud. El plazo otorgado para su cumplimiento tendrá carácter suspensivo.

Observación: De tratarse de sujetos que registren incumplimientos respecto de la presentación de declaraciones juradas vencidas, relacionadas con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, el cómputo del plazo arriba citado, se interrumpirá hasta que el contribuyente haya dado cumplimiento a las citadas obligaciones.

Una vez resuelta la procedencia de la solicitud, el juez administrativo emitirá una comunicación (que servirá de constancia del trámite realizado y será notificado al solicitante), en la que consignará:

El importe del impuesto al valor agregado facturado.

La fecha a partir de la cual surte efecto la solicitud de devolución.

Cuando corresponda, los fundamentos que avalen la detracción o impugnación - total o parcial-, de los importes declarados por el beneficiario.

El importe a devolver.

Observación: Esta comunicación no enerva las facultades de la Autoridad de Aplicación y de la AFIP/DGI, para efectuar los actos de verificación y determinación de las obligaciones a cargo del contribuyente.

El pago se hará efectivo dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos inmediatos siguientes a la fecha de emisión de la comunicación indicada en el precedente punto 5.

Observación: Los responsables que tengan deudas por aportes y/o contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social, deberán cancelar las mismas, como condición previa a la devolución del monto que resulte procedente.

SITUACION EXCEPCIONAL. REGIMEN DE DEVOLUCION SUJETO A PREVIA FISCALIZACION

Se tramitarán de esta manera, conforme a lo establecido en el Anexo VI, las solicitudes presentadas por determinados sujetos, así como aquellas respecto de las cuales se constaten determinadas situaciones. En efecto, para los sujetos y circunstancias descriptos a continuación, el régimen de devolución operará – de manera excepcional – previa fiscalización por parte de la AFIP/DGI. Ellos son:

Los sujetos que:

Hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en la Ley Penal Tributaria (Leyes N° 23.771 y sus modificaciones o N° 24.769, según corresponda), siempre que se les haya dictado prisión preventiva o, en su caso, exista auto de procesamiento vigente a la fecha de interposición de la solicitud.

Hayan sido querellados o denunciados penalmente, por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas o aduaneras, propias o de terceros. Cuando el querellante o denunciante sea un particular –o tercero–

, esta modalidad de devolución previa fiscalización sólo tendrá efectos cuando concurra la situación procesal indicada en el punto 1.1. precedente.

Estén involucrados en causas penales, en las que se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre que concurra la situación procesal indicada en el punto 1.1. anterior.

Observación: Esta modalidad de devolución previa fiscalización también alcanzará a las personas jurídicas, las agrupaciones no societarias y/o cualquier otro ente colectivo cuyos gerentes, socios gerentes, directores u otros sujetos que ejerzan la administración social, como consecuencia del ejercicio de dichas funciones, se encuentren involucrados en alguno de los supuestos previstos en el párrafo anterior.

Créditos provenientes de facturas o documentos equivalentes, que tengan una antigüedad mayor a veinticuatro (24) meses calendario a la fecha de interposición de las respectivas solicitudes ante la autoridad de aplicación.

Observaciones: Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para:

Las facturas o documentos equivalentes cuyo impuesto al valor agregado facturado corresponda a adquisiciones de bienes de uso, siempre que se presente una nota en la que se fundamenten los motivos por los cuales el crédito fiscal correspondiente tiene una antigüedad mayor a veinticuatro (24) meses.

Los contribuyentes que hubieran realizado inversiones hasta el 27/02/04 (por las que corresponde la presentación única: operaciones por las que tuvieron derecho a gozar de los beneficios y cuya solicitud de devolución deberá concretarse a partir del 29/03/04 y hasta el 31/5/04).

Las solicitudes que se encuentren en trámite o que se interpongan, cuando como consecuencia de las acciones de verificación y fiscalización efectuadas por la AFIP/DGI, se compruebe respecto de solicitudes ya tramitadas, la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen al reintegro efectuado.

Observación: Cuando se produzcan estas circunstancias respecto de solicitudes tramitadas, este régimen excepcional de reintegro sujeto a fiscalización, se aplicará tanto a las solicitudes en curso (a la fecha de notificación del acto administrativo que

disponga la impugnación, total o parcial, del crédito fiscal reintegrado) como a las interpuestas con posterioridad , que se indican a continuación:

Las DOS (2) primeras solicitudes, cuando:

El monto del crédito fiscal impugnado se encuentre comprendido entre el 5% y el 10% del monto total de la solicitud de devolución observada, o

el monto del crédito fiscal impugnado resulte inferior al 5% del monto indicado en el punto anterior y el responsable no conforme el ajuste efectuado.

Las CUATRO (4) primeras solicitudes, cuando:

El monto del crédito fiscal impugnado resulte superior al 10% del monto total de la solicitud de devolución observada, o

se tratara de reincidencias dentro de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y el responsable no conforme el ajuste efectuado.

Anexos que deben presentarse

Anexo II

Están excluidos de este Régimen, quienes hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en las leyes N° 23.771 Y 24.769, siempre que se les haya dictado prisión preventiva o exista auto de procesamiento vigente a la fecha de solicitud, o quienes hayan sido querellados o denunciados por delitos que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas o aduaneras o que esten involucrados en causas penales en las que haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones,-

Asimismo, quedan excluidos los créditos provenientes de facturas o documentos equivalentes que tengan una antigüedad mayor a veinticuatro meses calendarios a la fecha de interposición de las respectivas solicitudes. No resulta de aplicación lo mencionado precedentemente en cuanto se fundamente la razón por la que el crédito fiscal tiene una antigüedad de veinticuatro meses.-

CANTIDAD DE PRESENTACIONES EN CADA AÑO - MOMENTO DE PRESENTACION

Los contribuyentes podrán:

Efectuar hasta un máximo de dos (2) presentaciones de solicitudes originales de devolución por cada año calendario. Deberán incluir en las mismas la totalidad de los créditos fiscales por los que tengan derecho a solicitar el reintegro, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.

Presentar las solicitudes de devolución a partir del primer día del segundo mes calendario, inclusive, inmediato siguiente a aquel en que finalice el lapso de DOCE (12) períodos fiscales, dispuesto por las normas legales.

DEVOLUCION DEL IVA PARA INVERSIONES EN EXPLORACION **EFFECTUADAS HASTA EL 27/02/04.**

Los contribuyentes que al 27/02/04 (fecha de entrada en vigencia de la Resolución S.M. N° 11/04 y AFIP N° 1641/04), hubieren realizado operaciones por las que tuvieren derecho a gozar de los beneficios establecidos por el presente régimen de devolución, deberán efectuar la presentación de una única solicitud de devolución a partir del 29/03/04 (fecha de aplicación de la norma arriba citada) y hasta el 31/5/04 (último día hábil del segundo mes siguiente). En este aspecto, deberán cumplir con los requisitos formales y procedimientos establecidos por la normativa vigente.

En la mencionada solicitud deberán incluirse las operaciones realizadas por las que tuvieren derecho a solicitar el reintegro del impuesto pagado (desde la vigencia del régimen especial), por las que corresponda el beneficio.

A los fines dispuestos en este capítulo, se duplicarán los plazos establecidos en las normas reglamentarias para que la AFIP/DGI, a través del juez administrativo, resuelva la procedencia de la solicitud y efectúe los respectivos pagos (120 días y 10 días hábiles administrativos, respectivamente).

ACTIVIDAD MINERA

Decreto 1089/2003

Inversiones mineras. Modifícase el Reglamento de la Ley N° 24.196, aprobado por el Decreto N° 2686/93 y sus modificatorios. Estabilidad fiscal. Beneficios a la exploración.

Bs. As., 7/5/2003

VISTO el Expediente N° S01:0168970/2002 del Registro del MINISTERIO DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que en atención a las modificaciones introducidas por la Ley N° 25.429 a la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 es necesario adecuar aspectos de su Reglamento, que fuera aprobado por Decreto N° 2686 del 28 de diciembre de 1993 y sus modificaciones.

Que la oportunidad es propicia para incorporar ajustes en algunos temas de su normativa, en función de la experiencia obtenida durante nueve años de aplicación.

Que el Artículo 1° de la ley citada confirió alcances integrativos al Reglamento, al disponer "Institúyese un régimen de inversiones para la actividad minera que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias o que en su consecuencia dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL".

Que uno de los principales temas a reglamentar es el atinente a la estabilidad fiscal, respecto a la compensación entre los incrementos o disminuciones de la carga tributaria total. A la Autoridad de Aplicación le ha sido encomendada tal tarea por el inciso 7° del Artículo 8° de la modificada Ley N° 24.196, pero por razones de orden práctico es conveniente establecer, por el presente, una operatoria en tal sentido, sin defecto de que, por sus objetivos de practicidad, sea de naturaleza eminentemente modificable por parte de la citada autoridad en cualquier momento y en función de la realidad entonces existente. Tal operatoria se desarrolla en el Anexo I al presente decreto.

Que otro tema esencial es el concerniente a la definición de impuestos incluidos o no en dicha garantía, denominados directos los primeros e indirectos los segundos en los apartados 1.1 y 4.5 del Artículo 8° de la ley, modificado por la Ley N° 25.429.

Que habida cuenta de los diferentes sentidos y alcances que la doctrina asigna a esa terminología y la necesidad de reafirmar la seguridad jurídica y promover la

competitividad de los productos mineros nacionales en una economía globalizada, es preciso establecer el criterio para la distinción. La clasificación más antigua, basada en la traslatividad, no es aplicable en este particular caso ya que, como bien señalan Horacio García BELSUNCE (Temas de Derecho Tributario) y Héctor VILLEGAS (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario) la traslación no se da inexorablemente como parte del proceso de distribución de hecho de los impuestos, sino que debe examinarse en cada caso particular —concepto de "impuesto trasladado" como hecho verificado en la realidad— enfatizando la imposibilidad de sentar un criterio general. Por ello y atendiendo a los fines trascendentales de la garantía legal de estabilidad fiscal, es apropiado partir de conceptos de doctrina española, que se basan en las facultades concedidas por la norma tributaria, combinándolos con los de efectiva incidencia en los costos de las empresas mineras, exclusivamente en la medida que se vinculen con el emprendimiento amparado por esta garantía.

Que otro aspecto de importancia a reglamentar es el de los "Beneficios a la Exploración", introducidos como Capítulo IV, Artículo 14 bis, de la ley por su reciente reforma.

Que también es oportuno considerar diversos temas para mejorar las soluciones normativas, tales como: la oportunidad de uso y los alcances de la deducción especial del Artículo 12 de la ley, la aplicación práctica de las reformas del Artículo 13, las actividades de las empresas de servicios mineros, habida cuenta de las fluctuaciones producidas en su demanda, y ciertas desigualdades observadas respecto a los efectos residuales de la derogada Ley N° 22.095.

Que idéntico criterio se adoptó respecto del Artículo 21 en cuanto al uso del beneficio por los prestadores de servicios mineros, e incluyéndose con fines meramente aclaratorios, requisitos para importación de bienes usados.

Que, ante la sanción del Artículo 22 bis por la Ley N° 25.161 corresponde dejar sin efecto la reglamentación del Artículo 22.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA, ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION N° 7 de fecha 4 de febrero de 2002.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL es competente para dictar esta medida en uso de las facultades establecidas por el Artículo 99 inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 1° de la Ley N° 24.196.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Sustitúyese el Artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 24.196, de Inversiones Mineras, aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios, por el siguiente:

"ARTÍCULO 5°: El régimen instituido por la Ley N° 24.196 alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a los que ya se hallan en actividad a la fecha de su vigencia, con excepción de lo normado en el Título I de su Capítulo IV, estabilidad fiscal, que alcanza exclusivamente a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de ampliación.

Determinase como productos de elaboración primaria los siguientes: diatomitas, arcillas, perlitas y vermiculitas expandidas o procesadas, cales, yesos cocidos, dolomitas calcinadas, revestimientos refractarios y rocas aserradas. También se considerarán incluidos los subproductos de los procesos mencionados en el Artículo 5°, inciso b) de la Ley N° 24.196 y los siguientes productos obtenidos a partir de minerales: sulfato de aluminio, boratos elaborados en general, ácido bórico, fosfatos, ocre, ferromanganeso, ferrosilicio, carburo de calcio, carburo de silicio y anhídridos y sales de cromo, litio, cobalto, tantalio, tungsteno, estroncio, bario, magnesio y potasio.

Facúltase a la Autoridad de Aplicación para introducir modificaciones en la precedente nómina, mediante resolución debidamente fundamentada.

Se define como unidad económica a la unidad productiva económica que puede componerse de uno o más procesos, partiendo del material en bruto, triturado o molido, o de los concentrados primarios.

Se considerarán regionalmente integrados con las explotaciones mineras, los procesos de tratamiento de minerales instalados dentro del radio de DOSCIENTOS (200) kilómetros de los yacimientos ubicados en territorio nacional, que les provean no

menos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en peso de sus insumos minerales, teniendo en cuenta la producción total del año calendario anterior. En caso del primer año de operación se tomará en cuenta el programa que la empresa informe al respecto, el cual deberá tener carácter de declaración jurada.

La Autoridad de Aplicación podrá admitir un porcentaje menor al establecido cuando la problemática del mercado así lo indique. Las excepciones podrán ser revocadas por la misma autoridad en caso de modificarse las condiciones de mercado.

La Autoridad de Aplicación podrá extender sin límite el radio determinado en el presente artículo cuando no existiere la infraestructura necesaria, o bien en casos de regiones que presenten un bajo índice de industrialización y ocupación de mano de obra fabril, tal que resulte conveniente su desarrollo industrial, a fin de consolidar el asentamiento poblacional y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Las excepciones se acordarán mediante resolución debidamente fundamentada.

Se considerarán regionalmente integrados con explotaciones mineras los procesos de tratamiento de minerales efectuados en instalaciones ubicadas en territorio argentino dentro de Areas de Operaciones determinadas por protocolos enmarcados en Acuerdos Internacionales de Complementación Económica o en otros Tratados Internacionales, aun cuando no reúnan las condiciones establecidas en el párrafo quinto de este artículo siempre que: a) Las actividades contempladas en el inciso a) del Artículo 5° de la Ley N° 24.196 sean realizadas dentro de la misma Area de Operaciones, aunque lo fueran en territorio extranjero; b) En el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la Autoridad de Aplicación la existencia de reservas explotables, al solicitar dicha inscripción o reconocimiento.

Se considerarán también regionalmente integrados, aunque no reúnan las condiciones establecidas en el párrafo quinto de ese artículo ni se hallen en las precedentemente referidas Areas de Operaciones, los procesos de tratamiento de minerales de origen extranjero, en instalaciones ubicadas en territorio argentino, siempre que:

a) En el proyecto respectivo se prevea que, durante el desarrollo de la explotación, sea o no en los años iniciales, se procesarán también minerales extraídos en nuestro territorio, debiendo a tales efectos el interesado en inscribirse en el registro del régimen o en obtener el reconocimiento de la integración regional, acreditar ante la Autoridad de Aplicación la existencia de reservas explotables, al solicitar dicha inscripción o reconocimiento;

b) Tal emprendimiento sea declarado de interés nacional a los efectos del presente párrafo por Decreto de este PODER EJECUTIVO NACIONAL”.

Art. 2° — Sustitúyese el Artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°: A los fines previstos en el Artículo 8° de la Ley N° 24.196 se establece que: Para obtener la estabilidad fiscal las empresas que así lo soliciten deberán presentar a la Autoridad de Aplicación un estudio de factibilidad —avalado por profesionales competentes específicos debidamente matriculados— correspondiente a un nuevo proyecto, o bien a la ampliación de una unidad productiva existente. En este último caso, para que le sea aplicable el beneficio de estabilidad fiscal la ampliación deberá reunir las formas y condiciones que determine la Autoridad de Aplicación.

La presentación se ajustará a las normas establecidas por la Autoridad de Aplicación.

Si la Autoridad de Aplicación considerara que el estudio de factibilidad presenta deficiencias susceptibles de ser subsanadas, y/o faltantes de información o que no se han cumplido debidamente con los requisitos formales exigidos, intimará al solicitante para que regularice la situación en el plazo que ella determine, el que no podrá ser superior a TREINTA (30) días hábiles administrativos contados desde la fecha de notificación de la respectiva intimación. Si no se cumplieran —en tiempo y forma— los requerimientos establecidos en la citada intimación se tendrá, a todos los efectos, el estudio como no presentado, sin defecto que el solicitante pueda hacerlo ulteriormente. En tal caso, el beneficio de estabilidad fiscal se aplicará a partir de la fecha de la nueva presentación, en debida forma.

En el supuesto caso que el estudio de factibilidad no contenga los elementos mínimos necesarios para ser considerado como tal, la Autoridad de Aplicación podrá rechazarlo sin más trámite, sin necesidad de intimar al solicitante, teniendo al mismo como no presentado. El acto por el que adopte tal decisión, dispondrá asimismo el archivo de la presentación, todo lo cual será notificado al presentante.

Los certificados de estabilidad fiscal que emita la Autoridad de Aplicación, serán declarativos de la carga tributaria que le corresponde a cada proyecto alcanzado por el presente beneficio. Tales certificados deberán incluir los impuestos, tasas y contribuciones que sean de aplicación, sus alícuotas o montos y una breve referencia a las bases imponibles y/o a las normas que los rigen en el momento de presentación del estudio de factibilidad.

Aquellas empresas que se encuentren con su proceso productivo en marcha, habiendo obtenido el certificado de estabilidad fiscal pertinente, en la jurisdicción respectiva, y que este no reúna las características enunciadas en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Autoridad de Aplicación proceder a su adecuación conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente.

La carga tributaria total se determinará, en forma separada, para la jurisdicción nacional y para cada una de las jurisdicciones provinciales y municipales, según corresponda.

A los efectos de la determinación de un incremento de la carga tributaria total en una misma jurisdicción, se deberá considerar cada nuevo proyecto o ampliación de una unidad productiva existente —alcanzado por la estabilidad fiscal— y cada ejercicio fiscal vencido en forma independiente.

Por ejercicio fiscal se entenderá, en todos los casos, el que corresponda al respectivo sujeto para el Impuesto a las Ganancias.

A los fines establecidos en el inciso 7 del Artículo 8° de la Ley N° 24.196, serán de aplicación la operatoria y procedimientos indicados en el ANEXO I del presente decreto.

Exclusivamente a efectos de lo normado en los apartados 1.1 y 4.5 del Artículo 8°, de la Ley N° 24.196 (distinción entre impuestos incluidos o no en el beneficio de estabilidad fiscal), se considerará —de manera general— que revisten el carácter de:

a) Impuestos Directos: aquellos en los que, de conformidad con sus normas de creación, la obligación de ingreso está a cargo de la empresa minera careciendo ésta de facultades legales para resarcirse.

b) Impuestos Indirectos: aquellos en los que, de conformidad con sus normas de creación, los sujetos pasivos están facultados para obtener de una tercera persona el reembolso del impuesto que debe ingresarse.

Asimismo, a los fines señalados precedentemente se considerará que, en la medida que se vinculen con emprendimientos amparados por el beneficio de estabilidad fiscal, también revisten el carácter de impuestos directos, aquellos en los que de acuerdo con sus normas de creación —en cualquier circunstancia— pudieran efectivamente incidir en los costos de las empresas mineras verificándose de manera concurrente las siguientes condiciones:

I Que las empresas acogidas al régimen de la Ley N° 24.196, asuman la condición de sujetos pasivos de los mencionados tributos resultando, en consecuencia, responsables directos de su ingreso al fisco; y

II Que los bienes y servicios gravados adquiridos sean utilizados para el desarrollo de sus procesos productivos;

A los efectos previstos en el punto 3 del Artículo 8° de la Ley N° 24.196, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 25.429, se entenderá que a partir de la vigencia de esta última según su Artículo 11, resultarán de aplicación las normas legales vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad. Bajo ninguna circunstancia los beneficiarios de la estabilidad tendrán derecho a solicitar la devolución y/o compensación de tributos que hubieran sido ingresados con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 25.429. Tampoco las modificaciones introducidas por dicha ley al punto 3 del Artículo 8° de la Ley N° 24.196 se aplicarán a las obligaciones tributarias vencidas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 25.429, aunque existiera acogimiento a moratorias o situaciones análogas".

Art. 3° — Sustitúyese el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios por el siguiente:

"ARTÍCULO 12: A los fines de la deducción prevista en el primer párrafo del Artículo 12 de la Ley N° 24.196, se establece que:

a) Los contribuyentes del Impuesto a las Ganancias acogidos al régimen de inversiones instituido por la Ley N° 24.196, podrán efectuar las deducciones de gastos de todas aquellas actividades que abarcan desde la investigación hasta la factibilidad técnico económica. Se aclara que el canon de exploración no se encuentra incluido en el concepto de gasto deducible.

b) Los gastos erogados con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la inscripción no podrán ser objeto de la deducción de que trata este artículo.

c) Las referidas deducciones se deberán realizar en la oportunidad que corresponda según las disposiciones que sobre imputación fija la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997). Cuando se trate de nuevos proyectos o ampliación de los existentes, se podrán efectuar las deducciones en su totalidad en un máximo de CINCO (5) años contados a partir del ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo del nuevo proyecto o ampliación.

A los efectos de esta deducción, los beneficiarios cuya inscripción no haya sido discontinuada, podrán vincular todas las actividades exploratorias desarrolladas en el país que no hayan llegado a resultados positivos, con la o las reservas que entren efectivamente en explotación. De manera que, en el ejercicio fiscal en que se produzca la iniciación del proceso productivo de esas reservas, se realizarán las deducciones que antes no hubiesen sido practicadas, correspondientes a los gastos para las áreas discontinuadas o dadas de baja.

De realizarse prospecciones y exploraciones de nuevas reservas minerales con posterioridad a la puesta en marcha del proceso productivo, las deducciones podrán imputarse de acuerdo con las disposiciones del Impuesto a las Ganancias, o deducirse totalmente en el ejercicio en el que se inicie la explotación de las reservas determinadas.

d) Las personas que desarrollen simultáneamente actividades no comprendidas en las enunciaciones del Artículo 5° de la ley o excluidas por su Artículo 6°, sólo podrán efectuar en el balance impositivo las deducciones a que se refiere este Artículo 12, de las ganancias propias de las actividades alcanzadas por dichas enunciaciones y no

excluidas por el segundo de los artículos citados, de manera que tales deducciones no podrán realizarse sobre utilidades provenientes de actividades no mineras. A tales efectos deberán efectuar registraciones contables en forma separada.

La restricción establecida en el párrafo anterior no es de aplicación a las personas que, con anterioridad a la vigencia del derogado Decreto N° 245 de fecha 3 de agosto de 1995, hubieran cumplido en debida forma con la presentación del estudio de factibilidad que les permitió obtener el beneficio de estabilidad fiscal. Estas personas deberán llevar contabilidad separada para cada actividad, a efectos de facilitar su contralor. En el caso que dichas personas en el futuro agreguen otro tipo de actividades a las que venían desempeñando al momento de obtener la estabilidad fiscal, sólo podrán efectuar en el balance impositivo las deducciones a que se refiere este artículo, de las ganancias provenientes del tipo de actividades que ejercían al obtener el antedicho beneficio y no de las utilidades emergentes de las actividades de otra naturaleza agregadas con ulterioridad.

e) No se aplicará la deducción que trata este artículo cuando, tratándose de sociedades de personas o de empresas unipersonales, se compensaran las deducciones con utilidades obtenidas por socios de sociedades de personas o titulares de explotaciones unipersonales, en actividades no comprendidas en la Ley N° 24.196.

f) En el supuesto de reorganización de sociedades, fondos de comercio y en general de empresas y/o explotaciones de cualquier naturaleza, en los términos del Artículo 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) excepto la transformación de tipos societarios, la parte de los quebrantos impositivos originados en beneficios acordados por el presente régimen no será trasladable a la o las entidades continuadoras.

A esos efectos:

I No serán de aplicación para este régimen las disposiciones del Artículo 78, inciso 1) de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997).

II Se considerará que los quebrantos impositivos se encuentran formados en primer término por los conceptos que se autoriza a deducir en el presente régimen.

Se exceptúa de lo dispuesto en este inciso f) a los casos de aquellas reorganizaciones en las cuales la entidad continuadora, inscripta en el régimen de la

Ley N° 24.196, realizara el proyecto minero iniciado por su antecesora, pero las deducciones impositivas a que se refiere este artículo sólo podrán aplicarse a las ganancias derivadas de ese mismo proyecto minero y no a las provenientes de otras actividades, aunque sean mineras."

Art. 4° — Sustitúyese el Artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios por el siguiente:

"ARTÍCULO 13: A efectos de la aplicación del régimen especial de amortizaciones establecido en el punto 1.2 del Artículo 13 de la Ley N° 24.196, resultarán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Será de aplicación —optativa— para los sujetos inscriptos en el régimen de la citada ley, de conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 2° del presente reglamento. En el supuesto de efectuarse la opción, los sujetos beneficiados deberán declarar anualmente la vida útil asignada a la totalidad de sus bienes amortizables en la forma, plazo y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

b) Alcanza a los bienes importados o de producción nacional, nuevos o usados quedando facultada la Autoridad de Aplicación para controlar las inversiones y/o amortizaciones realizadas, con la colaboración de las autoridades mineras provinciales.

c) Las amortizaciones se deducirán en el balance impositivo del Impuesto a las Ganancias de acuerdo con las normas generales establecidas por la ley del citado gravamen, su decreto reglamentario y normas complementarias o modificatorias, con excepción de los porcentajes anuales de amortización, que, de ejercitarse la opción por el régimen especial, serán los establecidos en el mencionado punto 1.2. del Artículo 13.

d) Los bienes incorporados deberán permanecer en el patrimonio del beneficiario y ser afectados a destinos mineros hasta la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su adquisición — según se define en el inciso h) de la reglamentación del Artículo 21— o el término de su vida útil, si ésta fuera menor. El incumplimiento de esta obligación hará pasible al beneficiario del reintegro al balance impositivo de la amortización especial oportunamente deducida, la que se computará como ganancia

gravada del ejercicio en el cual se realizó la deducción, generándose los correspondientes intereses, accesorios y sanciones previstos en la Ley N° 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias, debiendo efectuarse las rectificaciones de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los respectivos períodos fiscales.

Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar la aplicación a otro destino o la transferencia anticipada de un bien amortizado según el régimen especial.

e) Las empresas que fueran titulares de varias explotaciones mineras podrán afectar alternativamente a las mismas los bienes incorporados alcanzados por el régimen especial de amortizaciones, previa información a la Autoridad de Aplicación.

f) Asimismo, cuando se trate de sociedades controlantes o controladas, en los términos del Artículo 33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, o de empresas que pertenezcan a los mismos dueños, de ser éstos personas físicas, o de sociedades vinculadas por contratos de agrupación de colaboración o de unión transitoria de empresas, en los términos del Capítulo III de la Ley N° 19.550, y siempre que tales sociedades o empresas se hallen inscriptas en el registro correspondiente a este régimen, se podrá afectar los bienes alternativamente a las actividades mineras de cualquiera de ellas, previa información a la Autoridad de Aplicación.

En el supuesto de resultar de aplicación las disposiciones contenidas en el punto 3 del Artículo 13 de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Los sujetos informarán mediante nota en oportunidad de presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, en la forma, plazo y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, el excedente de las amortizaciones del ejercicio fiscal que no resultaren computables por superar, en dicho ejercicio fiscal, el importe de la utilidad imponible generada por el desarrollo de actividades mineras, con anterioridad a la detracción de la pertinente amortización y una vez computados, de corresponder, los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.

b) A la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal el importe acumulado del excedente indicado en el punto precedente, a los efectos de su traslado y posterior cómputo como deducción en el balance impositivo del Impuesto a las Ganancias, deberá asignarse entre todos los bienes amortizables que —a la fecha de cierre del ejercicio que se liquida — no hayan agotado su vida útil considerando las siguientes normas:

I Las amortizaciones efectivamente deducidas en el balance impositivo de un determinado ejercicio fiscal deberán considerarse efectuadas, respecto de los bienes que las generan, respetando el siguiente orden de imputación:

1.1 En primer término: se atribuirán a los bienes de uso cuya vida útil normal expire a la finalización del citado ejercicio fiscal.

1.2 En segundo lugar: a aquellos bienes que, en dicho período fiscal, cuenten con la menor cantidad de períodos de vida útil normal restante, y

1.3 Por último: se imputarán, progresivamente, a los bienes de uso que posean una vida útil normal restante superior a la que le corresponda a los bienes señalados en el punto precedente.

Tales imputaciones procederán hasta la concurrencia con el importe correspondiente a las amortizaciones deducidas en el respectivo ejercicio fiscal.

II El monto diferido total imputable a cada bien, correspondiente a un período fiscal, estará constituido por la diferencia entre el valor de la amortización acelerada que en el respectivo ejercicio corresponda a cada uno de ellos —de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, punto 1.2. de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones— y el monto asignado a cada bien según el punto I.- precedente. Al importe así determinado, de corresponder, deberá:

2.1 Adicionarse el monto de las amortizaciones acumuladas diferidas que, en ejercicios anteriores, hubieran resultado imputables a cada bien.

2.2 Deducirse el importe con el que, en un ejercicio fiscal, cada uno de los bienes deba contribuir a los efectos establecidos en el Artículo 13, punto 3, inciso a) de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones. El monto de la presente deducción no podrá exceder el importe de las amortizaciones acumuladas diferidas que, al inicio del ejercicio que se liquida, corresponda a cada uno de los bienes.

A los fines establecidos en los puntos 2.1 y 2.2 precedentes deberá seguirse la metodología de imputación descripta en los puntos 1.1. a 1.3 del presente inciso b)."

Art. 5° — Incorpórase como Artículo 14 bis del Reglamento de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios el siguiente:

"ARTÍCULO 14 (bis): A los fines de lo establecido en el Artículo 14 (bis) de la Ley N° 24.196 se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Los bienes y servicios serán determinados por resolución de la Autoridad de Aplicación, pudiendo ésta modificarla cuando lo considere conveniente según los requerimientos de las actividades exploratorias.

b) El procedimiento para la devolución del saldo a favor de los responsables, consistirá básicamente en lo siguiente:

I A fin de permitir la fiscalización pertinente por parte de la Autoridad de Aplicación, el interesado deberá informarle, antes del inicio de las actividades exploratorias respecto a las cuales prevé utilizar el beneficio, los siguientes aspectos:

1.1 Descripción de trabajos a realizar con su ubicación

1.2 Cronograma de Ejecución

1.3 Presupuesto estimativo de inversión

1.4 Bienes a adquirir y servicios a contratar

En caso de modificación sustancial de lo programado, deberá informar de ello a la Autoridad de Aplicación.

II Con la solicitud de devolución el interesado deberá acompañar UNA (1) copia autenticada de las facturas correspondientes a los bienes o servicios adquiridos, de los certificados de avance de obra, de los certificados de despacho a plaza si se trata de bienes importados y de los comprobantes de pago del precio y del Impuesto al Valor Agregado.

Sin perjuicio de ello, el interesado deberá poner a disposición los originales de la referida documentación para su intervención por la Autoridad de Aplicación como ésta lo establezca.

La Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en

forma coordinada, evaluarán la documentación y efectuarán las comprobaciones que consideren pertinentes, quedando el interesado obligado a satisfacer los requerimientos que aquéllas le formulen.

La citada Administración Federal establecerá las condiciones y recaudos necesarios para efectivizar la devolución en el plazo que, con carácter general, ella determine.

III Las empresas inscriptas antes de la vigencia de la Ley N° 25.429, podrán usar los beneficios de devolución del Impuesto al Valor Agregado, para aquellos gastos no compensados, efectuados con posterioridad a tal vigencia, en las condiciones que establezcan la Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA. Para las empresas inscriptas con posterioridad, el beneficio será utilizable solamente para los gastos no compensados en que se incurriere desde la fecha de inscripción.

Con relación a la información prevista en el apartado I del presente inciso, se otorgará un plazo de SESENTA (60) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación de este reglamento, para que aquellas empresas que hayan realizado inversiones en exploración entre la fecha de vigencia de la Ley N° 25.429 y la referida publicación, efectúen la presentación respectiva.

c) La Autoridad de Aplicación y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, quedan facultadas para dictar conjuntamente las normas complementarias y aclaratorias que consideren atinentes a la mejor aplicación del presente régimen."

Art. 6° — Sustitúyese el Artículo 21 del Reglamento de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios por el siguiente:

"ARTÍCULO 21: A los fines previstos en el Artículo 21 de la Ley N° 24.196, se establece que:

a) La exención que dicho artículo dispone alcanza a los derechos de importación y a los demás tributos que gravaren la importación o se aplicaren con motivo de ella,

incluida la Tasa de Estadística, con excepción de las restantes tasas retributivas de servicios y del Impuesto al Valor Agregado.

b) La Autoridad de Aplicación confeccionará los listados con las altas y bajas de los insumos susceptibles de importación bajo el régimen de este artículo.

c) Los bienes de capital y equipos especiales a que hace referencia el Artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras podrán ser nuevos o usados. Para el supuesto en que fueren usados, su aptitud para el uso minero deberá estar certificada por entidad pública o privada, nacional o extranjera que sea técnicamente idónea. Las partes, elementos, componentes de dichos bienes, repuestos, accesorios, insumos y demás bienes a que hace referencia el Artículo 21 de la Ley de Inversiones Mineras, deberán ser nuevos, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplicación.

d) Por cada uno de los bienes que se hallaren comprendidos en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras, los importadores deberán solicitar la autorización ante la Autoridad de Aplicación, acompañando una declaración jurada sobre el destino de los bienes. Dicha autorización deberá tener plazo de vencimiento y obrará como parte de la documentación del despacho de importación respectivo que exige la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, para el libramiento de las mercaderías.

e) Los importadores o tenedores de las mercaderías importadas bajo el Régimen de la Ley de Inversiones Mineras, quedarán sujetos a comprobación de la aplicación de las mismas a los procesos de las actividades mineras que establece el Artículo 5° de dicha ley.

La Autoridad de Aplicación establecerá las normas que correspondan para realizar la comprobación de destino de la mercadería importada. La fiscalización podrá ser delegada por aquélla en el organismo con competencia en la actividad minera de la provincia pertinente, sin perjuicio de la intervención que le compete a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, de acuerdo con el Código Aduanero.

f) El plazo durante el cual podrá realizarse la comprobación de destino será:

I Bienes de capital, sus partes y repuestos: hasta la extinción de su vida útil o la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación.

II Insumos: hasta su consumo total, la pérdida de aptitud o la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación.

En caso de incumplimiento del destino minero de cualquiera de los bienes importados bajo el régimen, el infractor estará obligado al pago de los derechos, impuestos, tasas u otros gravámenes que correspondan al momento de detectarse la infracción, calculados sobre el valor puesto en aduana del bien a la fecha de su importación, en la forma y condiciones que establezca la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, sin perjuicio de otras medidas o sanciones que prevé la Ley N° 24.196 y otras normativas que fueren de aplicación.

g) La transferencia de un bien importado, anterior a la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación o de su vida útil, a otra actividad comprendida en el Artículo 5° de la Ley N° 24.196, procederá exclusivamente a un tercero inscripto en dicha ley, por razones justificadas, y previa evaluación y conformidad de la Autoridad de Aplicación. El nuevo titular del bien asumirá las responsabilidades con relación a los beneficios y obligaciones establecidos.

La transferencia a personas no inscriptas o sin conformidad de la Autoridad de Aplicación o la reexportación no autorizada, obligará al pago de los derechos, impuestos y gravámenes, que correspondan al momento de la transferencia y en el caso de reexportación a la fecha de intervención en Aduana, calculados sobre el valor en Aduana del bien a la fecha de su importación, en la forma y condiciones que establezca la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, sin perjuicio de otras medidas o sanciones que prevé la Ley N° 24.196 y otras normativas que fueren de aplicación.

La transferencia o reexportación de un bien ulterior a la extinción de su vida útil o a la conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación, verificada y conformada por la Autoridad de Aplicación, podrá efectuarse libremente, con cualquier

destino, sin que ello haga incurrir en la obligación antes mencionada o en las medidas o sanciones aludidas precedentemente.

h) Respecto a empresas mineras, defínese como ciclo de la actividad que motivó la importación, el período durante el cual deben realizarse un conjunto de operaciones concurrentes a un mismo fin y que transcurre desde la iniciación del proyecto hasta el agotamiento de las reservas de los yacimientos respectivos.

La Autoridad de Aplicación queda facultada a considerar concluido dicho ciclo en los casos de interrupción permanente o previsiblemente prolongada de las actividades, motivada por factores imponderables. También la Autoridad de Aplicación podrá dar por concluido el ciclo en cuestión cuando se trate de bienes que, por sus propias características, son utilizables sólo para uno o más tipos de actividades específicas y ellas se encuentren ya ejecutadas en el marco del emprendimiento de que se trate. En ambos casos la reexportación de los bienes, será sin pago de los gravámenes a la importación ni sanciones y otras medidas. Si la reexportación fuera con destino a países con los cuales el nuestro tuviera en vigor tratados de libre circulación de bienes o servicios sin aplicación de aranceles u otros derechos o gravámenes, la Autoridad de Aplicación podrá rechazar la solicitud si a su juicio considera que la reexportación puede lesionar intereses legítimos en el país de que se trate. La transferencia en el mercado local a no inscriptos podrá ser realizada en las condiciones y con los efectos que establezca la Autoridad de Aplicación.

i) Para el caso particular de los bienes importados por empresas prestatarias de servicios para productores mineros o por organismos públicos del sector, de que trata el segundo párrafo del artículo 2° de este reglamento, se establece que el concepto "conclusión del ciclo de la actividad que motivó su importación" es equiparable y coincidente con la extinción de su vida útil.

No obstante, en el caso de las empresas de servicios, la Autoridad de Aplicación queda facultada a considerar concluido, temporaria o definitivamente, dicho ciclo antes de la extinción de la vida útil de los bienes, en el supuesto de caídas significativas de la demanda de servicios mineros en el país, al solo efecto de autorizar la reexportación, temporaria o definitiva, de los bienes sin pago de gravámenes ni otras medidas o sanciones.

Si la reexportación fuera con destino a países con los cuales el nuestro tuviere en vigor tratados de libre circulación de bienes o servicios sin aplicación de aranceles u otros derechos o gravámenes, la Autoridad de Aplicación podrá rechazar la solicitud si a su juicio considera que la reexportación puede lesionar intereses legítimos en el país de que se trate.

En lo que respecta a organismos públicos, la Autoridad de Aplicación podrá considerar concluido, temporaria o definitivamente dicho ciclo, si a su juicio se produce una disminución de la actividad minera que justifique la desafectación de los bienes de tareas del organismo vinculadas con el sector minero, en cuyo caso la Autoridad de Aplicación podrá autorizar tanto la reexportación como el uso en el país, por el mismo organismo con otros destinos.

j) Las empresas que fueren titulares de varias explotaciones mineras podrán afectar alternativamente a las mismas los bienes importados bajo este régimen, previa información a la Autoridad de Aplicación. Asimismo, cuando se trate de sociedades controlantes o controladas en los términos del Artículo 33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, o de empresas que pertenezcan a los mismos dueños, de ser éstos personas físicas, o de sociedades vinculadas por contratos de Agrupación de Colaboración o de Unión Transitoria de Empresas, en los términos del Capítulo III de la Ley N° 19.550, y siempre que tales sociedades o empresas se hallen inscriptas en el registro correspondiente a este régimen, se podrá afectar los bienes alternativamente a las actividades mineras de cualquiera de ellas, previa información bajo declaración jurada a la Autoridad de Aplicación.

k) En caso de detectarse transgresiones o infracciones con respecto al Capítulo V de la Ley de Inversiones Mineras y como acción complementaria de lo establecido en el Capítulo IX, la misma Autoridad de Aplicación dará cuenta de los hechos en forma inmediata, por los medios que estimare conveniente, a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

l) Lo expuesto en el artículo 18 del presente reglamento se aplica también en relación al tema objeto de este Capítulo.

m) La Autoridad de Aplicación establecerá, mediante resolución complementaria, las condiciones que deberán cumplir los prestadores de servicios para productores mineros, para poder inscribirse en el Registro de la Ley y utilizar el beneficio de este artículo.

A partir de su inscripción, los prestadores de servicios deberán facturar anualmente, en concepto de servicios mineros, un porcentaje en relación al total de su facturación, no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación. Al vencimiento de cada año calendario el prestador de servicios mineros deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por Contador Público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumple, el prestador de servicios mineros quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso del beneficio de este artículo, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación.

Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia de este artículo, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios mineros contemplados en el régimen, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria. El incumplimiento de estas disposiciones implicará las infracciones y sanciones pertinentes, previstas en los Artículos 28 y 29 de la ley, además del pago de los derechos, impuestos y gravámenes en caso de transferencia o uso en otras actividades, tal como se estipula en el inciso e).

Las disposiciones de este inciso y de la resolución que dicte la Autoridad de Aplicación regirán también para los casos de incumplimiento del porcentaje de la facturación anual hasta ahora vigente, ocurridos antes de la sanción de este decreto, respecto a los cuales la Autoridad de Aplicación no haya dispuesto ya la baja del inscripto. En esos casos, y a efectos de la procedencia de la suspensión se aplicará también, el nuevo porcentaje que fije la resolución complementaria, si fuera más favorable al inscripto en relación al hasta ahora vigente.

A los efectos de este artículo, la Autoridad de Aplicación fijará parámetros para definir la vida útil de aquellos bienes que estime susceptibles de tal generalización. Sin

defecto de ello, la extinción anticipada al cumplimiento de los parámetros será reconocible por la Autoridad de Aplicación si fuera acreditada y/o certificada a satisfacción de los organismos técnicos dependientes de la misma."

Art. 7° — Derógase el Artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 24.196, de Inversiones Mineras, aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios.

Art. 8° — Sustitúyese el Artículo 26 del Reglamento de la Ley N° 24.196, de Inversiones Mineras, aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios, por el siguiente:

"ARTÍCULO 26: La Autoridad de Aplicación realizará inspecciones, por sus medios o por quien ella indique, tendientes a constatar el cumplimiento de las condiciones que posibilitaron su encuadramiento en el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. En el caso de detectar incumplimientos, infracciones o hechos que autoricen a presumirlos, dispondrá la instrucción de los correspondientes sumarios, cursando asimismo aviso a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y/o a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA."

Art. 9° — Sustitúyense los Artículos 28 y 29 del Reglamento de la Ley N° 24.196, de Inversiones Mineras, aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios, por el siguiente: "ARTÍCULO 28: En relación a los incumplimientos establecidos en el Artículo 28 de la Ley N° 24.196, resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:

La Autoridad de Aplicación podrá prorrogar o renovar el plazo fijado en la intimación a la que se refiere el inciso b) del Artículo 28 de la ley.

A todos los efectos establecidos en el inciso e) del Artículo 28 de la Ley N° 24.196, se entenderá que se produce la desafectación de los bienes cuando éstos se destinen a cualquier uso, permanente o transitorio, en actividades ajenas a las mineras comprendidas por la Ley N° 24.196, su reglamento y las resoluciones complementarias o aclaratorias dictadas por la Autoridad de Aplicación. Esta última podrá considerar, a

su exclusivo juicio, que un uso no minero, atribuible a necesidades de índole personal o familiar del beneficiario, que sea puramente ocasional, no constituye desafectación".

Art. 10. — Incorpórase como Artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 24.196, de Inversiones Mineras, aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios, el siguiente: "ARTÍCULO 29: Sin reglamentar".

Art. 11. — Sustitúyese el Artículo 30 del Reglamento de la Ley N° 24.196 aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios por el siguiente: "ARTÍCULO 30: Los gastos en inversiones que pueden deducirse por aplicación del Artículo 9° de la Ley N° 22.095, son exclusivamente los erogados con anterioridad a su derogación, salvo el caso que, antes de este acto, se hubiere producido la habilitación de los bienes para su normal funcionamiento, en cuyo caso los beneficiarios podrán efectuar la deducción de la totalidad del saldo impago en el ejercicio fiscal durante el cual tuvo lugar la habilitación. A efectos de lo previsto en el párrafo segundo del Artículo 30 de la Ley N° 24.196, se establece que para la tramitación y resolución de todas las cuestiones emergentes de la Ley N° 22.095, será Autoridad de Aplicación, la de la ley mencionada en primer término. Continuarán siendo aplicables a tales cuestiones las correspondientes disposiciones de la Ley N° 22.095 y de su Decreto Reglamentario N° 554 del 24 de marzo de 1981 y demás normas complementarias.

La Autoridad de Aplicación, a pedido de parte, procederá a revisar las resoluciones dictadas durante la vigencia de la Ley N° 22.095 con el objeto de dejar sin efecto las exigencias y/o condicionamientos que hubieren sido incorporados a aquéllas y no existieran como requisitos obligatorios en los términos de la citada ley o de su reglamentación. A criterio de la Autoridad de Aplicación, dichas exigencias y/o condicionamientos podrán dejarse sin efecto desde su origen, ponderando las circunstancias existentes en su momento y privilegiando las fuentes de trabajo."

Art. 12. — Incorpórase al Reglamento de la Ley N° 24.196 aprobado por Decreto Reglamentario N° 2686/93 y sus modificatorios, un Capítulo que se denominará: "CAPITULO X: DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS" en el que se incluirán los dos siguientes artículos:

"ARTÍCULO 31: A los efectos establecidos en el punto 2. del artículo incorporado por el "Capítulo X: Disposiciones Transitorias" de la Ley N° 24.196 y sus

modificaciones, establécese que respecto de los bienes adquiridos a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 25.429, se podrá optar por el método de amortización previsto en el punto 1.1. del Artículo 13 de la Ley de Inversiones Mineras."

"ARTÍCULO 32: El traslado de los quebrantos impositivos acumulados, en la parte correspondiente a la deducción de las amortizaciones aceleradas —de conformidad a lo establecido en el artículo incorporado por el Capítulo X de la Ley N° 24.196, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 25.429— se realizará:

a) En la medida que, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 25.429, no hubiera caducado la posibilidad de su cómputo por aplicación de las disposiciones del artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997) y sus modificaciones.

b) Considerando la totalidad de los bienes amortizables, existentes al cierre del ejercicio inmediato anterior al de la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 25.429 y en la medida que, a dicha fecha de cierre, no se hubieran agotado sus respectivas vidas útiles.

A los fines indicados precedentemente el quebranto susceptible de ser trasladado para su posterior cómputo en el balance impositivo del Impuesto a las Ganancias de los años siguientes, deberá distribuirse imputándolo a los bienes amortizables antes citados considerando las siguientes normas:

I Se entenderá que el total del quebranto acumulado existente al cierre del ejercicio fiscal indicado en el punto b) del párrafo precedente, —que cumpla con la condición expuesta en el punto a) del párrafo anterior— se compone, en primer término, por las amortizaciones de bienes de uso que fueron deducidas en los balances impositivos correspondientes a los ejercicios fiscales inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley.

II A los efectos de la determinación del nuevo plazo de prescripción el importe del quebranto acumulado precedentemente citado deberá asignarse, en primer término, al valor de los bienes de uso que al cierre del ejercicio citado en el precedente punto I.-, cuenten con la mayor cantidad de periodos de vida útil normal restante y continuando, con posterioridad, sucesivamente y de manera regresiva con los bienes de uso que posean una menor cantidad de periodos de vida útil remanente. El monto a asignar conforme a la metodología señalada, no podrá superar el importe correspondiente a la

sumatoria de los valores de origen de los bienes de uso, cuya vida útil expira a la finalización de un mismo período fiscal.

III El importe citado en el precedente punto II, constituirá el monto susceptible de ser compensado con utilidades impositivas que se generen hasta los CINCO (5) ejercicios fiscales posteriores al período fiscal en que se produzca la expiración de la vida útil de cada uno de los respectivos bienes.

IV Los contribuyentes deberán informar en la forma, plazo y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, las nuevas fechas límites hasta las cuales, de conformidad con la metodología señalada precedentemente, podrán utilizar los quebrantos impositivos acumulados a los que se refiere el artículo incorporado por el Capítulo X de la Ley N° 24.196, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 25.429."

Art. 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna. — Aníbal D. Fernández.

ANEXO I

DETERMINACION DE LA CARGA TRIBUTARIA:

Metodología

A) APLICACION

ARTÍCULO 1° — A los fines establecidos en el Artículo 8° de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, el sujeto beneficiario de la estabilidad fiscal deberá cumplir, en jurisdicción nacional, con sus obligaciones tributarias y arancelarias aplicando las disposiciones normativas vigentes al momento de la obtención del beneficio de estabilidad fiscal, con los alcances establecidos en el presente anexo.

En el supuesto que el beneficiario considerara que le resulta más conveniente aplicar las disposiciones vigentes en cada ejercicio fiscal, podrá ejercer dicha opción en cada uno de ellos —de manera excluyente. La SUBSECRETARIA DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, emitirá una constancia de dicha opción aplicable a cada ejercicio fiscal, remitiéndolas al sujeto

beneficiario, a la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA y a la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, dependientes de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

B) NORMATIVA APLICABLE PARA CUANDO SE OPTE POR LAS DISPOSICIONES VIGENTES, EN CADA EJERCICIO FISCAL.

ARTÍCULO 2° — Cuando los sujetos beneficiarios elijan la opción indicada en el segundo párrafo del artículo anterior, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Deberán manifestar su voluntad en tal sentido —hasta la finalización del tercer mes calendario siguiente desde el inicio de cada período fiscal o al de la publicación en el Boletín Oficial del presente decreto, según corresponda—. Para ello deberán efectuar una presentación ante la SUBSECRETARIA DE MINERIA, la que deberá ser suscripta por el representante legal o apoderado de la empresa y su firma certificada en forma notarial, bancaria o por autoridad policial.

b) No ejercida la opción en los términos señalados en el precedente apartado a), automáticamente serán de aplicación, para ese ejercicio fiscal, las disposiciones establecidas en el primer párrafo del Artículo 1°.

C) NORMATIVA QUE REGIRA CUANDO SE APLIQUEN LAS DISPOSICIONES VIGENTES AL MOMENTO DE LA OBTENCION DEL BENEFICIO DE ESTABILIDAD FISCAL

ARTÍCULO 3° — Cuando corresponda al beneficiario el cumplimiento de las obligaciones tributarias y arancelarias aplicando las disposiciones normativas vigentes al momento de la obtención del beneficio de estabilidad fiscal, resultarán de aplicación las siguientes disposiciones:

a) Todos los sujetos o entidades —públicas o privadas— vinculadas con la liquidación y percepción de los tributos y/o aranceles, aplicarán las normas tributarias y arancelarias correspondientes con la sola presentación por parte del beneficiario, de una copia autenticada del certificado de estabilidad fiscal oportunamente emitido por la Autoridad de Aplicación. Los titulares de emprendimientos que gocen del beneficio de estabilidad fiscal quedarán excluidos de los regímenes de retenciones en el Impuesto a las Ganancias (por parte de sujetos o entidades privadas) respecto de las operaciones correspondientes a tales emprendimientos, debiendo en su reemplazo efectuar el

ingreso de las sumas que correspondan de acuerdo con el procedimiento que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA.

b) En el caso de tributos y/o aranceles que, estando vigentes al momento de la obtención de la estabilidad fiscal y fueren ulteriormente derogados, no corresponderá su pago a partir de tal derogación. No obstante, si en sustitución de los derogados, se sancionaran otros tributos y/o aranceles, corresponderá el pago de estos últimos pero sin exceder los montos que se hubieren debido abonar de no producirse la derogación de los primeros.

c) En el supuesto de reducciones en las alícuotas o modificaciones en la base imponible que signifiquen una reducción de la carga tributaria y/o arancelaria durante el ejercicio fiscal, los beneficiarios de la estabilidad fiscal podrán beneficiarse de las mismas aplicando el régimen vigente durante el ejercicio en curso.

D) NORMATIVA APLICABLE A LA FINALIZACION DE CADA PERIODO FISCAL

ARTÍCULO 4° — Con la finalidad de determinar la magnitud de la carga tributaria y arancelaria efectivamente soportada y asegurar el efectivo goce del beneficio de la estabilidad fiscal, serán de aplicación las siguientes normas:

a) Los beneficiarios deberán informar en carácter de declaración jurada a la Autoridad de Aplicación sobre la utilización de los beneficios de la estabilidad fiscal durante el ejercicio.

Dicha información deberá ser presentada hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias.

b) En el supuesto que el beneficiario, durante el ejercicio fiscal, se hubiera beneficiado con alguno de los supuestos contemplados en los incisos b) y c) del artículo 3° del presente anexo deberá determinar a la fecha de finalización de cada ejercicio fiscal, en valores absolutos, la diferencia existente entre los importes efectivamente tributados y el menor de los importes resultantes de comparar entre: i) la aplicación de la totalidad de las normas aplicables de acuerdo con la Estabilidad Fiscal del beneficiario —es decir, las correspondientes a la fecha de obtención de ese beneficio— y ii) la aplicación de la totalidad de las normas vigentes durante el ejercicio fiscal de que se trate —es decir, las normas vigentes en ese ejercicio fiscal que se hubiesen aplicado

de no haber optado por la aplicación de las disposiciones vigentes al momento de la obtención del beneficio de la estabilidad fiscal—. En tal caso deberán presentar dicha información —con carácter de Declaración Jurada — hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, en la forma y condiciones que ella determine, remitiendo simultáneamente copia a la Autoridad de Aplicación. Los sujetos beneficiarios individualizarán las normas tributarias y arancelarias aplicadas.

c) El sujeto que hubiera soportado en un ejercicio fiscal una carga tributaria y/o arancelaria total superior a la que hubiera correspondido, atendiendo a su calidad de sujeto beneficiario de la estabilidad fiscal, de conformidad con las disposiciones establecidas por la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, podrá solicitar la compensación o devolución de las sumas que hubiere abonado de más, en la forma, plazo y condiciones que establezca la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, la que, asimismo, establecerá la forma, plazo y condiciones para el ingreso al Fisco de lo que se hubiere tributado de menos por aplicación de estas normas, pudiendo además determinar los intereses compensatorios que correspondieren en uno u otro caso. Para la determinación de la carga tributaria no se considerarán los gravámenes que constituyan pagos a cuenta de otros tributos, en la medida de su efectiva posibilidad de imputación, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia.

E) OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 5° — A todos los fines señalados en el presente Anexo, resultarán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:

Para facilitar las tareas de fiscalización, los beneficiarios deberán efectuar sus registraciones contables de modo tal que pueda identificarse — en forma separada— a las actividades comprendidas por la estabilidad fiscal de las no alcanzadas y adoptar sistemas de registros que permitan una verificación cierta, así como cumplir toda otra forma, recaudo o condiciones establecidas con relación a este beneficio por las normas pertinentes.

En caso que se produjera un incumplimiento de la beneficiaria respecto de las obligaciones previstas en el presente anexo, serán de aplicación las pertinentes disposiciones de los Artículos 28 y 29 de la Ley N° 24.196 y de su reglamento, sin defecto de otras responsabilidades y sanciones que resulten de aplicación.

La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA, deberá informar de los incumplimientos a esta Autoridad de Aplicación, a los efectos precedentemente indicados.

Sin defecto de ello, si el incumplimiento hubiere acarreado la falta de pago de los importes adeudados, se aplicarán los intereses, sanciones y demás medidas correspondientes a tal situación, según las normas vigentes.

ARTÍCULO 6° — Facúltase a la Autoridad de Aplicación a dictar excepciones puntuales y efectuar las modificaciones que considere convenientes en la operatoria establecida en el presente Anexo, las que se aplicarán a todos los beneficiarios independientemente de la época de la adquisición de la estabilidad fiscal.

ARTÍCULO 7° — Las jurisdicciones adheridas al Régimen de la Ley N° 24.196, deberán dictar reglamentaciones similares a las contenidas en el presente Anexo, que permitan establecer metodologías claras para asegurar el beneficio de estabilidad fiscal y para determinar si se produjeron modificaciones en la carga tributaria correspondiente a esa jurisdicción, en atención a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad. En el caso de que dichas reglamentaciones no aseguren en forma correcta dicho beneficio, deberá estarse a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley N° 24.196. La Autoridad de Aplicación, ante el reclamo del beneficiario, determinará la alteración a la estabilidad fiscal en virtud de lo establecido en el presente Anexo.

IMPUESTOS

Ley 24.402

Instituyese Régimen de Financiamiento para el pago del Impuesto al Valor Agregado. Beneficiarios

Sancionada: Noviembre 9 de 1994.

Promulgada de hecho: Diciembre 7 de 1994

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ARTÍCULO 1º - Institúyese un régimen de financiamiento, destinado al pago del impuesto al valor agregado que grave:

a) Las operaciones de compra o importación definitiva de bienes de capital nuevos.

b) Las inversiones realizadas en obras de infraestructura física para la actividad minera, de conformidad a las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 2º - Son beneficiarios de este régimen, los adquirentes o importadores de los referidos bienes, en tanto los mismos sean destinados al proceso productivo orientado hacia la venta en el mercado externo, y los sujetos acogidos al régimen de la Ley Nº 24.196 que realicen inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la producción de bienes destinados a la exportación.

ARTÍCULO 3º - A los fines previstos en el artículo anterior, se entenderá que el proceso productivo se encuentra orientado hacia la venta en el mercado externo conforme a los requisitos y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas hará decaer la franquicia otorgada, en cuyo caso los beneficiarios deberán reintegrar al Fisco, los intereses que éste hubiera tomado a su cargo, en la forma y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación, la que podrá asimismo aplicar una sanción graduable entre

el CINCUENTA POR CIENTO (50%) y el CIENTO POR CIENTO (100 %) de los referidos intereses.

ARTÍCULO 4º - El presente régimen se implementará a través de una línea de créditos, que las entidades financieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones podrán otorgar a los sujetos mencionados en el artículo 2º, destinados al pago del impuesto indicado en el artículo 1º.

ARTÍCULO 5º - El Estado Nacional compensará a las entidades financieras por los créditos previstos precedentemente, con una retribución que no podrá superar el equivalente al doce por ciento (12 %) de tasa efectiva anual aplicable sobre los mismos.

ARTÍCULO 6º - La retribución a la que se refiere el artículo anterior se efectivizará, permitiendo que las entidades financieras que adhieran al régimen, computen como pago a cuenta en sus liquidaciones del impuesto al valor agregado, el importe de la retribución dispuesta en el artículo anterior que mensualmente corresponda por los créditos otorgados.

La retribución aludida estará exenta del impuesto al valor agregado y no originará el prorrateo del crédito fiscal a que hace mención el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

ARTÍCULO 7º - Quedan comprendidos en las disposiciones del presente régimen las compras o importaciones definitivas de los bienes que se detallen en los listados que a tal efecto confeccionará la Autoridad de Aplicación, y las inversiones en obras civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria de operación de procesos productivos, en la medida en que cumplimenten lo dispuesto en el Artículo 2º efectuadas por sujetos acogidos al régimen de la Ley N° 24.196.

ARTÍCULO 8º - Los créditos amparados por el presente régimen deberán cancelarse en los plazos que se establezcan en los listados a que se refiere el artículo anterior, según lo disponga la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las características de las inversiones y los distintos tipos de bienes que resulten comprendidos, los que en ningún caso podrán superar los términos que al respecto fije el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 9º - Las entidades financieras intervinientes exigirán a los beneficiarios de los créditos la constitución de las garantías que estimen procedentes a efectos de preservar su cobrabilidad.

ARTÍCULO 10 - Cuando las inversiones realizadas en el marco del régimen dispuesto, den lugar al reintegro previsto en el artículo 41 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la Ley Nº 23.349 y sus modificaciones, el mismo será afectado al crédito otorgado mediante su imputación al saldo pendiente de cancelación, mediante el procedimiento y en la forma y condiciones que al respecto establezca la Dirección General Impositiva, quien así mismo reglamentará la instrumentación de la devolución anticipada del impuesto al valor agregado, en un plazo no superior a sesenta (60) días posteriores a la realización de la inversión, compra o importación de bienes de capital nuevos, una vez presentada la solicitud de devolución, siempre y cuando se trate de nuevos proyectos mineros incluidos en el régimen de la Ley Nº 24.196.

ARTÍCULO 11 - La Autoridad de Aplicación de la presente ley será fijada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada para interpretar y determinar en cada caso sus alcances y para dictar las disposiciones pertinentes.

ARTÍCULO 12 - Facúltase al Poder Ejecutivo para modificar la graduación de la sanción prevista en el segundo párrafo del artículo 3 y el porcentaje de la tasa efectiva anual establecida en el artículo 5º.

ARTÍCULO 13 - Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para las inversiones que se realicen entre dicha fecha y la que fije el Poder Ejecutivo como plazo de finalización del régimen.

ARTÍCULO 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. - ALBERTO R. PIERRI. - EDUARDO MENEM. - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo- Edgardo Piuizzi

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

DEVOLUCION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - Resolución Conjunta N° 1641 y 11/2004

Administración Federal de Ingresos Públicos y Secretaría de Minería
VISTO el Expediente N° S01:0140181/2003 del Registro de la SECRETARIA DE MINERIA y la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, estableció un régimen especial de devolución del impuesto al valor agregado al que podrán acceder las empresas incorporadas al régimen de inversiones para la actividad minera.

Que el citado régimen admite la devolución de los créditos fiscales originados en las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios, que determine la Autoridad de Aplicación de la Ley de Inversiones Mineras.

Que la citada devolución procederá luego de transcurridos DOCE (12) períodos fiscales, contados a partir de aquél en que resultó procedente su cómputo, en la medida que los importes respectivos integren el saldo a favor del responsable a que se refiere el primer párrafo del artículo 24 de la ley de impuesto al valor agregado.

Que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, es la encargada de determinar las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios, que realicen las empresas inscritas en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras, por las que se podrá solicitar la devolución del impuesto al valor agregado.

Que el artículo 14 bis del Decreto Reglamentario N° 2.686 y sus modificaciones, de fecha 28 de diciembre de 1993, incorporado por el artículo 5° del Decreto N° 1089 de fecha 7 de mayo de 2003, faculta a la Autoridad de Aplicación de la Ley de Inversiones Mineras y a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, para dictar conjuntamente las normas complementarias y aclaratorias que se consideren convenientes para la aplicación del régimen especial.

Que resulta necesario disponer las formalidades, plazos y otros requisitos que se deberán observar para solicitar el beneficio.

Que para facilitar la lectura e interpretación de las normas, se utilizan notas aclaratorias y citas de textos legales, con números de referencia, explicitados en el Anexo I.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación, de Programas y Normas de Recaudación, de Programas y Normas de Fiscalización, de Asesoría Legal, de Asesoría Técnica, de Administración, de Informática de Fiscalización y de Información Estratégica para Fiscalización de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, así como la SECRETARIA DE MINERIA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo establecido por el Decreto N° 27 de fecha 27 de mayo de 2003.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 29 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el artículo 7° del Decreto N° 618, de fecha 10 de julio de 1997, su modificatorio y sus complementarios, los artículos 14 bis y 24 de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones y por el artículo 14 bis, inciso c) del Decreto N° 2.686/93 y sus modificaciones.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Y EL SECRETARIO DE MINERIA

RESUELVEN:

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° — Los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado que realicen tareas de exploración minera, a efectos de solicitar la devolución de los créditos fiscales originados en las importaciones y adquisiciones de determinados bienes y servicios (1.1.), deberán estar inscritos en el Registro de la Ley de Inversiones Mineras —habilitado en la DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la

SECRETARIA DE MINERIA—, y observar las disposiciones que se establecen en la presente.

En ningún caso procederá la devolución de los mencionados créditos, cuando los mismos hubieran sido absorbidos (1.2.), se hubiere hecho uso de algunos de los regímenes establecidos en el artículo incorporado a continuación del artículo 24 (1.3.), en el artículo 28, inciso e), en el artículo 43 de la ley del gravamen, hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la Ley N° 24.402 o hubieran sido utilizados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto N° 1384/01 y sus modificaciones.

CAPITULO II - REQUISITOS Y CONDICIONES

Artículo 2° — La solicitud de devolución podrá interponerse siempre que:

a) Respecto al área o las áreas en la que se realizaron los trabajos, el peticionante acredite ante la DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA, lo siguiente:

1. Haber cumplido con las obligaciones establecidas en el inciso b) del artículo 14 bis del Decreto N° 2.686/93 y sus modificaciones.

2. Ser titular de derechos mineros transferidos o ser titular de:

2.1. Permisos exclusivos de exploración vigentes, otorgados por la autoridad minera competente (artículo 25 y concordantes del Código de Minería), o de

2.2. concesiones de explotación (artículos 44, 186, 187 y concordantes del Código de Minería), si se trata de minas de primera o segunda categoría. De tratarse de minas de tercera categoría, el peticionante deberá acreditar la propiedad del suelo en el que se encuentren o de los derechos mineros transmitidos por el propietario.

En ambos casos, de haberse producido la transmisión por cualquier título legalmente admisible de los derechos mineros, el beneficiario podrá solicitar la devolución de los créditos fiscales generados a partir de la fecha en que opere la transferencia. El transmitente, por su parte, podrá solicitar la devolución de los créditos fiscales que se hubieran originado con anterioridad a dicho momento. Toda transmisión de los derechos mineros deberá acreditarse fehacientemente ante la referida Dirección Nacional.

A los efectos aludidos en el párrafo anterior, la autoridad minera provincial competente deberá emitir una certificación de la titularidad de los derechos mineros — con indicación del período correspondiente a cada titular—, que describa la situación física, jurídica y demás antecedentes de los mismos.

La solicitud de devolución comprenderá también al impuesto al valor agregado de las importaciones y adquisiciones realizadas entre el momento de la solicitud de dichos derechos a la autoridad minera y el de su concesión, siempre que la misma haya sido previamente otorgada (2.1.).

3. La aprobación del Informe de Impacto Ambiental (artículos 252, 253 y concordantes del Código de Minería), otorgada con carácter previo a las actividades exploratorias alcanzadas por el régimen, salvo que configuren meras tareas de prospección para las cuales no sea necesaria la presentación de dicho informe, según las reglamentaciones o disposiciones vigentes en la provincia respectiva.

b) Los bienes y servicios por los que se solicite el beneficio sean necesarios para la realización de las actividades mineras indicadas en el inciso 2), del artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones (2.2.), en relación con las áreas o concesiones y/o derechos a que se refiere el precedente inciso a).

c) A la fecha de la presentación en la citada Dirección Nacional, el responsable hubiera:

1. Detraído de su saldo a favor técnico (2.3.), el monto por el cual solicita devolución, en la declaración jurada del impuesto al valor agregado correspondiente al período fiscal inmediato anterior a dicha fecha.

2. Presentado las declaraciones juradas del referido impuesto, correspondientes a los períodos fiscales transcurridos desde aquel en que resultó procedente el cómputo del crédito fiscal (2.4.) hasta el inmediato anterior a la fecha de solicitud, ambos inclusive.

Artículo 3° — Los contribuyentes podrán efectuar hasta un máximo de DOS (2) presentaciones originales de solicitud de devolución por cada año calendario, debiendo incluir en las mismas la totalidad de los créditos fiscales por los que tengan derecho a solicitar el reintegro, de conformidad con las normas legales y reglamentarias vigentes.

Las solicitudes de devolución podrán presentarse a partir del primer día del segundo mes calendario, inclusive, inmediato siguiente a aquel en que finalice el lapso de DOCE (12) períodos fiscales, dispuesto por el artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, y de corresponder, con posterioridad a la presentación prevista en el artículo 26.

CAPITULO III - PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION. INFORMACION A SUMINISTRAR

Artículo 4° — El trámite del pedido de devolución se iniciará mediante la presentación de una nota con carácter de declaración jurada, ante la DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA, que deberá estar acompañada de los siguientes elementos:

a) Una copia de la nota presentada ante la citada Secretaría, por medio de la cual oportunamente se informaron y detallaron todos los conceptos y elementos a que alude el Apartado I del inciso b), del artículo 14 bis del Reglamento de la Ley de Inversiones Mineras, incorporado por el Decreto N° 1089/03.

b) Una nota dirigida a la citada Dirección Nacional, en la que se manifieste que toda la información presentada es exacta y la documentación acompañada, en originales o copias, es auténtica, y se denuncie el domicilio legal a los efectos de todas las notificaciones o comunicaciones de la DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA, y el domicilio fiscal a los mismos efectos denunciado ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION (4.1.).

Asimismo en la citada nota deberá declararse que:

1. Los importes cuya devolución se solicita corresponden a créditos fiscales en el impuesto al valor agregado originados en importaciones y/o adquisiciones de bienes y/o servicios que reúnen las exigencias establecidas por el artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, su reglamentación y las normas aclaratorias o complementarias.

2. No existen impedimentos para lograr la devolución que se solicita, atendiendo a las circunstancias señaladas en el último párrafo del artículo 1°.

3. Los pagos efectuados por las operaciones que contienen crédito fiscal sujeto a pedido de devolución, se ajustan a las disposiciones de las Resoluciones Generales N° 151, su modificatoria y su complementaria o N° 1547, según corresponda.

La mencionada nota deberá ser presentada con carácter de declaración jurada y estar suscrita por el titular, el representante legal del peticionante o apoderado con facultades suficientes para ello. El firmante deberá suscribir todas las fojas de la presentación. La autenticidad de tales firmas así como las facultades de los firmantes para representar al beneficiario, deben estar certificadas por escribano público de registro, con la respectiva intervención del Colegio de Escribanos correspondiente.

c) Copia de la Declaración de Impacto Ambiental expedida por la autoridad minera provincial, para cada una de las etapas de cada proyecto.

d) La certificación de titularidad de los derechos mineros emitida por la autoridad minera provincial, referida en el artículo 2° inciso a).

e) La información detallada en los Anexos II, III y IV de la presente y copia autenticada de la documentación a que se refiere el Apartado II del inciso b), del artículo 14 bis del Reglamento de la Ley de Inversiones Mineras, o documentación equivalente, separada por cada proyecto u obra realizada, indicando localidad, departamento y provincia, ordenados por fecha de factura o certificado de importación. Asimismo el responsable deberá aportar copia autenticada de toda otra documentación que permita corroborar la veracidad de las erogaciones realizadas para la adquisición de los bienes y servicios comprendidos en el beneficio y la exactitud de los importes a devolver (entre otras: copia de los contratos, órdenes de trabajo o documentación equivalente correspondiente a la contratación de los servicios por los que pide el beneficio, notas de crédito por bonificaciones, descuentos, quitas y similares que disminuyan el importe de dichas compras y/o servicios, recibos y/o documentos equivalentes, que acrediten los respectivos pagos y la cancelación total del impuesto al valor agregado).

Las copias de la documentación a que se refiere el presente inciso deberán estar autenticadas por escribano público y su firma certificada por el Colegio de Escribanos correspondiente.

En el caso de realizarse cancelaciones mediante medios electrónicos, se dejará constancia de dicho procedimiento en las planillas de detalle de comprobantes del Anexo III, circunstancia que, respecto de la verificación y cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre medios de pago autorizados, deberá constar en la certificación contable, cuyo modelo se consigna en el Anexo V.

f) Un informe extendido por contador público independiente acerca de la:

1. Razonabilidad y legitimidad del monto a devolver (entre otros conceptos: procedencia, imputación, veracidad, importe, registración, etc.).

2. Existencia del bien de capital —integrando el patrimonio del solicitante— al momento de la solicitud (4.2.). Cuando al referido momento, el bien no integre el patrimonio del responsable por caso fortuito o de fuerza mayor, en el informe se dejará constancia de dicha situación y se adjuntará copia de la documentación que la acredite fehacientemente.

3. Existencia del bien de capital al momento de la solicitud para el caso de bienes sujetos a contratos de alquiler o "leasing" y veracidad de que la prestación de dichos bienes se realiza de acuerdo a los contratos obrantes.

4. Procedencia de la devolución en razón de no verificarse a la fecha de la certificación las circunstancias apuntadas en el último párrafo del artículo 1º y en el artículo 18, y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º inciso c), en el artículo 4º inciso b) puntos 1., 2. y 3., y en los artículos 16 y 17.

Dicho informe deberá constar en una certificación contable que, como mínimo, contenga la información requerida en el modelo que se consigna en el Anexo V.

Las firmas del profesional deberán estar certificadas por el Consejo Profesional o entidad en la que se encuentre matriculado.

g) Los reportes generados por el programa aplicativo, a que se refiere el artículo 7º, que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, pondrá a disposición del contribuyente.

Artículo 5º — La DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA requerirá, dentro de los VEINTE (20) días hábiles

administrativos inmediatos siguientes al de la presentación, que se subsanen las omisiones o deficiencias observadas.

El incumplimiento al requerimiento formulado, dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos inmediatos siguientes a la fecha de notificación del citado requerimiento, dará lugar sin más trámite al archivo de las actuaciones.

Artículo 6° — La DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA, de corresponder, remitirá el expediente —conteniendo toda la información presentada—, a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Asimismo, la citada Dirección Nacional dejará constancia en el expediente del monto susceptible de devolución, mediante la emisión de un informe favorable donde manifieste la conformidad de la documentación presentada y de la información en ella consignada, tanto en sus aspectos formales como materiales que resulten de su competencia, sin que ello obste a la verificación que debe realizar la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Artículo 7° — Recibido el expediente citado en el artículo anterior, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, notificará al contribuyente que se encuentra habilitado para la prosecución del trámite, en el domicilio fiscal declarado conforme a las previsiones del artículo 4° inciso b).

A los efectos indicados en el párrafo anterior, el contribuyente deberá presentar ante la dependencia que se encuentre inscrito de la citada Administración Federal, los siguientes elementos:

a) Formulario de declaración jurada en el que constará el importe total por el cual se solicita devolución, así como el mes y el año de la declaración jurada en la que se encuentra exteriorizado.

b) Soporte magnético que contendrá información relativa a las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios, que generaron el derecho a la devolución —en disquete de TRES PULGADAS Y MEDIA (3½») HD—, rotulado con indicación de

apellido y nombres, denominación o razón social, Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), acompañado por el formulario de declaración jurada, referido en el inciso a), ambos generados mediante el programa aplicativo aprobado por esta Administración Federal.

El mencionado programa aplicativo podrá ser transferido de la página "web" de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION (<http://www.afip.gov.ar>).

Cuando se efectúe la entrega del mencionado soporte, se procederá a la lectura y validación de la información contenida en los archivos magnéticos y se verificará si ella responde a los datos contenidos en el formulario de declaración jurada generado por el sistema.

De comprobarse errores, inconsistencias, utilización de un proceso distinto del provisto o la presencia de archivos defectuosos, la presentación será rechazada, generándose una constancia de tal situación.

De resultar aceptada la información, se entregará un acuse de recibo, como comprobante de recepción.

De efectuarse una declaración jurada rectificativa, se entregará un nuevo soporte magnético que abarcará todos los conceptos incluidos en la presentación originaria, considerándose sustitutiva de la primera.

Cuando se verifique la situación prevista en el párrafo anterior se considerará, a todo efecto, la fecha correspondiente a la presentación rectificativa.

Artículo 8º — Respecto de los elementos presentados de acuerdo con el artículo anterior, el juez administrativo competente podrá requerir que se subsanen las omisiones o deficiencias observadas, dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos inmediatos siguientes al de la fecha de su presentación.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el juez administrativo otorgará al responsable un plazo no inferior a DIEZ (10) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de disponer el archivo de las actuaciones.

Artículo 9º — La solicitud será considerada formalmente admisible sólo cuando el juez administrativo haya recibido el expediente descrito en el artículo 6º, completo en todas sus partes, en las condiciones que exige el presente régimen, y:

a) Transcurrido el plazo indicado en el primer párrafo del artículo anterior, no se haya formulado el citado requerimiento, o

b) las omisiones o deficiencias detectadas se subsanen, dentro del plazo mencionado en el segundo párrafo del artículo anterior.

La fecha en la que se considerará a la presentación como formalmente admisible, será la de presentación de los elementos indicados en el segundo párrafo del artículo 7º o la que surja del inciso b) precedente, según corresponda.

CAPITULO IV - REGIMEN ESPECIAL DE DEVOLUCION

Artículo 10. — La procedencia de la solicitud será resuelta por el juez administrativo competente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, dentro del plazo de SESENTA (60) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que la solicitud resulte formalmente admisible.

En el mencionado término, podrán solicitarse las aclaraciones y/o el aporte de la documentación complementaria que resulten necesarios para la evaluación de la solicitud. El plazo otorgado para su cumplimiento tendrá carácter suspensivo.

Una vez resuelta la procedencia de la solicitud, el juez administrativo emitirá una comunicación, en la que consignará:

a) El importe del impuesto al valor agregado facturado.

b) La fecha a partir de la cual surte efecto la solicitud de devolución.

c) Cuando corresponda, los fundamentos que avalen la detracción o impugnación —total o parcial—, de los importes declarados por el beneficiario.

d) El importe a devolver.

Dicho acto administrativo servirá de constancia del trámite realizado y será notificado al solicitante. El pago se hará efectivo dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos inmediatos siguientes a la fecha de emisión de la aludida comunicación.

Artículo 11. — Están excluidos del régimen reglado en el presente capítulo:

a) Los sujetos indicados en el artículo 1º, cuando:

1. Hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en las Leyes N° 23.771 y sus modificaciones o N° 24.769, según corresponda, siempre que se les haya dictado prisión preventiva o, en su caso, exista auto de procesamiento vigente a la fecha de interposición de la solicitud.

2. Hayan sido querellados o denunciados penalmente, por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones impositivas o aduaneras, propias o de terceros. Cuando el querellante o denunciante sea un particular —o tercero—, la exclusión sólo tendrá efectos cuando concorra la situación procesal indicada en el punto 1. precedente.

3. Estén involucrados en causas penales, en las que se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus funciones, siempre que concorra la situación procesal indicada en el punto 1. anterior.

Quedan comprendidos en la exclusión las personas jurídicas, las agrupaciones no societarias y/o cualquier otro ente colectivo cuyos gerentes, socios gerentes, directores u otros sujetos que ejerzan la administración social, como consecuencia del ejercicio de dichas funciones, se encuentren involucrados en alguno de los supuestos previstos en el párrafo anterior.

b) Los créditos provenientes de las facturas o documentos equivalentes, que tengan una antigüedad mayor a VEINTICUATRO (24) meses calendario a la fecha de interposición de las respectivas solicitudes ante la autoridad de aplicación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación, para las facturas o documentos equivalentes cuyo impuesto al valor agregado facturado corresponda a adquisiciones de bienes de uso, siempre que se presente una nota en la que se fundamenten los motivos por los cuales el crédito fiscal correspondiente tiene una antigüedad mayor a VEINTICUATRO (24) meses.

c) Las solicitudes que se encuentren en trámite o que se interpongan, cuando — como consecuencia de las acciones de verificación y fiscalización a que se refiere el artículo 33 y concordantes de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones—, se compruebe respecto de solicitudes ya tramitadas, la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen al reintegro efectuado.

CAPITULO V – REGIMEN DE DEVOLUCION SUJETO A FISCALIZACION

Artículo 12. — Se tramitarán por el presente capítulo conforme lo establecido en el Anexo VI de esta norma, las solicitudes presentadas por los sujetos indicados en el inciso a) del artículo anterior, así como aquéllas respecto de las cuales se constate alguna de las situaciones previstas en los incisos b) y c) del citado artículo.

Artículo 13. — Cuando se produzca la causal de exclusión prevista en el artículo 11, inciso c) (verificaciones practicadas que determinen la ilegitimidad o improcedencia del crédito fiscal, respecto de solicitudes tramitadas), lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará tanto a las solicitudes en curso a la fecha de notificación del acto administrativo que disponga la impugnación, total o parcial, del crédito fiscal reintegrado, así como a las interpuestas con posterioridad a la citada fecha, que se indican a continuación:

a) Las DOS (2) primeras solicitudes, cuando:

1. El monto del crédito fiscal impugnado se encuentre comprendido entre el CINCO POR CIENTO (5%) y el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la solicitud de devolución observada, previo al cómputo de las compensaciones que hubieran sido procedentes, o

2. el monto del crédito fiscal impugnado resulte inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del monto indicado en el punto anterior y el responsable no conforme el ajuste efectuado.

b) Las CUATRO (4) primeras solicitudes, cuando:

1. El monto del crédito fiscal impugnado resulte superior al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la solicitud de devolución observada, previo al cómputo de las compensaciones que hubieran sido procedentes,

2. se tratara de reincidencias dentro de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y el responsable no conforme el ajuste efectuado.

CAPITULO VI - OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 14. — Los bienes por los que se podrá solicitar el beneficio podrán ser nuevos o usados, en la medida que se encuentren en condiciones de aptitud para operar.

A los fines del presente régimen, además de la compraventa están incluidos la locación y el "leasing". En el caso de los bienes usados, la importación se ajustará a la normativa que reglamenta la nacionalización de los mismos.

Artículo 15. — En el anverso de todos los originales de la documentación indicada en el artículo 4º, y en las facturas de compra de bienes y servicios sujetos al régimen de devolución, los solicitantes deberán insertar la leyenda "Ley N° 24.196 Artículo 14 bis. Devolución incluida en la devolución del año" (15.I.), dejando constancia el escribano público que autentique las copias, que tal leyenda se encuentra en el original.

Artículo 16. — Los créditos fiscales computados por el responsable en el impuesto al valor agregado, por importaciones o adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios que legalmente otorguen derecho a gozar del beneficio, serán netos de los conceptos que disminuyen el precio de tales operaciones (bonificaciones, descuentos, quitas, etc., obtenidos por los mismos bienes o servicios). Este régimen de devolución alcanza también a los créditos fiscales originados por los conceptos comprendidos en el artículo 10, quinto párrafo, inciso 1) de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Artículo 17. — En el supuesto de verificarse pagos parciales, se presumirá sin admitir prueba en contrario que los importes cancelados operan en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado.

Artículo 18. — Los beneficiarios no podrán transferir, a título gratuito u oneroso, los bienes por los cuales hubieran obtenido los beneficios del presente régimen, salvo autorización previa de la Autoridad de Aplicación, quien la otorgará cuando la enajenación no afecte al desarrollo del proyecto

Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará de aplicación por el plazo de ejecución de las tareas exploratorias y hasta que el área comprendida en la exploración no sea objeto de formal liberación — salvo concesiones de explotación y/o minas de tercera categoría— y se haya dado cumplimiento al suministro de información dispuesto

por el artículo 27 de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones y su reglamento, o en el Código de Minería.

Artículo 19. — El importe a devolver será verificado mediante la utilización de medios informáticos, que permitan constatar —entre otros aspectos— dicho monto con la información que posee en su base de datos, la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Artículo 20. — La DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA, podrá suspender la aplicación de este régimen, sin necesidad de sumario o trámite alguno, notificando fehacientemente al interesado, cuando tenga conocimiento de que los derechos mineros referidos en el artículo 2º, inciso a), punto 2., han perdido vigencia, ya sea en forma temporal o definitivamente, o que se ha dictado una sanción de clausura o cierre (artículo 264 y concordantes del Código de Minería) o una medida de suspensión de los trabajos u otra, que inhabilite a realizar tareas de exploración.

Asimismo, dicha suspensión implicará la imposibilidad de gozar del beneficio de devolución de los créditos fiscales provenientes de adquisiciones o importaciones efectuadas, a partir de su notificación.

Artículo 21. — La comunicación que se emita conforme a lo dispuesto en el artículo 10, no enerva las facultades de la Autoridad de Aplicación y de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, para efectuar los actos de verificación y determinación de las obligaciones a cargo del contribuyente.

Artículo 22. — El acto administrativo indicado en el artículo 10, podrá impugnarse mediante la vía recursiva prevista en el artículo 74 de la Reglamentación de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Artículo 23. — De tratarse de sujetos que registren incumplimientos respecto de la presentación de declaraciones juradas vencidas, relacionadas con sus obligaciones impositivas y/o previsionales, el cómputo del plazo que establece el primer párrafo del artículo 10, se interrumpirá hasta que el contribuyente haya dado cumplimiento a las citadas obligaciones.

Los responsables que tengan deudas por aportes y/o contribuciones con destino al Sistema Unico de Seguridad Social, deberán cancelar las mismas, como condición previa a la devolución del monto que resulte procedente.

Artículo 24. — En las solicitudes interpuestas por los artículos 10 o 12, el juez administrativo competente queda facultado para disponer la detracción, de los montos a cuyo respecto se detecten:

- a) Facturas o documentos equivalentes que correspondan a proveedores con Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) no válida y/o inexistente.
- b) Facturas o documentos equivalentes apócrifos.
- c) Proveedores que no revistan la calidad de responsables inscritos en el impuesto al valor agregado
- d) Proveedores que registren bajas en el impuesto al valor agregado con anterioridad a la fecha de emisión de la factura o documento equivalente.
- e) Proveedores que registren altas en el impuesto al valor agregado con posterioridad a la fecha mencionada en el inciso precedente.
- f) Facturas que no se encuentren en un rango de Código de Autorización de Impresión (CAI), autorizado y vigente a la fecha de su emisión.
- g) Demás situaciones que determinen la improcedencia del crédito fiscal en el impuesto al valor agregado.

Artículo 25. — Las notas que deban presentarse de acuerdo con lo dispuesto en esta norma, deberán estar firmadas por el responsable o persona debidamente autorizada, precedida por la fórmula indicada en el artículo 28, "in fine", del Decreto Reglamentario de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 26. — Los contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente, hubieren realizado operaciones por las que tuvieran derecho a gozar de los beneficios establecidos por el artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, sus normas reglamentarias y complementarias, deberán efectuar la presentación de una única solicitud de devolución a partir de la fecha de aplicación de esta norma y hasta el último día hábil del segundo mes siguiente. En la mencionada solicitud deberán incluirse las operaciones realizadas desde la vigencia del régimen especial, por las que

corresponda el beneficio. No resultará de aplicación en el presente supuesto lo establecido en el inciso b) del artículo 11, así como lo establecido en el primer párrafo del artículo 3º.

A los fines dispuestos en este artículo, se duplicarán los plazos establecidos en el artículo 10, para su resolución.

Artículo 27. — Apruébanse los Anexos I a VI, que forman parte de esta norma.

Artículo 28. — La presente norma será de aplicación a partir de los TREINTA (30) días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

Artículo 29. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad. — Jorge O. Mayoral.

ANEXO I

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES

Artículo 1º.

(1.1.) De conformidad con el régimen especial establecido en el artículo 14 bis de la Ley Nº 24.196 y sus modificaciones.

(1.2.) Por débitos fiscales en virtud de las disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado.

(1.3.) Régimen establecido por Ley Nº 25.360: suspendido hasta el 31/12/2004 en virtud de la Ley Nº 25.868, artículo 1º.

Artículo 2º.

(2.1.) En la oportunidad correspondiente según lo previsto en el artículo 3º de la presente.

(2.2.) Actividades mineras consistentes en prospección, exploración, ensayos mineralúrgicos e investigación aplicada, de acuerdo con el Anexo I de la Resolución S.M. Nº 33/03 de fecha 21 de agosto de 2003.

(2.3.) Se trata del saldo a favor contemplado en el primer párrafo del artículo 24 de la ley del gravamen.

El monto sujeto a devolución se deducirá en el campo "Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables" de la

pantalla "Determinación del impuesto" del programa aplicativo vigente del impuesto al valor agregado.

(2.4.) Crédito fiscal: el que se originó en las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios determinados en la Resolución S.M. N° 33/03 de fecha 21 de agosto de 2003.

Los bienes de capital comprendidos son aquellos que revisten la calidad de bienes muebles o inmuebles amortizables para el impuesto a las ganancias, e integran el patrimonio del contribuyente y/o responsable al momento de la solicitud de devolución, excepto cuando haya mediado caso fortuito o de fuerza mayor debidamente probado y en la medida que tales bienes encuadren en la resolución citada.

Artículo 4°.

(4.1.) Artículo 1° de la Resolución General N° 301 (AFIP), sus modificatorias y complementaria.

(4.2.) Tratándose de bienes de capital no será de aplicación el régimen especial de devolución cuando, al momento de su solicitud, los bienes no integren el patrimonio del solicitante, excepto que haya mediado caso fortuito o de fuerza mayor —incendios, tempestades u otros accidentes o siniestros — debidamente probado.

Artículo 15.

(15.1.) Completar con: "primera" o "segunda", según corresponda e indicar el año correspondiente

DEVOLUCION DEL IVA A LA EXPLORACION. DEFINICION DE BIENES Y SERVICIOS ALCANZADOS

Resolución N° 83/04 (1/10/2004)

Déjase sin efecto la Resolución N° 33/2003 y establécese un listado de bienes y servicios por los cuales se podrá solicitar el beneficio instituido en el Artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras y modificatorias.

VISTO el Expediente N° S01:0089694/2003 del Registro del ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 33 de fecha 21 de agosto de 2003 de la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, establece los bienes y servicios por los cuales se podrá solicitar el beneficio instituido por el Artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, los cuales son enunciados en el Anexo de la misma.

Que la adquisición de bienes de consumo y el alquiler de bienes en general, se encuentran limitados a que la contratación se efectúe en la zona de la exploración minera exclusivamente y que idéntica limitación sufre la contratación de servicios de reparación de infraestructura y equipos.

Que varias de las áreas de exploración minera se encuentran situadas en regiones apartadas de centros poblacionales importantes factibles de proveer ciertos bienes y servicios, habiéndose detectado desde que rige la Resolución N° 33 de fecha 21 de agosto de 2003 de la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, que las empresas han tenido la necesidad de adquirir bienes de consumo, combustibles en grandes cantidades, efectuar reparaciones de equipos o alquilar bienes fuera de la zona propiamente dicha de exploración, entre otros.

Que de la Nota N° 329 de fecha 30 de junio de 2004 de la Dirección de Inversiones y Normativa Minera de la DIRECCION NACIONAL DE MINERIA dependiente de la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, surge que la limitación mencionada

resulta un real impedimento para la obtención del beneficio en determinadas áreas de exploración.

Que atento a lo expuesto resulta conveniente posibilitar la adquisición o arrendamiento de determinados bienes o servicios fuera de la zona de exploración cuando la empresa acredite, a satisfacción de la Autoridad de Aplicación, la necesidad de la contratación fuera de dicha zona, por la imposibilidad de obtenerlos en la cantidad o calidad necesarias.

Que atento a la falta de publicación oportuna de la Resolución N° 33 de fecha 21 de agosto de 2003 de la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y dadas las dificultades de su aplicación, hacen necesario dejarla sin efecto y proceder al dictado de una nueva norma que contemple la realidad de las empresas mineras exploradoras en lo referente a la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 9° del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente resolución se dicta en razón de las facultades conferidas por los Artículos 14 bis y 24 de la Ley N° 24.196 y por el Artículo 14 bis, inciso a) del Decreto N° 2686 de fecha 28 de diciembre de 1993, modificado por el Decreto N° 1089 de fecha 7 de mayo de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE MINERIA

RESUELVE:

Artículo 1° — Dejase sin efecto la Resolución N° 33 de fecha 21 de agosto de 2003 de la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Artículo 2° — Los bienes y servicios por los cuales se podrá solicitar el beneficio instituido en el Artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras y modificatorias, son los que se enuncian en el Anexo que con DOS (2) fojas forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge O. Mayoral.

ANEXO

1. Bienes de capital, partes y repuestos para:
 1. Transporte de personas y bienes
 2. Movimiento de suelos y rocas
 3. Obras de infraestructura física consistentes en: obras viales, captación y transporte de agua, desagües, generación y transporte de energía, campamentos, viviendas para el personal y edificaciones auxiliares con su equipamiento, sistemas de comunicaciones, sanidad, educación y esparcimiento
 4. Estudios, análisis, ensayos y muestreos, tanto en el terreno como en gabinete y laboratorio
 5. Voladuras y perforaciones de suelo y rocas
 6. Procesamiento de información
2. Bienes de consumo necesarios para la exploración adquiridos en la zona de las tareas de exploración exclusivamente o, fuera de ella, cuando la empresa acredite ante la Autoridad de Aplicación y a satisfacción de la misma, la imposibilidad de obtener en la cantidad o calidad suficientes de dichos bienes en la zona de la exploración .
3. Alquiler de bienes para la exploración arrendados en la zona de las tareas de exploración exclusivamente o, fuera de ella, cuando la empresa acredite ante la Autoridad de Aplicación y a satisfacción de la misma, la imposibilidad de obtener en la cantidad o calidad suficientes de dichos bienes en la zona de la exploración.
4. Servicios:
 1. Análisis y ensayos químicos, geoquímicos y mineralógicos
 2. Estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, mineralógicos, topográficos, geodésicos, sensores remotos, mecánica de rocas y suelos, mineralúrgicos, metalúrgicos, ambientales, hidrológicos, hidrogeológicos, de prefactibilidad y factibilidad de los recursos mineros explorados.
 3. Perforación de suelos y rocas.
 4. Voladuras y movimiento de suelos y rocas.

5. Construcción y reparación de infraestructura física ubicada en la zona de exploración.
6. Servicios generales (alimentación, limpieza, seguridad, medicina laboral y mantenimiento) efectuados en la zona de las tareas de exploración exclusivamente.
7. Transporte de bienes y personas.
8. Comunicaciones
9. Reparación de equipos.

ACTIVIDAD MINERA

Resolución General 1761

Inversiones Mineras. Solicitud de devolución de los créditos fiscales originados en las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios. Resolución General Conjunta N° 1641- AFIP y N° 11/2004-SM. Programa aplicativo. Norma complementaria.

Bs. As., 27/10/2004

VISTO la Resolución General Conjunta N° 1641 (AFIP) y N° 11/04 (S.M.),
y

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución general dispuso las formalidades, plazos y otros requisitos que deben observar los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado comprendidos en el régimen especial establecido por el artículo 14 bis de la Ley N° 24.196 y sus modificaciones, a fin de obtener la devolución de los créditos fiscales originados en las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios alcanzados por el mismo.

Que en tal sentido, corresponde especificar el programa aplicativo mediante el cual se elaborará la información, a los efectos de la presentación de la solicitud de devolución.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Legislación, de Informática de Fiscalización, de Información Estratégica para Fiscalización y de Programas y Normas de Fiscalización.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto N° 618, de fecha 10 de julio de 1997, su modificatorio y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1º — Los sujetos alcanzados por el régimen especial de devolución de créditos fiscales del impuesto al valor agregado, reglamentado por la Resolución General Conjunta N° 1641 (AFIP) y N° 11/04 (S.M.), a los fines de efectuar la solicitud de dicha devolución, deberán utilizar el programa aplicativo denominado "RECUPERO DE IVA - REGIMENES ESPECIALES - Versión 2.0", aprobado mediante la Resolución General N° 1757.

El referido programa aplicativo podrá ser transferido de la página "web" de este organismo (<http://www.afip.gov.ar>).

Art. 2º — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

—FE DE ERRATAS—

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución General N° 1761

En la edición del 29 de octubre de 2004, en la que se publicó la mencionada Resolución General, se deslizó tanto en el Sumario como en el encabezamiento de la norma el siguiente error:

DONDE DICE: Resolución Conjunta N° 164-AFIP y N° 11/2004-SM.

DEBE DECIR: Resolución Conjunta N° 1641-AFIP y N° 11/2004-SM.

INFORME FINAL

En nuestro País existen innumerables yacimientos mineros sin explotar, el Estado en el entendimiento de que se trata de una actividad productiva significativa que incide considerablemente en el crecimiento de las economías regionales, fomenta su desarrollo en busca de capitales, dictando normas que otorguen un marco legal para el desarrollo de la actividad proporcionando de ese modo seguridad jurídica.

La multiplicidad de normas dictadas, con posterioridad a la sanción del Código de Minería a los fines de la regulación de la actividad, dificultan el acceso a las mismas, ya que quien decide explotar una mina se encuentra frente a una universalidad de normas disgregadas dentro del ordenamiento jurídico, dificultando la información y haciendo más parsimonioso el logro de sus fines.-

Por lo expuesto, ante tales inconvenientes, al proyectar el trabajo se plasmó como objetivo fundamental la posibilidad de brindar una plataforma jurídica a quienes ignoran los conceptos fundamentales del derecho minero y que se encuentren interesados en desarrollar tal actividad. Es la persona común, inexperta en el campo del derecho minero, el destinatario del presente estudio.-

De este modo en el Tema I, a modo introductorio se brindaron conceptos fundamentales del derecho minero y los distintos pasos desde la exploración hasta la explotación, pasando por las etapas de descubrimiento, concesión. Como así también leyes nacionales regulatorias de la actividad.-

En el Tema II, se hizo específica referencia a la legislación minera en la Provincia de Salta, analizando la Legislación Minera y de Áridos vigentes como asimismo, los distintos regímenes procedimentales, tales como el Código de Procedimiento Minero.-

En el Tema III, al ser la actividad minera, una actividad de fomento se analizaron los beneficios impositivos otorgados a quienes se dediquen a la actividad. Fundamentalmente el Principio de Estabilidad Fiscal y Régimen para la devolución del Iva.-